PENSAR LA *RESISTENCIA*: MAYO DEL 2021 EN CALI Y COLOMBIA

DOCUMENTOS ESPECIALES CIDSE No. 6

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Universidad del Valle

Cidse

Universidad del Valle

PENSAR LA *RESISTENCIA*:
MAYO DEL 2021 EN CALI Y COLOMBIA

DOCUMENTOS ESPECIALES
CIDSE No. 6

Universidad del Valle

PENSAR LA *RESISTENCIA*: MAYO DEL 2021 EN CALI Y COLOMBIA

DOCUMENTOS ESPECIALES
CIDSE No. 6

Cidse

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas
Universidad del Valle

No. 6 DE LA SERIE
“DOCUMENTOS ESPECIALES DEL CIDSE”

ISSN: 0123-4013.

Créditos:
Centro de Investigación y Documentación Socioeconómica, Cidse
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas
Universidad del Valle

Oficina 2028 Edificio D12, Ciudad Universitaria Meléndez, Cali
https://socioeconomia.univalle.edu.co/publicaciones-socioeconomia/documentos-especiales
email: cidse@correounivalle.edu.co
Teléfonos: 57- 2- 3212347

Decanatura Facultad de Humanidades - Centro Virtual Isaacs - Unidad de Artes Gráficas
Diseño, diagramación y promoción en redes virtuales del CVI.

Imagen de portada: Leonardo López Ibarra

CONTENIDO

Presentación
Pedro Quintín Quilez 9

LO NACIONAL

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN COLOMBIA?
Poder, legitimidad y crisis social
Alberto Valencia Gutiérrez 15

OTRA VUELTA DE TUERCA
La codicia de las élites en la pandemia
Carlos Humberto Ortiz Quevedo 41

REFLEXIONES SOBRE PRÁCTICAS Y CULTURAS POLÍTICAS EN EL PARO DEL 2021
José Fernando Sánchez Salcedo 53

"AL OTRO LADO DEL MIEDO ESTÁ EL PAÍS QUE SOÑAMOS":
Mujeres y feministas en el Paro Nacional del 2021
María Eugenia Ibarra Melo
Stephania Recalde García 67

LO LOCAL

ARDE CALI, SUCURSAL DEL CIELO Y CAPITAL MUNDIAL DE LA SALSA
Luis Carlos Castillo Gómez 95

DE LA MARCHA HACIA EL CENTRO
AL BLOQUEO EN LOS BARRIOS:
LAS LUCHAS POR RECONOCIMIENTO
Y OPORTUNIDADES EN CALI DURANTE
EL PARO NACIONAL DE ABRIL-MAYO DE 2021
Jorge Hernández Lara 127

NO SALGAS DE TU BARRIO: CALI ENTRE
EL HORROR Y LA ESPERANZA
Boris Salazar Trujillo 151

ALGUNOS FACTORES DESENCADENANTES
DEL LEVANTAMIENTO POPULAR EN CALI
Y SU REGIÓN METROPOLITANA
Fernando Urrea-Giraldo 167

LA SITUACION DEL PARO NACIONAL EN CALI
Intervención en foro programado por la Sociedad
de Mejoras Públicas de Cali
Álvaro Guzmán Barney 183

DESDE EL EXTERIOR

LEJOS, PERO NO AUSENTES.
MOVILIZACIONES DIASPÓRICAS
EN EL PARO NACIONAL DEL 2021
María Gertrudis Roa
Jan Grill 201

PRESENTACIÓN

Hace poco más de un mes se produjo un inmenso estallido social que ha puesto en tensión la vida colectiva en Colombia. Es en Cali donde esa crisis ha tenido su expresión más fuerte. Dado que aún no ha sido superada y persisten muchas incertidumbres, tanto sobre la forma de su desenlace como sobre el momento de su finalización, resulta sin duda prematuro ofrecer un balance definitivo.

Sin embargo, sí es posible plantear perspectivas analíticas y presentar elementos empíricos que pueden contribuir no solo a una mejor comprensión de lo que está acaeciendo, sino también ayudar a esbozar posibles vías de solución. Es por esa razón que -en medio de tan dolorosos y al tiempo esperanzadores momentos-, los profesores de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas han estado participando en distintos eventos académicos y han hecho intervenciones públicas en distintos medios. Al calor de los acontecimientos, ellos han puesto en marcha los saberes y habilidades de sus respectivas disciplinas (la economía, la sociología, la historia, el análisis político, las perspectivas feministas) y su propia experiencia investigativa para tratar de entender lo que está aconteciendo.

En esta compilación se recogen algunos de esos aportes: se trata de textos en que se condensan y consolidan las aproximaciones, las reflexiones y los análisis expuestos y discutidos en esos escenarios, enriquecidos en muchas ocasiones por las preguntas, inquietudes y comentarios de los otros participantes y

asistentes a los eventos. De hecho, en estas tan intensas semanas transcurridas, esos intercambios les han permitido amalgamar nuevas experiencias, atender a distintas formas de aproximarse a los acontecimientos y reelaborar así sus perspectivas iniciales.

Es evidente que la inmediatez y cercanía del fenómeno estudiado implican que lo que acá se expone es aún provisional, sujeto a posteriores ajustes; pero también lo es el hecho de que, en medio de estas circunstancias, la tarea de una institución como la universidad pública es poner al servicio de la sociedad aquello a lo que la orienta su ineludible misión en términos de investigación: aportar elementos que contribuyan a un mejor entendimiento de lo que nos sucede y proponer caminos para superar las dificultades presentes y los retos que tenemos por delante.

La primera parte de la compilación, compuesta por cuatro textos, permite situar a nivel nacional el fenómeno del Paro Nacional y contextualizar los acontecimientos que se han producido en Cali durante este último mes. En el primero, Alberto Valencia reconstruye el proceso histórico vivido durante las últimas décadas para mostrar la peculiar y compleja situación a la que llegó el país en términos de falta de legitimidad política y crisis social. A continuación, Carlos Humberto Ortiz atiende a las dimensiones económicas que llevaron a que, en medio de las graves afectaciones para la población por causa de la pandemia Covid-19, una torpe propuesta de reforma tributaria se convirtiera en el detonador de una amplia movilización social. En su texto, José Fernando Sánchez reconstruye algunas de las características centrales de las prácticas y culturas políticas colombianas, así como muestra la fragilidad de nuestro sistema social a la hora de tramitar los conflictos. Esta parte termina con el aporte de María Eugenia Ibarra y Stephanía Recalde sobre el papel que las mujeres y las feministas han jugado durante estas últimas semanas, reconstruyendo tanto la forma en que sus reclamos se vinculan a

procesos previos, como las nuevas inquietudes suscitadas durante una movilización en la que las mujeres han ocupado un lugar destacado.

La segunda parte, con cinco textos, se centra en el estudio de lo acontecido en la ciudad de Cali y su región metropolitana, precisamente allí donde el estallido social colombiano ha alcanzado las más altas cuotas de expresión, pero también de violencia y sufrimiento. En el primero, Luis Carlos Castillo describe y ubica los principales elementos de la movilización caleña, con especial atención al desarrollo temporal de los acontecimientos y a su ubicación en los distintos espacios de la ciudad. A continuación, Jorge Hernández disecciona con precisión y detalle los cambios experimentados en las formas de movilización y el ajuste constante de los repertorios de acción de los participantes. Sigue el texto de Boris Salazar, que tiene como protagonistas a los jóvenes de la ciudad quienes, afectados profundamente por las dificultades económicas y el impacto de la violencia, han sido actores principales durante la movilización. Por su parte, Fernando Urrea explora los posibles factores que habrían dado el cariz especial al estallido social de Cali y la región metropolitana, un espacio atravesado por fuertes divisiones de clase y raza, y altos índices de segregación espacial. Finalmente, Álvaro Guzmán aporta algunas notas orientadas a desentrañar las fuerzas y dinámicas que han estado presentes en la ciudad y hacen más comprensible lo acontecido en estas semanas.

La tercera parte recoge el texto de María Gertrudis Roa y Jan Grill, en el que reconstruyen con detalle las movilizaciones de apoyo producidas a nivel internacional, especialmente -aunque no solo- en aquellos países con mayor presencia de la migración colombiana.

El CIDSE y la Facultad agradecen la generosidad de nuestros colegas al aceptar publicar estos textos, así como el esfuerzo realizado para alistarlos en tan corto tiempo; también agradecen a

la Facultad de Humanidades de nuestra Universidad su gentileza al ofrecer prestamente sus servicios de edición digital.

Pedro Quintín Quilez
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas
Universidad del Valle

Cali, mayo 31 del 2021

LO NACIONAL

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN COLOMBIA?
Poder, legitimidad y crisis social

Alberto Valencia Gutiérrez[1]

Colombia está viviendo en este momento una situación que tiene pocos antecedentes en la historia de las últimas décadas. Un paro que ha movilizado de manera espontánea una enorme cantidad de ciudadanos, de origen heterogéneo, con fuerte presencia de los jóvenes, sin que ninguna agrupación política u organización social o sindical pueda reivindicar para si una iniciativa exclusiva. La movilización ha estado acompañada de violencia y de actos vandálicos, protagonizados por personas de procedencia diversa (disidencias de las FARC, grupos del ELN, pandillas juveniles, elementos de narcotráfico, ciudadanos del común, jóvenes e incluso infiltrados); ha hecho presencia en buena parte del territorio nacional y no se ha limitado a un solo día sino que ha perdurado por varias semanas. La reacción de las fuerzas del orden ha sido brutal en muchos casos y ha suscitado rechazos tanto dentro del país como desde el exterior.

Una crisis similar a ésta, pero de mayores proporciones, se podría encontrar el 9 de abril de 1948, día del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Al igual que la conmoción que se produjo desde el domingo 19 de abril de 1970 como consecuencia del burlado triunfo electoral de Gustavo Rojas Pinilla en las elecciones pre-

[1] Sociólogo, Doctor en Sociología. Profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle. Integrante del grupo de investigación Memoria, Historia y Sociedad vinculado al Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica (CIDSE) de la misma universidad. Columnista del periódico El País de Cali.

sidenciales de ese año; el paro del 14 de septiembre de 1977 que produjo 18 muertes en Bogotá y otras ciudades del país y la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.

Los hechos sucedidos durante estos días han sido objeto de múltiples valoraciones, desde aquellos que los rechazan indignados y proponen la intervención brutal de la fuerza pública para contener los desmanes, hasta los que los consideran como una legítima reivindicación popular, consecuencia de las precarias condiciones actuales. Lo importante es optar por la comprensión de lo que tenemos ante nuestros ojos en este momento, teniendo en cuenta que comprender no es justificar.

El analista social debe responder a la exigencia de mantener una "neutralidad valorativa", según la célebre expresión de Max Weber. Ni la admiración ni el rechazo deben servir de guía para orientar la indagación. Hay que preguntar simplemente en qué consiste lo que está pasando, cuál es su dinámica, cuál es su lógica interna, cómo se inscribe en la secuencia histórica de las últimas décadas, quiénes son sus protagonistas, cómo interactúan, qué objetivos proponen, y así por el estilo.

Además, si queremos comprometernos en una acción transformadora de una situación lo más importante es comenzar por su comprensión. *Savoir pour prevoir* era la consigna de los filósofos del siglo XVIII, en el momento en que se estaban creando las ciencias naturales. Ideales similares de comprensión se expresan, aunque en direcciones opuestas, en la obra de Auguste Comte o Karl Marx. El primero buscaba apuntalar la sociedad de su época sobre nuevas bases y el segundo transformarla, pero ambos consideraban que el trabajo científico era una precondición indispensable para la realización de sus objetivos.

Ningún fenómeno social se deriva de un solo aspecto. Debemos asumir la realidad como una configuración de elementos heterogéneos, confluencia de series causales de origen diverso, marcadas por diferentes niveles de particularidad o generalidad,

con temporalidades diversas, que conforman una causalidad inédita, que no está presente en cada uno de sus componentes tomados aisladamente. Es necesario entonces "desagregar" los aspectos que se confunden en los hechos empíricos, estudiarlos por separado y luego mostrar la forma como se articulan.

En este momento confluyen un sinnúmero de elementos para producir el resultado que tenemos a la vista: la difícil situación social que se ha presentado en las últimas décadas, en Colombia y en otros países latinoamericanos, como consecuencia de las políticas neoliberales; la pandemia ha agravado esta situación, debido no sólo a la magnitud del nuevo problema que se ha presentado sino a la manera torpe como ha sido gestionado por los gobiernos; la violencia imperante en este momento tal como se manifiesta en la muerte de líderes sociales, masacres, disputas entre grupos de narcotraficantes, disidencias de las FARC, grupos del ELN; los avatares que ha sufrido el proceso de paz durante los últimos seis años. A esto habría que agregar el peso de situaciones locales como las que conocemos en Cali: las migraciones provenientes del Pacífico, las pandillas, los jóvenes sin futuro ("ninis"), las malas administraciones municipales, la ausencia del Estado, etc.

La hipótesis que proponemos es que no estamos simplemente frente a una crisis social, que ha hecho que las gentes se boten a las calles a reclamar asistencia y defender sus derechos, como resultado de necesidades insatisfechas, la pobreza y la miseria, la falta de oportunidades, el desempleo crónico agravado por la coyuntura. Las cifras nos indican que estamos frente a una verdadera "explosión social" en todo el país.

En el año 2020 el 42.5% de los habitantes, equivalente a 21.2 millones, se encontraba por debajo de la línea de pobreza, 3.8% más que en 2019, en un momento en que la línea de pobreza en América Latina era del 33.7% (8.8 puntos menos que Colombia). Existe un número de ciudadanos que sobreviven con menos

de $331.168 pesos mensuales equivalentes a 87 dólares. El 65% de la población sólo puede comer dos veces al día y más de un millón y medio de personas una sola vez. El desempleo gira alrededor del 17% y la difícil situación de los sectores informales de la economía, gente que trabaja un día para poder comer al día siguiente. El coeficiente de Gini de 0.53 es el segundo más alto después de Haití, país inviable por su pobreza y desinstitucionalización.

Habría que preguntar hasta qué punto una situación extrema de pobreza y de miseria produce una conmoción como la que estamos viviendo. Muchos mecanismos de control social podrían funcionar para que esto no ocurriera e, incluso, existiría la posibilidad de impulsar proyectos colectivos desde el Estado o desde las organizaciones sociales para superar esta situación. Además, la situación actual no es realmente nueva, ya que se trata de una "deuda social" que se ha ido agravando progresivamente. ¿Por qué se desencadena precisamente en este momento y no antes?

La idea que queremos proponer es que lo sucedido es el resultado de la confluencia de dos procesos: una gran crisis social y una crisis política e institucional, resultado de una progresiva pérdida de legitimidad del ejercicio del poder por parte del Estado, que finalmente se agravó en las condiciones en que se ha desarrollado el gobierno de Iván Duque. La confluencia de ambas condiciones nos permite explicar lo que está sucediendo y lo que podría ocurrir en el futuro inmediato: un proceso revolucionario de consecuencias impredecibles, una solución de fuerza o la aceleración de un tercer ciclo de violencia. Otra salida estaría por inventarse.

Los antecedentes

Colombia conoció entre 1946 y 1965 un primer ciclo de violencia de grandes proporciones conocido como la *Violencia* (con mayúscula), que enfrentó a los partidos Liberal y Conservador,

en una lucha sangrienta caracterizada por la sevicia y el horror. A partir de 1958 las cifras de homicidios comienzan a disminuir y conocemos un par de décadas relativamente tranquilas con respecto a lo que había sucedido. Desde mediados de los años 1980, incluso desde antes -algunos hablan del paro del 14 de septiembre de 1977 como el punto de quiebre- se produce un segundo ciclo de violencia de grandes proporciones, atizado por la fuerza del narcotráfico y otras fuentes de riqueza, que hacen posible la financiación de los grupos armados. La Constitución de 1991 se presentó como un "acuerdo de paz" para poner fin al conflicto, pero finalmente resultó inocua. El crecimiento de los grupos armados durante la década de 1990 fue exponencial, sorpresivo incluso para sus propios protagonistas.

Desde mediados de 1980 se conforman los grupos de "autodefensa" para hacer frente a la lucha "contrainsurgente", pero rápidamente encuentran en el narcotráfico o en la lucha por el control y la propiedad de la tierra razones para desarrollar sus propias agendas, más allá de lo puramente defensivo. El enfrentamiento violento llegó a ser insostenible entre 1995 y 1998. El Ejército colombiano sufrió las peores derrotas de su historia (Puerres, Patascoy, Las Delicias, la toma de Mitú, etc.). Las masacres se multiplicaron y el número de efectivos de los grupos armados alcanzó grandes proporciones, hasta el punto de que en algún momento llegamos a tener más de 55.000 hombres en armas. A finales de esta década el aprendizaje de la geografía del país ya no la hacíamos siguiendo el paso de los ciclistas de la Vuelta a Colombia por los lugares más apartados del país, como en épocas más felices, sino a partir de las masacres, que nos llevaban día a día a descubrir por la televisión y la prensa sitios recónditos de nuestro territorio: Honduras, La Negra, Punta Coquitos, La Mejor Esquina, El Salado, El Tigre, Bojayá, Granada, Comuna 13, el Naya, San Carlos, El Placer, Bahía Portete, etc.

Ante esta situación se abrió paso en la opinión pública la posibilidad de un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, que había logrado un gran dominio territorial y amenazaba, incluso, con cercar grandes ciudades como Bogotá. Este "giro de la opinión" hizo posible el nombramiento de Andrés Pastrana Arango como Presidente de Colombia, con el mandato de impulsar unas negociaciones, que efectivamente echaron a andar el 7 de enero de 1999. El país cifró sus ilusiones en este proceso pero finalmente todo terminó en un gran fracaso porque ni el gobierno ni las FARC estaban interesados realmente en una negociación y las conversaciones se utilizaban más como una especie de tregua, mientras se reorganizaban las fuerzas de la guerra. El gobierno optó por el conocido Plan Colombia con ayuda de los Estados Unidos para combatir inicialmente el narcotráfico pero luego se reorientó contra la guerrilla. Las FARC utilizaron los 42.000 km de la zona desmilitarizada del Caguán, para fortalecer sus fuerzas y crecer en número. Ante la arremetida de la guerrilla y la imposibilidad de llegar a un acuerdo, el Presidente se vio obligado en febrero de 2002 a clausurar las negociaciones, a pesar de que estas eran la justificación de su existencia.

La opinión pública dio un viraje total y se predispuso entonces a demandar medidas de fuerza para acabar con las guerrillas. En este marco llega a la Presidencia de la República un candidato disidente del Partido Liberal, que a comienzos del año apenas si competía en las encuestas con el margen de error, pero que en las elecciones de mayo resultó triunfador en primera vuelta con una diferencia apreciable de votos sobre su contendor (5.862.655 contra 3.514.779 de Horacio serpa). En ese momento "la gran mayoría de los colombianos fingía no saber nada de su pasado"; nadie se preguntaba por sus antecedentes en la Aeronáutica Civil o en la Gobernación de Antioquía, porque se presentaba simplemente como una persona "con carácter y mano dura", capaz de recuperar el dominio territorial del Estado y devolver la

tranquilidad a los ciudadanos. Nació así la política de Seguridad Democrática, orientada a aplastar militarmente a la guerrilla de las FARC como primera prioridad. Los grupos paramilitares comenzaron a darse cuenta de que su labor antisubversiva había sido asumida por el Estado y optaron igualmente por una negociación que comienza a concretarse en 2005.

El gobierno de Álvaro Uribe no escatimó medios para combatir a las guerrillas durante los primeros seis años con "resultados satisfactorios" para una parte de la opinión. Cualquier persona que hubiera llegado a la Presidencia de la República en 2002 debía enfrentar la tarea de recuperar el dominio territorial del Estado, en un momento en que las FARC hacían presencia en gran cantidad de municipios. Sin embargo, el problema no consiste simplemente en que el nuevo presidente hubiera realizado esta tarea sino en la forma como lo hizo.

El uso de medios ilegales para combatir a los grupos ilegales es una práctica que muchos Estados, bajo el ropaje de la "razón de Estado", han utilizado como estrategia para defender el orden social. Eso ocurrió, por ejemplo, en Francia con la guerra de Argelia que culmina en 1962 y eso ya existía en Colombia desde tiempos inmemoriales: el uso de las torturas o de las desapariciones, desde finales de los años 1970; la persecución de Pablo Escobar por parte del Estado durante el gobierno de César Gaviria se hizo con base en una alianza con el llamado "Cartel de Cali" para conformar un grupo que se dio en llamar los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar). La conformación de "grupos de autodefensa", en connivencia con sectores militares, que luego se llamarían "paramilitares", es la pieza maestra de esta forma de combatir la ilegalidad con la ilegalidad.

Los gobiernos anteriores habían utilizado la ilegalidad en cierto grado pero, con la llegada de Álvaro Uribe al poder, el uso de medios ilegales se entronizó en el corazón del Estado en una proporción que no existía antes, bajo la actitud complaciente de una

opinión pública que en ese momento estaba sintonizada con el "todo vale", con tal de acabar con las FARC. El paramilitarismo fue uno de los principales electores del nuevo gobierno (la"para-política"), parte significativa de los antiguos funcionarios de Uribe terminaron en la cárcel y la cifra de 6.402 "falsos positivos" (muchachos asesinados que se hacían pasar por guerrilleros para alcanzar prebendas en las filas militares) son un testimonio de la ilegalidad que se apoderó de la acción gubernamental. La primera pieza del argumento que queremos sustentar, la más importante tal vez, es que la situación que estamos viviendo hoy en día está "pasando la factura" del inmenso costo social que representó para el país el enfrentamiento de los grupos ilegales con medios ilegales.

El año 2008 representa un punto de quiebre para los actores en conflicto: las FARC y la política de Seguridad Democrática, la cual comienza a "hacer agua" desde ese momento. La muerte de Raúl Reyes en un campamento en el Ecuador es el punto de quiebre de esta organización, al igual que la muerte del legendario líder histórico Manuel Marulanda Vélez. Las FARC comprenden la nueva situación y se repliegan a la tradicional "guerra de guerrillas" en sus "santuarios históricos". De manera paralela se impone un cambio en la política gubernamental frente al conflicto.

En 2010 llega a la Presidencia de la República el antiguo Ministro de Defensa del presidente Uribe, con su pleno apoyo para continuar la tarea. El nuevo mandatario mantiene la política de persecución de las FARC hasta el punto de que termina con la vida de dos de los más importantes dirigentes de la organización: el 22 de septiembre de 2010 es abatido Jorge Briceño, ("mono Jojoy") y el 4 de noviembre de 2011 Alfonso Cano, el nuevo comandante general de las FARC. Sin embargo, al mismo tiempo que continuaba la lucha con el grupo guerrillero, el presidente Santos, desmarcándose de su mentor, se dedicó a desarrollar en secreto contactos autónomos para impulsar una negociación.

Los pactos secretos se hacen públicos en septiembre de 2012 y a partir de allí comienzan cuatro años de negociaciones que culminan en 2016. El gobierno lleva a cabo una negociación realista, que supera los fracasos anteriores y saca adelante unos acuerdos realizables y posibles, sin que eso signifique una entrega del Estado al grupo armado o una "revolución por decreto". Lo convenido gira alrededor de cuatro aspectos: reforma rural integral, participación política, fin del conflicto, implementación, verificación y refrendación. A diferencia de lo que habían sido las infructuosas negociaciones del Caguán, el documento final demuestra que sí hubo voluntad política de llegar a un acuerdo. Las reformas que se pactan, sobre todo en el terreno rural, son plausibles y de realizarse pondrían al país a la altura de un Estado moderno, como es la actualización del catastro de la propiedad rural, que establezca la legitimidad de las formas de propiedad, evite el conflicto y obligue a sus propietarios a pagar impuestos.

De acuerdo con las nuevas exigencias del Derecho Internacional, no se concede una amnistía (como se había hecho antes) sino que se acuerda una "justicia transicional", que obliga a los reinsertados a confesar sus delitos para tener derecho a penas leves (cinco a ocho años). El acuerdo final también establece la posibilidad de que militares y civiles que hayan incurrido en conductas delictivas, en delitos atroces o en crímenes de lesa humanidad por razón del conflicto se puedan acoger a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lo que garantiza un tratamiento en condiciones de igualdad para los no guerrilleros. La lucha contra esta prerrogativa se convierte en el caballito de batalla del Centro Democrático bajo con la consigna de "No a la impunidad". Pero el verdadero problema era la lucha por una "impunidad selectiva", que recayera exclusivamente en las FARC, excluyera el paramilitarismo, los terceros comprometidos o las acciones ilegales del Estado.

La oposición de Álvaro Uribe a las negociaciones de paz va generando una polarización, que se cristaliza finalmente con el triunfo del No en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, que Santos juzgaba necesario para que el proceso tuviera plena legitimidad. Como consecuencia de este fracaso se lleva a cabo una renegociación de lo pactado con base en las objeciones de los partidarios del No, con excepción de la participación de los excombatientes de las FARC en el Congreso de la República y la Justicia Especial para la Paz. Los acuerdos, a pesar de los blindajes que se les habían puesto, se debilitan y se produce una relativa desvertebración de sus componentes. El propio Santos no es lo suficientemente solícito en su implementación en el último año y medio de su periodo presidencial, se consolida la polarización y algunos sectores de las FARC no se acogen a lo convenido y conforman las llamadas "disidencias". A pesar de su fragilidad, las negociaciones dieron como resultado la desactivación del grupo armado más poderoso y antiguo de la historia del país.

El verdadero viacrucis comienza a partir de las elecciones presidenciales de 2018 en las que compiten varios candidatos, en el marco de una extrema polarización: por un lado, Iván Duque Márquez por el Centro Democrático, que si bien no se compromete de manera explícita con "hacer trizas" los acuerdos de paz que proponen algunos sectores de su partido, si manifiesta un apoyo apenas formal. Por otro lado, el candidato de la izquierda, Gustavo Petro, partidario de su defensa e implementación. Los candidatos del centro pasan a un segundo plano pero con una votación significativa.

Al menos tres aspectos definen la política del nuevo gobierno en lo relacionado con el proceso de paz: el compromiso de echar para atrás aspectos esenciales de los acuerdos de La Habana; la defensa de la no judicialización de aquellos que habían combatido con medios ilegales a los grupos ilegales; y el apego al estilo de hacer política que había sido exitoso en el momento en el cual

las FARC estaban en su pleno apogeo: la promoción del miedo y las mentiras entre los ciudadanos para dar legitimidad a una política de seguridad, que se preocupara por defender su vida, por encima de cualquier otra prioridad.

Sin embargo, ya "la suerte estaba echada" y era imposible detener una serie de procesos irreversibles que se venían dando en el plano social. El Presidente no comprendió lo que estaba ocurriendo, se apegó tercamente a los parámetros del modelo uribista de manejo del Estado, que habían sido "útiles" en su momento, con el resultado de un inmenso desencuentro entre el gobierno y la sociedad civil, que terminó de socavar las bases de la legitimidad del Estado, ya maltrechas desde tiempo atrás.

La trama de este proceso es lo que el lector encontrará descrito en las líneas siguientes. La segunda pieza del argumento que queremos sustentar es que la polarización que se construye alrededor de los acuerdos de paz con respecto a las responsabilidades de terceros y de agentes estatales en el conflicto es una de las fuentes que a la postre contribuye a minar la legitimidad del Estado y a favorecer las condiciones que hacen posible la eclosión del estallido social que conocemos en este momento, abril y mayo de 2021.

Los puntos del desencuentro

El 7 de agosto de 2018 llega a la presidencia de la República el señor Iván Duque Márquez, con una legitimidad relativamente precaria, si consideramos que la legitimidad no se limita simplemente a los aspectos formales relacionados con la mayoría de votos, sino a una serie de aspectos materiales, complementarios, que son tanto o más importantes que los primeros. El nuevo Presidente obtiene 10.398.689 votos, equivalentes al 54. 03% de la votación, contra 8.040.449 votos por Gustavo Petro, equivalentes al 41.77%. La diferencia es significativa y las reglas de juego democráticas se cumplen a la perfección, *ceteris paribus*, es decir,

bajo el supuesto de que los votos hayan sido obtenidos sin interferencia de "dineros calientes" o de manejos turbios del electorado, la compra de votos o la coacción.

No obstante, cuando consideramos la legitimidad desde el punto de vista material nos encontramos con que la situación no era tan favorable para el nuevo Presidente. En primer lugar, la que ganó efectivamente la votación fue la polarización. Las cualidades personales del ganador o su preparación para el oficio, más allá de su simpatía y su bonhomía, no incidieron mucho en una elección que se produjo más por oposición a un contendor que por méritos propios (los electores votaron a favor de Duque en contra de Petro y viceversa), con el aditamento de que buena parte de su legitimidad provenía de la delegación de un mandato por parte de quien era realmente el "dueño de los votos". Este apoyo, además, era relativamente precario porque el Uribe de 2018 no era el mismo Uribe del 2008 cuando, con su alto prestigio en las encuestas, apoyó al candidato Juan Manuel Santos, como su elegido y continuador de su proyecto. Su aprobación se había menoscabado en un sector importante del electorado, con el agravante de que había varios procesos judiciales corriendo en su contra, que hacían frágil el apoyo y representaban para el nuevo Presidente un compromiso con la tarea de garantizar su éxito en los tribunales.

Los dos gobiernos anteriores habían sustentado en bases firmes su legitimidad formal y material. Uribe había logrado unificar las fuerzas nacionales en un combate solidario contra las FARC. Santos lo había hecho a partir de la construcción de consensos para sacar adelante las negociaciones de paz. Ambos procesos ya habían concluido. El nuevo gobierno carecía de una bandera que permitiera definir un programa para identificar a los ciudadanos con los objetivos de su gestión y debía entonces diseñar un nuevo horizonte para el país.

La senadora Claudia López, con los resultados de una consulta popular anticorrupción de siete preguntas realizada el 26 de agosto de 2018, le puso en bandeja de plata al nuevo Presidente una meta que bien hubiera podido remediar esta carencia. La participación no alcanzó el 33.33% de los votos que se requerían (12.140.342) pero sí logró una suma apreciable de 11.463,662, suficientes para justificar la aprobación autónoma de proyectos de ley relacionados con cada uno de los temas. Duque apoyó la consulta, pero luego no hizo el debido seguimiento a la suerte de las iniciativas en el Congreso. Transcurrieron de esta manera los primeros cinco meses de gobierno, sin lograr un verdadero arraigo entre los gobernados. Esta deriva marca el primer punto de desencuentro entre el gobierno y la sociedad civil, que a la postre da como resultado la pérdida de legitimación del Estado.

El segundo punto de desencuentro entre el gobierno y la sociedad civil tiene que ver con la implementación del proceso de paz. El candidato ganador parece no haberse dado cabal cuenta de que el desmonte de las FARC había transformado radicalmente el panorama político nacional y seguía aferrado a la vieja política del Centro Democrático, organizada alrededor de producir miedo entre las gentes para después ofrecerles seguridad con base en mentiras y falsas consideraciones, como había ocurrido en el inmediato pasado: el castrochavismo, la amenaza de que las FARC se iban a tomar el poder del Estado o iban a modificar la identidad de género de los colombianos. Nada de eso había ocurrido.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) le puso al gobierno en bandeja de plata la posibilidad de afianzar la política de Seguridad Democrática, con un carro bomba detonado en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, donde murieron 22 cadetes. Pensando tal vez en que el ataque terrorista le daba un nuevo aire de legitimidad a la promesa de seguridad de su gobierno y con base en una frágil apreciación de las circunstancias,

el Presidente se embarcó en un proceso suicida de poner objeciones a 6 de los 159 artículos del Proyecto de Ley Estatutaria de la JEP, que ya había pasado por un control previo en la Corte Constitucional. La lealtad del nuevo mandatario a los intereses inmediatos de su mentor era la primera prioridad y, por consiguiente, la sintonía con la sociedad colombiana tenía un carácter secundario.

Las objeciones que el gobierno presenta tenían además el problema de que eran dirigidas contra la sentencia de la Corte Constitucional, que había avalado por anticipado la nueva legislación y no propiamente contra la Ley en si misma. La torpeza era evidente porque en una democracia las sentencias de la máxima Corte son la última instancia de cualquier querella jurídica. El fracaso fue total y el gobierno perdió seis meses más frente a la posibilidad de dar una nueva legitimidad al ejercicio de su gestión. Los acuerdos de La Habana eran irreversibles, no sólo porque habían sido elevados a norma constitucional, sino también porque habían logrado la desmovilización de más de 10.000 combatientes, un hecho insólito en la vida nacional, que había contado además con el pleno apoyo de la comunidad internacional. En nombre de los intereses particulares de su partido, y de Uribe en particular, el Presidente sacrificaba la posibilidad de afianzar su gestión en sintonía con un proceso que ya no daba vuelta atrás.

El tercer punto de desencuentro entre el gobierno y la sociedad civil tiene que ver con la renovada importancia que después de las negociaciones con las FARC adquiere el problema social. Durante el año 2019 se desataron movilizaciones ciudadanas en varios países de América Latina (Brasil, México, Ecuador, Argentina y, sobre todo, Chile) como resultado de la irrupción de un malestar social relacionado con la corrupción, la desigualdad, las pésimas condiciones de vida de amplios sectores, la amenaza de perder los escasos logros sociales alcanzados, la dificultad de

poner en marcha las posibilidades de cambio que ofrecían las instituciones democráticas y los estragos producidos por el modelo neoliberal en las últimas décadas.

Algunos veían allí un complot originado en Cuba o en Venezuela y en el transcurso del año muchos temían que se produjera un "contagio" al existir en Colombia condiciones propicias similares a las del resto de los países de América Latina. El hecho fue que la "réplica" se dio y el 21 de noviembre de 2019 se produjo una movilización sin antecedentes en la vida política del país, no focalizada en un aspecto específico, con gentes venidas de muy diversa procedencia, que buscaban expresar a sus anchas el malestar. La movilización fue espontánea, sin liderazgos claros y precisos, frente a un Estado que de manera crónica había fracasado en dar respuesta a sus inquietudes.

El gobierno no se sintonizó una vez más con lo que estaba ocurriendo y, de manera eufemística, estableció mesas de "conversación" y no de negociación, que finalmente no llegaron a nada. El Presidente seguramente pensó que con la llegada de la pandemia la protesta ciudadana ya no tendría justificación y las reivindicaciones sociales de ese momento pasarían a segundo plano, sofocadas por la gravedad del virus que se salía de la esfera de su dominio. La posibilidad del contagio introducía un nuevo motivo de temor que alimentaba y reemplazaba el miedo anterior, que había sido la clave de la política de Seguridad Democrática.

La violencia en Colombia siempre ha sido positivamente funcional para el sostenimiento del *statu quo*, razón por la cual muchos líderes políticos se han empeñado en conservar cierta dosis de conflicto con los grupos armados, porque permite mantener atemorizada a la población y dar legitimidad a banderas políticas que se comprometen con la defensa de la vida más que con los intereses generales de los ciudadanos. En el gobierno del presidente Álvaro Uribe se afianzó una tendencia que venía de tiempo

atrás: las reivindicaciones sociales pasaron a un segundo plano y el tema de la seguridad se elevó al primer rango: a la gente no le importaba que no tuviera comida, vivienda o salud con tal de que pudiera conservar su vida. Sin embargo, la situación había cambiado significativamente y el gobierno parecía no percatarse.

La experiencia histórica enseña que el auge de grandes períodos de violencia va de la mano por lo general con el aplazamiento de las reivindicaciones sociales de cualquier tipo que sean. Un prerrequisito de la generalización de la *Violencia* de los años 1950 fue el aplastamiento de las movilizaciones laborales y sindicales en auge durante los años 1940. Entre 1949 y 1958 el escenario estuvo dominado por el enfrentamiento sangriento y atroz entre liberales y conservadores, pero cuando se inaugura el Frente Nacional y esta confrontación pasa a un segundo plano, regresan los conflictos sociales. El primer paro cívico organizado fue promovido por los habitantes del barrio Tunjuelito de Bogotá en 1958, que se unieron para protestar contra la construcción del relleno sanitario de doña Juana cerca de sus residencias.

A partir de allí se generalizan los paros cívicos contra el alto costo de la vida, el acceso a los servicios públicos y otras necesidades de la población; y regresan las huelgas que se habían interrumpido por la *Violencia*, como las que se presentan en esos años en los ingenios azucareros del Valle del Cauca contra la "cláusula de reserva" que permitía el despido expedito de los trabajadores; la huelga de Avianca en 1961, la de Coltejer en 1962, la de cementos El Cairo (hoy Argos) en Antioquía, la de Celanese en Yumbo y así por el estilo. La violencia siempre ha sido la mejor manera de sabotear las movilizaciones sociales de la población y anular cualquier demanda por la defensa de sus intereses.

Con el éxito de las negociaciones con las FARC la agenda social volvió a estar en primer plano, pero el gobierno parece no haberlo comprendido. Más aún, la tendencia dominante ha sido por lo general a tratar las movilizaciones sociales con mentali-

dad complotista, asignar las responsabilidades de su irrupción a intenciones políticas mezquinas con nombre propio, negar su arraigo en la población y su carácter espontáneo, como ocurre hoy en día. Esta actitud corrobora la ceguera gubernamental a este respecto.

El cuarto punto de desencuentro entre el gobierno y la sociedad civil tiene que ver con que el Presidente tampoco entendió que la época de las "*fake news*", de las mentiras y el temor para movilizar a las gentes en favor de una causa política, que había tenido su momento de esplendor en 2016 con la elección en los Estados Unidos de Donald Trump y en Brasil de Jair Bolsonaro, el triunfo de los partidarios del Brexit en Gran Bretaña y de los partidarios del No en Colombia, se había agotado.

Las elecciones regionales llevadas a cabo el 27 de octubre de 2019 para designar gobernadores, alcaldes, diputados y concejales enviaron un mensaje que el gobierno tampoco quiso interpretar. La gran sorpresa fue que, en esta ocasión, en lugar de reafirmarse las redes locales de poder, los aparatos clientelistas, las compras de votos e incluso la violencia, los electores le dijeron no a la corrupción, a los extremos y a la polarización. Por el contrario, se perfiló una opción de centro y aparecieron diversos signos de renovación política: el voto de opinión independiente, la presencia de nuevos candidatos, la participación de los jóvenes y las mujeres, la importancia del voto en blanco, la irrupción de nuevas opciones políticas. El gran perdedor fue el partido de gobierno que no supo sintonizar sus proyectos en el plano local y regional con la nueva situación política del país, en la que los gobiernos municipales y departamentales están llamados a tener un nuevo protagonismo.

La torpeza del gobierno quedó demostrada por el apoyo dado al Partido Republicano y a la reelección de Donald Trump en Estados Unidos -el principal adalid del modelo de los miedos y las "fake news"- en clara ruptura con la política bipartidista que

había mantenido desde siempre el Estado colombiano frente a las elecciones en ese país. La gran sorpresa es que ese modelo se había agotado y los electores norteamericanos querían otra cosa, tal como sucedió con la elección de Joe Biden, un personaje que cambió la orientación política de su país. El nuevo Presidente no sólo había estado en la firma de los acuerdos de La Habana en Cartagena en 2016, sino que apoyaba abiertamente el proceso de paz, se oponía a la violencia contra los líderes sociales y las masacres y no estaba dispuesto a favorecer el desmonte de la JEP.

Por lo demás, el miedo y la mentira ya no tienen la misma fuerza en la gente como forma de legitimación de un gobierno. El Presidente de la República aparece en la televisión el 27 de abril diciéndole a los ciudadanos que no marchen porque existe la amenaza de contagiarse, en una forma eufemística de evitar que la movilización hiciera presión contra la reforma tributaria que estaba en proceso de aprobación. Tenía toda la razón. Pero lo que no entendía es que los ciudadanos ya no creen en las mentiras con la misma ingenuidad de antes. Han surgido nuevas redes sociales que se oponen a su difusión, los cibernautas exigen que quien difunda una noticia la verifique primero. Además, como decía un marchante, la gente le ha perdido el miedo al riesgo y ya no demanda como prioridad la seguridad, porque prefiere "morir de covid a morir de hambre".

El quinto punto de desencuentro entre el gobierno y la sociedad civil tiene que ver con que la pandemia ponía en cuestión en el mundo entero los postulados básicos del Estado neoliberal, que se venía construyendo desde décadas atrás. El neoliberalismo consiste en una propuesta de reducir el Estado a sus mínimas proporciones y garantizar la libre iniciativa de los ciudadanos, bajo la idea de que el emprendimiento de cada cual es la clave de su prosperidad y contribuye al bienestar de la sociedad en su conjunto, a la manera de la "mano invisible" de Adam Smith, que reconcilia el interés privado con el interés público. A dife-

rencia del *welfare state*, imperante en el mundo durante los "30 gloriosos" (1945-1975), el proyecto neoliberal propone que los gobiernos se desprendan de cualquier tipo de compromiso con la asistencia social de los ciudadanos, la cual debe ser asumida por el mercado, en la lógica de un "capitalismo salvaje", como ya había ocurrido en Colombia con la salud y se había intentado con la educación. La pobreza en este marco neoliberal no es interpretada como un problema estructural de la sociedad sino como resultado de una falta de emprendimiento por parte de los ciudadanos.

La llegada de la pandemia pone el péndulo a oscilar de nuevo del lado del Estado, como el agente primordial cuya intervención permite superar una tragedia, de la que el mercado no se puede hacer cargo. No sólo porque se requiere atención urgente a los ciudadanos que caen en la miseria, pierden sus empleos o tienen que abandonar sus actividades informales para huir de la peste, sino también porque el Estado, ante la crisis económica, es la única entidad que tiene posibilidades de intervenir para evitar una hecatombe mayor. Esto ocurría en la mayor parte de los países del mundo.

El desencuentro del gobierno con la sociedad civil tiene que ver entonces con que el gobierno obró como si nada hubiera ocurrido y propuso una reforma tributaria inscrita en la más pura ortodoxia neoliberal, para superar la crisis fiscal que se había precipitado y garantizar la asistencia social. La reforma ofrecía a los ricos y a los grandes capitales "regalos tributarios", subsidios y grandes recursos, y los eximía de pagar altos impuestos, bajo la idea de que lo más importante era garantizar el funcionamiento de sus negocios para que, con base en la "teoría del rebosamiento", su prosperidad redundara en beneficios para el resto de la sociedad.

El principal problema de la reforma tributaria es que, para obtener los recursos que el Estado necesitaba, cargaba a la po-

blación, de la clase media para abajo, con impuestos indirectos y con impuestos de rentas a los pequeños asalariados, sin tener en cuenta la precarización de las condiciones laborales. La política social, que aparece en este marco como un elemento residual, buscaba ante todo mantener a la gente en la pobreza con subsidios mensuales de $160,000 (cuarenta dólares aproximadamente), una suma irrisoria para la supervivencia de una familia. A este embate neoliberal contra la sociedad se agregaba una ley de reforma de la salud, que acentuaba su carácter de negocio privado y liberaba al Estado de sus obligaciones en este campo, sobre todo del sostenimiento de los hospitales públicos, y obligaba a los ciudadanos a financiar con pólizas las enfermedades futuras que pudieran padecer, de acuerdo con el modelo de Estados Unidos.

El sexto punto de desencuentro entre el gobierno y la sociedad civil tiene que ver con que el grupo dominante en el poder y los sectores civiles que lo apoyan, con gran incultura política, no entienden que la verdadera garantía para la continuidad y el mantenimiento de una sociedad es el ejercicio pleno de la democracia la cual, además de ser un régimen fundado en la soberanía popular es un conjunto de instituciones y de valores orientados a poner límites al ejercicio omnímodo y arbitrario del poder, a través de poderes públicos independientes que se fiscalicen entre si, de un Congreso que ejerza funciones de control político de las decisiones del Ejecutivo y de una sociedad civil fuerte que defienda sus derechos.

En contravía con esta verdad de a puño el grupo dominante se ha apoderado de todos los mecanismos de control del ejercicio del poder (la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del pueblo), aspira a controlar el Banco de la República (una entidad que la Constitución de 1991 protegió de la influencia directa del gobierno central) y las grandes cortes judiciales. El apoderamiento de estas instituciones ha sido el golpe final a la legitimidad del Estado. Ya nadie cree en la Fiscalía y en sus

investigaciones amañadas para favorecer los intereses políticos dominantes (como ha ocurrido en el caso del proceso por fraude procesal y soborno a testigos contra Álvaro Uribe) o para entablar procesos contra candidatos para sacarlos de la contienda electoral (el proceso contra Sergio Fajardo por irregularidades en contratos cuando era gobernador de Antioquía), ni tampoco en la independencia de las demás instituciones para ejercer sus funciones. Cuando aparece un informe de la Defensoría del pueblo los ciudadanos se preguntan cuál es su sesgo, porque se ha perdido la confianza en el Estado.

Los sectores dirigentes seguramente encuentran cómodo que las principales instituciones fiscalizadoras estén controladas por el gobierno, pero no han entendido que para ellos mismos, para la legitimidad y la eficacia de sus funciones, para el mantenimiento del orden social, es muy importante que existan entidades de fiscalización. Otra sería la situación si ante la grave situación provocada por la pandemia los mecanismos de control del ejecutivo estuvieran funcionando y el Presidente no hubiera tenido las funciones discrecionales de legislar por decreto, o pudiéramos contar con datos confiables sobre los daños de las últimas semanas.

Detrás de todas las "incomprensiones" del gobierno con respecto a la marcha de la sociedad parecería existir una "impericia" de los dirigentes: un presidente novato que llega al poder a los 42 años, sin ninguna experiencia en la administración pública después de permanecer más de una década en el exterior en un cargo de poca importancia y sin contacto con la realidad colombiana, acompañado de un equipo de gobierno conformado por inexpertos compañeros de Universidad.

Pero realmente la miopía de los sectores dominantes no es el problema fundamental. Desde el punto de vista de los intereses particulares que los eligieron ejercen muy bien su función de defender la política de la Seguridad Democrática y los intereses de

su mentor y desde esta perspectiva, entender que el Estado no es simplemente el instrumento en manos de un grupo dominante, sino un ente que tiene que comprometerse con los intereses generales de una sociedad, es un problema secundario. Tal vez el gran error del Presidente es haber confiado desmesuradamente en que amparado en la supuesta legitimidad que le daba ser escogido por el ex presidente Álvaro Uribe podía sortear todos los obstáculos, sin tener en cuenta los procesos sociales que planteaban exigencias inéditas que obligaban a reformular los modelos anteriores.

En síntesis, pues, el resultado es que nos encontramos en este momento con un Estado cuya legitimidad se encuentra en entredicho. Los ministros actúan como rueda suelta porque no saben muy bien a quién obedecer. Los discursos del Presidente son libretos prefabricados y parecen el informe de un mando medio, como si el poder no estuviera en sus manos. El expresidente Uribe toma decisiones y hace contactos de paz con el ELN sin consultar con el Comisionado de paz. Los grupos privados se arman en las ciudades para defenderse por sí mismos. Las encuestas que miden el desprestigio del Presidente lo ubican en un 76%. Los jóvenes expresan de manera permanente su desacato con la autoridad política.

Si el gobierno hubiera asumido como bandera propia llevar a buen término los acuerdos de La Habana, seguramente la actual situación no sería la misma. Pero, en lugar de adecuar sus acciones a las nuevas tendencias de la sociedad, se empeñó en mantener un modelo anterior, que había demostrado su eficacia en el momento en que las FARC estaban vivas, pero que ya no funciona. Estamos ahora frente a nuevas exigencias provenientes de situaciones históricas inéditas que es imposible echar para atrás.

El problema que se presenta en este momento no se soluciona simplemente con atender las demandas sociales de la gente sino con cambiar la forma como la autoridad política se ha venido

ejerciendo. La pérdida de la legitimidad del ejercicio del poder, el derrumbe de su "eficacia simbólica" como garante de la integración de la sociedad y como punto de referencia para la construcción de las identidades colectivas, se ha presentado en Colombia en varias ocasiones. La primera en 1949, con posterioridad al 9 abril, que dio como resultado el desencadenamiento incontrolado de la violencia en los años posteriores; y la segunda entre 1989 y 1990 después de la muerte de Luis Carlos Galán, bajo la presión del narcotráfico, que dio origen a la Constitución política de 1991. La situación de ahora se puede empeorar, si no se producen replanteamientos y acciones que contrarresten la tendencia imperante al derrumbe instrumental y simbólico del Estado.

Cuando nos preguntamos por qué se produce una revolución, un fenómeno masivo de violencia o una movilización como la que estamos viviendo, además de poner el énfasis en el malestar social, hay que buscar dónde está el poder y como se ejerce. Las revoluciones o las grandes crisis sociales ocurren no sólo como resultado de la explosión de las condiciones sociales, sino porque la gente percibe que el lugar del poder está vacío y se lanza a las calles con el riesgo de que se desencadenen fuerzas sociales impredecibles, como el vandalismo que ahora conocemos. La respuesta violenta del Estado es la mejor muestra de su debilidad y de la precariedad de su legitimación.

La gran tragedia nacional

¿A qué se debe la precaria legitimidad del Estado en Colombia? En las líneas anteriores hemos trazado un recorrido histórico cuyo punto de partida fue mostrar que en el momento en que este país se encontró asediado por las guerrillas de las FARC optó más que nunca por el uso de medios ilegales para combatir a grupos ilegales, con todos los instrumentos disponibles del "todo vale". La gran tragedia nacional surge en el momento en que se pasa al inevitable capítulo siguiente de entablar negocia-

ciones con grupos armados que ya habían sido derrotados y definir, de acuerdo con las normas del Derecho Internacional, las responsabilidades en el conflicto, en el marco de una "justicia transicional", cuya máxima expresión ha sido la JEP.

Aparece entonces una polarización alrededor de si las responsabilidades deben ser asignadas de manera exclusiva a los ex guerrilleros de las FARC o si deben ser extensivas a los autores de delitos, crímenes atroces y de lesa humanidad que se cometieron en el combate por su exterminio, militares o civiles. Por un lado, están los partidarios de penas leves para los responsables (cinco a ocho años), cualesquiera que sean, ya que no sería justo, como ocurrió con el caso del Palacio de Justicia, que se concedan prerrogativas penales a los guerrilleros y se condene a militares y civiles a pagar largas condenas de prisión en el marco de la justicia ordinaria.

Por otro lado, están los que consideran que los únicos responsables son los guerrilleros, y cualquier cosa que hubieran podido hacer otros actores sociales o políticos fue de "buena fe", resultado de las circunstancias o de la legítima defensa frente a una "amenaza injusta, inminente y actual" de acuerdo con los términos del numeral 6 del Artículo 32 del actual Código Penal. Se plantea así un criterio diferencial frente a la participación en el conflicto y una especie de "impunidad selectiva", a pesar de la falta de proporcionalidad de la reacción frente a la agresión.

Todo el mundo está de acuerdo con la paz. Sin embargo, las negociaciones con las FARC se volvieron inaceptables para un sector importante de la opinión nacional, no porque "antiguos criminales" (como se suele denominar a los exguerrilleros), se reintegren a la vida civil y no paguen elevadas condenas de acuerdo con las normas vigentes, sino debido a que el juzgamiento de las responsabilidades compromete a muchos otros sectores. Este es el verdadero origen de la polarización a pesar de que se encubra con otras banderas, como el rechazo a la participación

de los exguerrilleros en el Congreso de la República o a las circunscripciones de paz para las víctimas, la denuncia de los gastos "excesivos" del Estado en el proceso de rehabilitación o en el apoyo a la reinserción de los excombatientes, etc. Estos aspectos son secundarios frente al problema central. Colombia está pagando en este momento un elevado costo por la magnitud que en un momento dado alcanzó la política de combatir con medios ilegales a grupos ilegales.

La imposibilidad de encontrar una conciliación entre las diferentes posturas frente a las responsabilidades en el conflicto es el eje de la gran tragedia histórica que nos destroza, en el sentido griego de la palabra tragedia, como oposición entre dos puntos de vista opuestos y excluyentes, cada uno de los cuales reclama su propia validez. Allí se encuentra la clave de la polarización, que ha llevado, primero, a la pérdida de legitimidad del Estado y, segundo, a la explosión social que estamos viviendo.

OTRA VUELTA DE TUERCA
La codicia de las élites en la pandemia

Carlos Humberto Ortiz Quevedo[1]

La política

Las manifestaciones masivas de finales de 2019 y principios de 2020 expresaron la profunda insatisfacción de los colombianos con el *statu quo*. Pero la capacidad de aguante de los colombianos, la promesa incumplida de un diálogo nacional y el temor al contagio contuvieron momentáneamente el movimiento social. El gobierno no ganó ni resolvió nada. Lo que logró fue mantener a fuego lento una olla a presión de sufrimiento y carencias, hasta que la política económica nacional, impulsada por la codicia de las élites, calentó aún más los ánimos de los colombianos y provocó un estallido social sin precedentes en la historia nacional de las últimas décadas.

[1] Economista, Doctor en Economía. Profesor del Departamento de Economía de la Universidad del Valle. Coordinador del grupo de investigación Desarrollo Económico, Crecimiento y Mercado Laboral y director del Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica (CIDSE) de la misma universidad.

Este texto está basado en la participación en varios eventos:

-Seminario: Salud y Economía ante la pandemia en Colombia, Universidad de Antioquia, Mayo 8 de 2020 (https://youtu.be/1vwSE12jZ-c).

-Simposio: Retos y aportes para la recuperación económica de Cali, Centro de Inteligencia Económica y Competitividad de la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali, Octubre 28 de 2020 (https://drive.google.com/file/d/1j4EpVlNXZPgvYW64ebrNSL-JFG39Y0qf1/view?usp=sharing).

-Minimum wage, unemployment insurance and universal basic income in a wealth concentration process: a theoretical approach, Charlas de los Viernes, Universidad del Valle, Mayo 7 de 2021 (https://us02web.zoom.us/j/87528329731?pwd=VlRJeGx-FT2hxMkVnZURDd0tUN3pVUT09).

Amparado en la pandemia y anhelando cumplir sus compromisos políticos y económicos con las élites nacionales, el gobierno del Centro Democrático pretendió completar la reforma tributaria, la reforma de la salud y la reforma pensional. Todas, pero especialmente las dos primeras, se diseñaron a favor de los grandes capitales y del sector financiero. La reforma pensional se desactivó, en cierta forma, porque la aspiración de las Administradoras de Fondos de Pensiones de acabar con el régimen de prima media (Colpensiones) y aumentar la edad de jubilación era ya demasiado; además, su viabilidad dependía de una reforma que flexibilizara aún más el mercado laboral. Con la reforma a la salud quiso el gobierno recargar el costo de las enfermedades más costosas en los pacientes y en sus familias con la exigencia de garantías sobre su patrimonio. Con la reforma tributaria se quiso mantener incólumes los beneficios y las exenciones que les concedió el gobierno a las grandes empresas y a los más ricos en 2019, y se pretendía financiar el costo de la pandemia con impuestos indirectos (IVA) que recaerían fundamentalmente sobre los trabajadores y sobre la clase media (también compuesta de trabajadores). Entonces la gente no aguantó más. El gobierno Duque y las élites pretendieron dar "otra vuelta de tuerca" y se encontraron de frente con la indignación de los más frágiles, especialmente en las ciudades más grandes del país.

El gobierno sabía lo que arriesgaba. Pero las élites entendieron que la baja popularidad del presidente no les garantizaba la continuidad en el poder para lograr, al fin, las tan anheladas reformas. Y evaluaron mal, pensaron que la capacidad de aguante del pueblo los iba a dejar salirse con la suya, y decidieron aprovechar las circunstancias. Claro, para eso también se necesitaba un "cruzado neoliberal" (mejor sería decirle corporativista) como el ministro Carrasquilla en el control de la política económica[2].

[2] Ciento diecisiete (117) municipios pobres de Colombia cayeron en la trampa de los famosos "Bonos de Agua". Ahí se incluye Buenaventura, que todavía hoy no resuelve sus problemas de acueducto y alcantarillado, pero que sí quedó con una deuda de $43.500

Y entonces se quemó no sólo el ministro sino todo el gobierno. Hoy, chamuscados y adoloridos, no saben cómo resolver la situación, y la reacción instintiva, primaria, del régimen oligárquico fue la represión policial. Craso error.

Los medios nacionales e internacionales no dejaron de observar la violación oficial del derecho a la protesta y la vulneración de los derechos humanos, incluyendo ataques brutales no sólo contra los manifestantes sino también contra la población de las vecindades de la protesta[3]. Por supuesto, siempre es posible argüir razones: los vándalos, el terrorismo, la movilidad, el desabastecimiento, etc.[4] Pero la verdad es que los vándalos, probablemente organizados, son una pequeña minoría. Fue entonces cuando el gobierno se decidió por la opción de las mesas de diálogo; pero optó por la estrategia de aplazar y dilatar, como lo hizo en 2019, para apostarle así al cansancio de las masas. Otro error. Ya completamos un mes de protestas continuas a lo largo y ancho del país (finales de mayo de 2021).

Cali se ha convertido en el epicentro del terremoto social porque en ninguna otra de las principales ciudades capitales del país aumentó tanto la pobreza: de 2019 a 2020 la incidencia de la pobreza monetaria de Cali aumentó de 21.4% a 36.6% (casi se duplica); todavía no alcanza el promedio nacional, 42,5%, pero su ritmo de empobrecimiento fue mayor. Y también aumentó el hambre: según el DANE, en el trimestre de noviembre de 2020 a enero de 2021 (en medio de la pandemia), sólo el 76% de los hogares caleños tenía tres comidas diarias, antes del inicio de la

millones. Los "bonos de agua" fueron diseñados por Carrasquilla como empresario para enriquecerse con su empresa, Konfigura Capital, aprovechando su conocimiento de la política de endeudamiento que diseñó como Ministro de Hacienda de los dos gobiernos del presidente Uribe.

[3] "La policía de Colombia sofoca las protestas de forma violenta y mortal, según muestran videos", The New York Times, 27 mayo de 2021. https://www.nytimes.com/es/2021/05/27/espanol/protestas-colombia-videos.html

[4] "En nuestra época, tan reflexiva y razonadora, no llegará muy lejos quien no sepa aducir una razón fundada para todo, por muy malo y errado que ello sea. Todo el mal que se ha hecho en el mundo, se ha hecho por razones fundadas" (Hegel, La Enciclopedia, primera parte, citado por Marx, El Capital, T. I, pie de página 70).

pandemia ese porcentaje ascendía a 94.6%; como la situación no ha mejorado se puede concluir que en este año de 2021 por lo menos uno de cada cuatro hogares aguanta hambre en la "sucursal del cielo" (100% – 76% = 24%). Además, se disparó el desempleo, especialmente entre los jóvenes, cuya tasa correspondiente para febrero de 2021 llegó a 25,8%; la de las mujeres jóvenes es aún mayor, 31.9%. También se añade a esta problemática la carencia de oportunidades educativas para los niños y los jóvenes. Finalmente, los datos nacionales señalan que la pandemia la han sufrido en mayor proporción los estratos 1 y 2 de la población (69% de los fallecimientos según el DANE), que con el estrato 3 (21%) completan el 90%. Así, pues, para los más pobres y jóvenes la vida es una promesa de frustración.

Los determinantes estructurales de la crisis

En diferentes trabajos realizados con el grupo de investigación *Desarrollo Económico, Crecimiento y Mercado Laboral*, y siguiendo la tradición analítica de Adam Smith, hemos sostenido que la diversificación productiva intensiva en ciencia y tecnología (lo que el padre de la economía política denominó división del trabajo) y la capacidad de compra de la población (lo que el mismo autor denominó extensión del mercado) son determinantes fundamentales del crecimiento económico de largo plazo (Ortiz y Jiménez, 2016 y 2017; Ortiz, Jiménez y Cruz, 2019).

Con respecto a la diversificación productiva hemos analizado que en los primeros 70 años del siglo XX el país experimentó un proceso relativamente sostenido de industrialización (la industria manufacturera despegó a principios del siglo XX y para 1974 aportaba el 23.4% del PIB); pero luego el país se desindustrializó (para 2018 la industria manufacturera ya sólo aportaba el 12% del PIB). Esta reversión estructural –de la industrialización a la desindustrialización- marcó también la reversión de la dinámica económica de largo plazo del país: la tendencia del crecimiento

económico paso de la aceleración a la desaceleración. Después de la crisis de los años 1930 el país creció a un ritmo de largo plazo del 3%; en 1970 el ritmo mencionado había aumentado al 6%, pero luego cayó sistemáticamente: durante el período 2014-2019 (después de la caída de los precios del petróleo) el promedio de la tasa de crecimiento anual del país en términos reales se situó en 2,8%. Así, pues, el país perdió significativamente con el abandono de la política industrial. El siguiente cálculo es revelador: entre 1970 y 2015 la economía colombiana creció a una tasa promedio anual de 4%; si se hubiera mantenido la tasa de crecimiento de largo plazo de 1970, 6%, el PIB de 2015 hubiera más que duplicado el que efectivamente se logró[5]. El país hubiera estado así en mucho mejor posición para afrontar sus retos.

Las decisiones de política económica que inducen la desindustrialización nacional se resumen en el desmonte de la política de desarrollo industrial con apoyo del Estado, que incluyó en su momento la inversión de capitales públicos. Las políticas aperturistas desde los años 1990 reforzaron la desindustrialización al reorientar aún más la economía hacia las actividades productivas intensivas en los recursos abundantes del país: recursos naturales y trabajo no calificado. De ahí la expansión del sector minero y de la agroindustria, sectores exportadores (se incluye la producción de drogas ilícitas), y de las actividades no transables, como la construcción y el sector financiero. De hecho, el predominio creciente del sector financiero del país, que llevó a la constitución del oligopolio más importante y fuerte del país, se construyó desde los años 1970.

Hemos sostenido reiteradamente en nuestro grupo de investigación que el principal motor del crecimiento económico nacional, la diversificación productiva en actividades intensivas en ciencia y tecnología (la industrialización), se desactivó desde los años 1970. Y desde entonces la economía colombiana experi-

[5] El cálculo correspondiente es el siguiente: $[1{,}06/1{,}04]^{45} \approx 2{,}36$.

menta una disminución sostenida de las ganancias en productividad multifactorial. Ese es el determinante principal de la disminución tendencial de la tasa de crecimiento económico.

Además, la política de precarización del trabajo ha sido un objetivo del nuevo modelo de desarrollo económico: ante la baja dinámica de la productividad multifactorial, que se explica por el rechazo de las élites a seguir la vía difícil de la industrialización, la competitividad, condición *sine qua non* de las economías abiertas, se buscó por la vía fácil del abaratamiento del trabajo. Se aplican entonces de forma sistemática las políticas de flexibilización laboral y represión sindical. El abaratamiento del trabajo junto con la creciente informalidad laboral, que se explica fundamentalmente por la escasa creación de empresas de alta productividad, ha generado una disminución sistemática de la capacidad de compra de los colombianos. Según nuestros cálculos, basados en las cuentas nacionales del DANE, si a principios de los años 1980 el trabajo percibía alrededor del 43% del producto, en la actualidad sólo percibe el 33%.

En los medios académicos es ampliamente aceptado que la capacidad de compra de la población y, por ende, la demanda efectiva, es el principal determinante del nivel de actividad económica de corto plazo, como pensaba J. M. Keynes (1936). No obstante, y siguiendo la tradición post-keynesiana, lo que nuestros trabajos han encontrado para Colombia es que la capacidad de compra de la población, especialmente la de las cinco ciudades más grandes (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga), también es un determinante positivo y significativo del crecimiento de largo plazo.

A los historiadores y políticos tradicionales de Colombia se les llena la boca de orgullo cuando dicen que aquí no hubo populismo. Lo que deberían decir es que la política colombiana ha sido dictada y dirigida para y por las élites desde la colonia (Caballero, 2016); y que lo que aquí se construyó fue un régimen

oligárquico y cerrado que se caracteriza por privilegios para los poderosos y exclusiones para los demás, con algunos avances sociales (salud, educación, electrificación, etc.) que no cerraron de ninguna forma la brecha entre la vida opulenta de los menos y, haciendo abstracción de una pequeña clase media acomodada, la pobreza de los demás.

Las cifras al respecto son incontrovertibles: para octubre de 2020, el DANE estima que el 15.2% de los trabajadores recibe el salario mínimo y 48.6%, casi la mitad, gana aún menos. Sumando las anteriores participaciones se deduce que el 63.8% (casi dos terceras partes) de la población laboral vive para la subsistencia. En términos de ingresos generales el país cuenta con una de las concentraciones más altas de Latinoamérica: para 2018 se estimó que el índice de Gini del ingreso de Colombia era de 51.7 (la escala va de 0 a 100), sólo superado por Haití. De hecho, el 1% de la población concentra el 40% de la riqueza. Para 2017 el índice de Gini de la tenencia de la tierra se situó en 90. Y el índice de Gini de las cuentas bancarias fluctúa entre 95 y 97. La pobreza monetaria antes de la pandemia era de 34.7% en 2018, subió levemente a 35,7% en 2019 y en 2020, con la pandemia, saltó a 42.5%.

Había que hacer algo. Pero el elitismo del gobierno y la aversión del exministro a las soluciones públicas, impidieron que, como en otros países, se recurriera al ahorro o al endeudamiento público para financiar adecuadamente la capacidad de compra de los más pobres. Sólo 2.6 millones de personas han recibido un *Ingreso Solidario* de apenas $160.000 mensuales (el 18% del salario mínimo legal de 2020), mientras la pobreza seguía creciendo y en 2021 afecta a 21 millones de colombianos. También había que apoyar a las empresas. Se recurrió, como siempre, al recurso de darle liquidez a los bancos para que financiaran las empresas. Vano empeño, sólo ganaron los banqueros y las grandes empresas. Las pymes, que generan el 80% del empleo nacional,

no pudieron acceder a esos recursos porque los banqueros prefirieron prestarles a las empresas que ofrecían garantías y, además, aumentaron las tasas de interés.

Entonces la demanda agregada colapsó. La contracción de la actividad productiva disminuyó los ingresos de los hogares, aumentó el desempleo (según la medición armonizada de la OIT la tasa de desempleo de Colombia pasó de 10,5% en 2019 a 17,3% en 2020), aumentó la pobreza (como ya se dijo el índice de pobreza monetaria ascendió al 42,5% en 2020 y comprometió el bienestar de veintiún millones de colombianos) y se generó la mayor recesión en la historia de Colombia (la caída del PIB en el mismo año fue del 6,8%). Los datos cuya fuente no se cita son del DANE.

Gran parte de esta situación se explica por la reversión desde los años 1970 del proceso de industrialización impulsado por el Estado. Se perdió así uno de los motores del crecimiento económico acelerado que experimentó el país en ese período. Con la apertura económica de 1990 ese proceso sólo se reforzó, y la tendencia a la desaceleración de la economía se profundizó. Además, el país se especializó en actividades terciarias poco intensivas en ciencia y tecnología. Como resultado la transformación industrial del país se revirtió, la creación de empresas modernas disminuyó, aumentó la informalidad laboral y la remuneración de los trabajadores se resintió. Además, para sostener la competitividad, se buscó abaratar los costos salariales con políticas de flexibilización del trabajo que terminaron por pauperizar a los trabajadores.

¿Qué hacer?

En primer lugar, hay que terminar de vacunar a la población. En este campo como en tantos otros este gobierno ha sido ineficiente. Cualquier comparación internacional lo revela.

En segundo lugar, hay que recomponer la demanda agregada y reactivar las empresas. Para ello es fundamental activar una

política de renta básica para los más pobres y frágiles. Habría que financiarla inicialmente con un préstamo extraordinario del Banco de la República –otros países han ensayado con éxito la vía no ortodoxa-. Pero tarde o temprano la política tributaria debe apuntarle al bolsillo y al patrimonio de los más pudientes, los eternamente consentidos del régimen, que no sólo pagan muy poco sino que también evaden y eluden con trampas contables legales y paraísos fiscales internacionales. Los gobiernos locales pueden apoyar con comedores comunales y otros programas para paliar el hambre de los más frágiles. Además, hay que refinanciar las pymes, las grandes generadoras de empleo.

En el largo plazo sería conveniente romper el oligopolio cerrado del sector financiero a través de una mayor competencia, incluida la recuperación de la banca pública comercial sujeta a regulaciones que aseguren su viabilidad. La oferta monetaria secundaria, un bien público cuyo manejo se le cedió al oligopolio financiero, ha configurado un esquema de expoliación financiera asfixiante para los colombianos: pagamos márgenes de intermediación estrambóticos en el contexto internacional (Villabona, 2015, *Un país trabajando para los bancos*). Además, el sector financiero se arroga el derecho de cargar estratosféricos cobros de transacción financiera.

En general, es necesario entender que los gobiernos deben velar por el bienestar general y no sólo por las ganancias de las empresas oligopólicas del país. A pesar de que se reclaman ortodoxos (neoliberales), nuestros políticos y economistas en el poder han sido más bien corporativistas. Han promovido la oligopolización del país: todo lo contrario de lo que haría un verdadero neoliberal. Y también por ello en Colombia pagamos precios estrambóticos en el contexto internacional tanto por los bienes públicos como por los privados:

- El crédito y los servicios bancarios.
- El transporte (muchos peajes y muy caros).

- Las comunicaciones.
- La salud (pública: barata, pero de baja calidad; privada: cara).
- La educación (pública: barata, pero de escasa cobertura y, generalmente, de baja calidad; privada: cara).
- Los combustibles.
- Los servicios públicos (energía, gas, agua, internet. etc.).
- El cemento, etc., etc., etc.

Esos enormes costos sobre la actividad productiva y los consumidores disminuyen la competitividad del país y su potencial de crecimiento económico.

Sobre los bienes públicos y meritorios es necesario un nuevo pacto social, probablemente con *status* constitucional, para garantizar su provisión general con alta calidad. La razón es sencilla: estos bienes no sólo benefician al consumidor individual, sino también a la sociedad en su conjunto. Un buen ejemplo de un bien público es una vacuna: quien se la aplica se beneficia –por eso muchos están dispuestos a viajar al extranjero para aplicarse la vacuna contra el Covid-19- pero el resto de la sociedad también se beneficia. Otros ejemplos de bienes públicos que benefician directamente a quienes tienen acceso a ellos, pero también al resto de la sociedad, son la educación, la salud, la justicia, el cuidado de los infantes y los niños, la preservación de los bienes naturales y ambientales, etc. Los bienes públicos y meritorios pueden ser provistos por empresas privadas o públicas, siempre y cuando el gobierno como guardián del bienestar general asegure precios competitivos, alta calidad y cobertura.

Hay que recuperar la infraestructura nacional sin los sobrecostos de la corrupción que inducen los grandes grupos financieros y los políticos del país (Reficar, Isagen, Chirajara, Hisgaura, Hidroituango, Túnel de la Línea, Vía al Llano, Odebrecht, Carrusel de los Contratos en Bogotá, Electricaribe, etc.). Y hay que recuperar la vía de la diversificación productiva con políticas de

industrialización activa. Pero estas sólo serán medidas que rendirán sus frutos en el largo plazo.

Hacia el futuro hay que elegir gobiernos democráticos cuya agenda de trabajo tenga como prioridad el bienestar social.

Referencias

Caballero, A. (2018). *Historia de Colombia y sus oligarquías (1498-2017).* http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/proyectos-digitales/historia-de colombia/libro/index.html

Keynes, J. M. (1936). *Teoría general del empleo, el interés y el dinero*. Múltiples ediciones.

Ortiz, C. H. y D. M. Jiménez (2016). A Smithian analysis of the Colombian economic growth". *Ensayos Sobre Política Económica* 34 (79): 66-77. Bogotá: Banco de la República.

Ortiz, C. H. y D. M. Jiménez (2017). Un análisis smithiano del crecimiento económico colombiano: avances metodológicos. *Lecturas de Economía* 87: 35-66.

Ortiz, C. H., D. M. Jiménez y G. N. Cruz (2019). El impacto de la infraestructura en el crecimiento económico colombiano: un enfoque smithiano. *Lecturas de Economía* 90: 97-116.

Villabona, J. O. (2015). *Un país trabajando para los bancos. Estudio sobre la concentración, margen de intermediación y utilidades de los bancos en Colombia (2000-2009)*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

REFLEXIONES SOBRE PRÁCTICAS Y CULTURAS POLÍTICAS EN EL PARO DEL 2021

José Fernando Sánchez Salcedo[1]

Los acontecimientos del último mes relacionados con las movilizaciones y los bloqueos que se han llevado a cabo en diferentes regiones del país son una clara evidencia del modo como los colombianos, vivimos y experimentamos la política tanto a nivel institucional como personal.

Nuestra cultura recoge un conjunto de creencias, valores y pautas de conducta que son producto de nuestras instituciones y prácticas políticas. No podría ser de otra forma, porque al igual que otras actividades sociales, la política se inscribe en un sistema de valores, pero sobre todo de experiencias sobre su quehacer, que forjan nuestras conductas y relaciones políticas.

Las prácticas políticas "son maneras de hacer y formas de proceder" (Castillo, 2011: 105). Son manifestaciones de sujetos históricos que, permeados por su cultura, construyen pautas de acción y de significación. "La política pone en interacción y tensión las convicciones, los sentidos y las atribuciones de la cultura, dinamizando sus contenidos" (Tejara, 2009: 250). La cultura, específicamente, la cultura política, provee a los sujetos de "un conjunto de interpretaciones heterogéneas y a veces contradictorias y desarticuladas de valores, conocimientos, opiniones, creen-

[1] Comunicador Social, Doctor en Ciencias Políticas y Sociales -Sociología. Profesor del Departamento de Ciencias Sociales y miembro del grupo de investigación Sociedad, Historia y Cultura adscrito al Centro de Investigación y Documentación Socioeconómica de la Universidad del Valle.

cias y expectativas que integran la identidad de los ciudadanos, grupos sociales u organizaciones políticas" (Gutiérrez, 1996: 43) Hoy, buena parte de las ideas que las personas apropian para hacerse una opinión de lo que está pasando proviene de las redes sociales, dónde circulan todo tipo de mensajes y materiales, buena parte de ellos sesgados, cuando no abiertamente falsos. Esta diversidad de interpretaciones, buena parte de ellas equivocas, alimenta la toma de decisiones de los actores o, por lo menos, guía su valoración de lo que está sucediendo.

El paro y las movilizaciones del último mes son, sin duda, un escenario privilegiado para identificar algunos rasgos de nuestras prácticas y cultura política, a partir de las que se define nuestro modo de expresar diferencias e ideas y asumir nuestros conflictos. Estás prácticas no son nuevas y es posible identificarlas en protestas y movilizaciones anteriores; sin embargo, un rastreo histórico de este tipo de prácticas rebasa los modestos límites de esta reflexión.

Este texto se propone describir siete prácticas políticas que hacen parte de la manera en que personas, grupos e incluso organizaciones políticas se comportan en situaciones de confrontación y lucha entre los gobiernos y sus críticos o detractores. Las prácticas que se propone revisar son las siguientes: la negociación como puesta en escena, la ambigüedad institucional, la desinformación como herramienta política, las vías de hecho, la autoridad como represión y la justicia por mano propia. Estás prácticas no pretenden agotar el abanico de posibilidades con las que se expresa la política, menos aún agotar su explicación.

La negociación como puesta en escena

Sentarse a dialogar, discutir los problemas y proponer soluciones a los mismos, es la principal alternativa que se asume, dentro de la racionalidad democrática, para finalizar cualquier conflicto. La mayoría de las veces la negociación es una meta a la que se llega y no con la que se comienza la discusión y la solución de

problemas. Suele estar condicionada por la capacidad que tengan los protestantes para hacerse escuchar y ser reconocido por las instituciones del gobierno.

En otras palabras, se llega a la negociación cuando la acción del Estado, represiva o de cualquier índole, no logra detener el paro o la movilización o cuando se agudiza la presión internacional sobre los gobiernos por sentarse a negociar.

Una vez se logra la "voluntad de dialogar", el establecimiento de mesas en las que se sienten los diferentes actores, así como la identificación de un conjunto de problemáticas a ser abordado por los negociadores, va a demandar mucho tiempo y una especie de "tira y afloje" entre los negociadores; este momento suele estar acompañados del incremento de la represión y de las movilizaciones. El diálogo se convierte entonces en otro escenario de lucha, cuya expresión dramática se juega en la puesta en escena de los roles que los personajes asumen, muchas veces desconectados de las realidades que se viven en los espacios de movilización y confrontación reales.

La experiencia de las negociaciones ha mostrado que, más que resolver los problemas, su función es contenerlos a partir de un conjunto de promesas que a la postre no se cumplen. Esto genera un nuevo ciclo de conflictos, cuyo punto de partida son los acuerdos no cumplidos.

En esta coyuntura, además de las trabas que ha tenido la negociación y su demora para lograr acuerdos, se genera el problema de la definición de la representación entre los diferentes colectivos y organizaciones manifestantes. Una parte importante de los jóvenes que están en los bloqueos, por ejemplo, no se sienten representados por los miembros del comité del paro.

La ambigüedad institucional

Una de las principales estrategias de gobernantes y funcionarios con cargos de responsabilidad frente a los problemas es

no asumir ni tomar decisiones claras mientras se espera que la contraparte sí lo haga. Así se busca no responder a las demandas que se les plantean. En otras palabras, se trata de mantener, lo más que se pueda, el silencio administrativo[2]. Cuando finalmente toca asumir posiciones, ellas suelen ser ambiguas, poco claras, de tal forma que, en vez de ofrecer soluciones, confunden y generan desconfianza.

Estas posturas ambiguas rompen cualquier intento de negociación e incrementan el escalonamiento del conflicto, tendiendo de esta forma hacia su expresión violenta. En esta coyuntura, esta ha sido la posición que muchas veces han asumido el alcalde de Cali y la gobernadora del Valle del Cauca frente al gobierno y ante los mismos manifestantes.

La desinformación como herramienta política

Casi desde su nacimiento, los medios de comunicación (la prensa, luego la radio y después la televisión), han sabido aprovechar el potencial político de los medios de comunicación. La prensa ha servido para visibilizar, pero también para ocultar hechos que contribuyen a modificar los equilibrios en la correlación de fuerzas de partidos y grupos políticos. De ahí, que este medio haya estado tan estrechamente ligado a partidos y doctrinas políticas.

En la era de la internet, la relación entre prensa y política no ha cambiado, más bien se ha diversificado. Hoy es posible acceder a múltiples versiones y lecturas de los hechos producidas por medios oficiales e independientes. Si algo ha caracterizado a las movilizaciones sociales en la web es la proliferación de mensajes que circulan en redes sociales y medios de comunicación masiva. Dicha información se ha convertido en un instrumento para divulgar ideologías, posicionar ciertas interpretaciones de

[2] El silencio administrativo se da cuando un ciudadano solicita a la administración pública algo, pero esta no responde.

la realidad y buscar impactar en las emociones y creencias de la ciudadanía.

En los últimos paros convocados en el país, la producción y reproducción de videos, "en vivos", *tweets*, mensajes por WhatsApp, entre otros, les han permitido a sus públicos seguir en directo lo que ocurre en bloqueos y manifestaciones. En el paro del 21 de noviembre del año 2019, las redes fueron utilizadas para generar miedo antes, durante y después de las movilizaciones. Su impacto se pudo constatar esa misma noche, cuando empezaron a circular videos y audios de personas radicadas en unidades residenciales del sur y el norte de la ciudad denunciando la presencia de vándalos que estaban tomándose sus propiedades. Aunque la mayoría de las denuncias realizadas a la policía no pudieron ser corroboradas, el evento demostró la capacidad de reacción de unas clases medias que se armaron y dispararon a todos los que esa noche se acercaban a sus unidades.

Además de la constatación de la existencia de ciudadanos fuertemente armados, de lo cual, dicho sea de paso, nunca dijeron nada las autoridades competentes, una de las enseñanzas que nos dejó la movilización del año 2019, es acerca del papel que juegan las redes sociales y los medios de comunicación a la hora de generar respuestas orientadas por las emociones. Esta situación ha sido muy bien aprovechada por los medios y las redes sociales, que saben que cuentan con audiencias que se identifican con la orientación editorial de la publicación.

Una de las características del presente paro en relación con los medios, es el tratamiento que han dado a la información, a tal punto que ha sido evidente la toma de partido a favor y en contra de las manifestaciones. Ejemplos de este sesgo son los trabajos periodísticos realizado por la Revista Semana a favor del gobierno, por un lado, y por el Canal 2 de Cali, que ha asumido como criterio informativo registrar el punto de vista de los manifestantes, por otro.

El tratamiento que los medios le han dado a la información en los paros de los últimos años ha contribuido por tanto a la polarización política y al aumento del miedo de los ciudadanos. De hecho, en las últimas semanas, buena parte de medios nacionales y regionales parecen estar inmersos en una campaña para desprestigiar la movilización social, atribuir la responsabilidad de la movilización a Gustavo Petro o, en su defecto, a las disidencias de las FARC o el ELN.

La contrainformación la llevan a cabo medios alternativos a través de internet, cuya labor se ha centrado en mostrar los desmanes de la fuerza pública. En medio de estas contiendas por la información se encuentra una ciudadanía desorientada y confundida, que sólo cuenta con los relatos que circulan en medios y redes para tener una percepción mínima de lo que está sucediendo.

La descalificación del oponente

La histórica falta de espacios dónde tramitar nuestras diferencias ha dado pie a una práctica que es común no sólo en el ámbito político sino en todas las relaciones humanas: invalidar al oponente. Existen muchas maneras de deslegitimar al *otro*. Aquí vamos a revisar cuatro: la caricaturización, el uso de nominaciones, el rumor y la subestimación de capacidades.

La caricatura ha hecho parte de nuestra forma de representar al otro desde nuestros primeros intentos por consolidar un proyecto de Estado: liberales y conservadores usaron la caricatura como arma política en las publicaciones de los partidos. La fuerza comunicativa de la caricatura reside en su capacidad para acentuar los rasgos de un personaje, activar nuestras emociones y, en su función pedagógica, grabar rápidamente en la memoria una forma de percibir el mundo de fácil comprensión, forma que se reproduce permanentemente. Hoy en día la caricatura sigue siendo, como dirían Bourdieu y Wacquant (1992), un espacio de luchas por el poder simbólico que, gracias a las nuevas tecnolo-

gías, se ha expandido a la web a través de los memes. El actual paro, como todas las movilizaciones que se han realizado en la era web, ha estado lleno de caricaturas y frases ingeniosas orientadas a burlarse del otro y quizás, lo más importante, restarle credibilidad.

El uso de denominaciones es también otra forma habitual de referirse al oponente. Al igual que la caricatura busca acentuar un rasgo o asignar un atributo con el cual se busca describir de forma minusvalorada al contrincante. A veces las denominaciones se presentan en forma de apodos o alias. En el paro, la denominación que se repite como una consigna para nombrar a los manifestantes es la de "vándalo".

El rumor que hoy se expande a través de las redes sociales y en los medios de comunicación ha contribuido a incentivar el miedo y a predisponer a las personas contra acciones políticas como las manifestaciones. El rumor se nutre de la desinformación, a partir de noticias falsas o sesgadas y busca crear una opinión, o al menos una percepción sobre la situación. El rumor, por su carácter muchas veces privado y confidencial, genera mayor credibilidad e incita a la acción.

Finalmente, está la subestimación de las capacidades del contrincante, la cual cumple dos propósitos. Por un lado, desplaza la responsabilidad de los hechos en actores conocidos: guerrilleros, afines castro-chavistas, la derecha radical, etc., y, por otro lado, desestima cualquier capacidad de los protestantes para hacer valer sus derechos, confrontar al gobierno e incluso desarrollar actos violentos. De hecho, convierte a los manifestantes en víctimas, a la vez que los infantiliza, desconociendo incluso la posibilidad de que puedan tener convicciones políticas.

Ambos propósitos cumplen un fin ideológico claro, que puede resumirse de esta forma: presentar a las protestas como acciones concertadas por grupos organizados criminales y/o terroristas que buscan desestabilizar el país. Los protestantes son personas

manipuladas, que se comportan como marionetas, sin ninguna consciencia y autonomía. En otras palabras, los que protestan no saben por qué lo hacen, no tienen ninguna orientación, ni siquiera una ideología. El paro ha sido un escenario para este tipo de comentarios que se reproducen en medios, redes y conversaciones cotidianas.

Las vías de hecho

Ante la dificultad que los gobiernos tienen para solucionar de manera dialogada los problemas ha hecho carrera, en la larga historia de la protesta pública en el país, recurrir permanentemente a las vías de hecho. Las vías de hecho se han convertido en un instrumento para tramitar las demandas ciudadanas y ejercer presión a las instituciones oficiales.

De hecho, constituyen una especie de Ley social en toda movilización contra el Estado: sin acciones que paralicen la movilidad o signifiquen el cierre del comercio o la producción, el gobierno no escuchará a los manifestantes. Como se trata de un instrumento de presión, entre más se demore el Estado en responder a las demandas de los protestantes, habrá más posibilidad que se llegue al uso de acciones por la fuerza.

En este paro, los bloqueos, el derrumbe de estatuas y la destrucción de infraestructura hizo parte de los repertorios de lucha de los manifestantes.

La represión como expresión de autoridad

Al igual que las vías de hecho, la expresión de fuerza es una fórmula que el Estado siempre ha utilizado para desalentar cualquier forma de protesta y cuestionamiento que no vaya por vías formalizadas para tal fin. El uso de la fuerza en una cultura en la que a las instituciones del Estado se les considera débiles cuando no inexistentes, es, en general, bien recibido por un importante sector de la población que cree en la mano dura frente a cualquier

forma de protesta que afecte a su estilo de vida y, por supuesto, a sus prácticas económicas.

La represión esconde también una cierta desvalorización de las personas que se rebelan contra las instituciones, pues son consideradas susceptibles de ser reprimidas, como es el caso de los "vándalos", los desobedientes en tiempos de pandemia o los grupos étnicos, los cuales han sido tradicionalmente infantilizados. Esto también puede ayudar a explicar porque no son consideradas dignas contrapartes para negociar con ellas.

La desvalorización se manifiesta no solo a partir de categorías sociales, sino que también comporta una espacialidad. La producción espacial del territorio supone entonces un proceso de clasificación, de división simbólica, que luego se va a traducir en una cierta organización y disposición urbana. Dicho proceso puede tener un origen histórico o ser el resultado de percepciones construidas sobre un determinado espacio o zona. Las categorizaciones que se producen del espacio pueden cambiar o permanecer, todo va a depender del modo en que son leídas e interpretadas por el mismo Estado o en la capacidad de sus ciudadanos para reclamar nuevas lecturas o formas de clasificación. En el paro actual, algunas zonas se han rebautizado como Puerto Resistencia, El Puente de las Mil Luchas, etc.

La represión se alimenta del miedo que es propagado como parte constitutiva del despliegue de fuerza, pero también en forma de amenazas, comentarios de líderes políticos o a través de las redes sociales y, como ya se mencionó, mediante falsas noticias. El miedo como estrategia política ha sido analizado por diversos autores, como Aristóteles, Hobbes, Tocqueville y más recientemente por Foucault y Robin: todos coinciden en señalar la importancia del miedo como mecanismo de adoctrinamiento, pero también de renovación. Como señala Korstanje (2010: 112), la política es un acto, "si no el primero de violencia, cuya característica principal es coaccionar, dirigir, negociar y reconducir la

suma de las voluntades individuales con un fin último supra-comunitario".

El Estado utiliza el miedo como una herramienta para administrar la vida pues busca intervenir en todas las dimensiones de la existencia de los ciudadanos. "Así, no obstante que a diario el Estado se muestra incapaz de proveer los servicios públicos esenciales y que asiste impasible al debilitamiento extremo de la materialidad y el sentido de lo público, se esfuerza por gestionar y controlar el cuerpo social" (Useche, 2008: 7).

No obstante, el uso político del miedo no es solo potestad del Estado, también lo hacen los actores en conflicto a partir de amenazas, memes o comentarios sobre grupos sociales objetivo de su accionar político.

La justicia por mano propia

Otro aspecto que se desprende de la debilidad del Estado y sus instituciones, especialmente las jurídicas, su negligencia, autoritarismo y la ambigüedad de sus gobernantes, es la poca confianza que los ciudadanos tienen en que el Estado y sus funcionarios resuelvan situaciones conflictivas y problemáticas. Esto falta de credibilidad, se traduce en buscar justicia por cuenta propia.

De hecho, hay en nuestra sociedad, por un cierto sesgo clasista y racista, la convicción de que hay personas que están habilitadas para decidir, por su propia mano, la suerte de otras consideradas inferiores, y cuyo comportamiento es evaluado por sus propios patrones morales, desde los cuales toman una conveniente distancia. "Gentes buenas" *vs* "gentes malas", por ejemplo.

En situaciones de conflicto, como los que hemos vivido en las últimas semanas, en dónde no se ha podido resolver ni a través del diálogo ni de la represión la protesta social, el problema se traslada a los mismos ciudadanos quienes, al ver afectados sus derechos (la libertad para movilizarse, por ejemplo, o realizar sus actividades cotidianas), buscan resolver ellos mismos la situación.

Al igual que sucede con la represión como expresión de autoridad, la justicia por mano propia es impulsada por el miedo: miedo de ser invadidos, miedo de ser secuestrados, etc. Estos miedos, que se encuentran profundamente arraigados en las personas, surgen en momentos de crisis y confrontaciones entre diferentes actores sociales. En el año 2019, el miedo a ser invadidos hizo que las personas de unidades residenciales en Cali se armarán, incluso dispararán, para repeler a supuestos invasores.

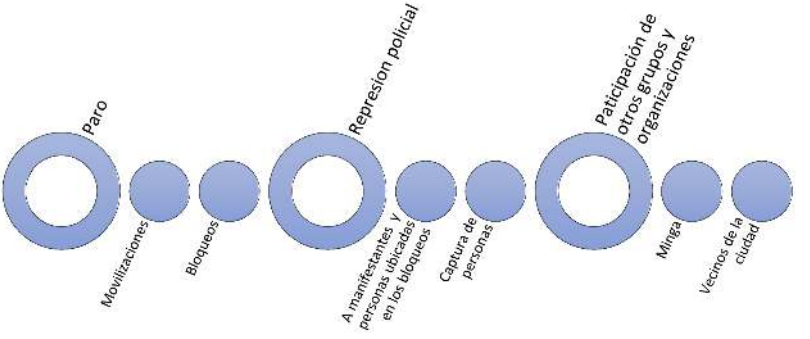
La impunidad de este tipo de acciones, que, dicho sea de paso, se da en diferentes estratos sociales, válida la continuidad de este tipo de respuesta. Incluso es de alguna manera avalada y reconocida por las mismas fuerzas del orden. Estas prácticas violentas, de desconocimiento del Otro, se inscriben en un sistema de creencias y de valores, que plantean geografías sociales urbanas que el mismo Estado, a través de su función simbólica, ha contribuido a generar. En tiempos de crisis y confrontaciones, estás miradas estereotipadas se exacerban y son reproducidas por líderes de opinión, medios de comunicación y redes sociales, generando las condiciones adecuadas para actuar.

En las movilizaciones de los años 2019 y 2021, la confrontación entre ciudadanos ha mostrado su faz más violenta y destructiva, lo que constituye sin duda, la expresión más preocupante de la coyuntura que hoy enfrentamos, pues puede llevar, en una sociedad tan injusta y desigualitaria como la nuestra, a entrar en una nueva espiral de odio y violencia.

Las siete prácticas descritas no funcionan de manera aislada, sino que se inscriben en un mismo universo cultural que se caracteriza por una cierta tendencia a la polarización de los actores, producto de la desconfianza, el desconocimiento del Otro y la validación del uso de la fuerza, así como por falta de reglas claras y sobre todo legítimas. Hacen parte también de un conjunto de estrategias que el Estado y los mismos actores de la movilización ponen en funcionamiento en situaciones conflictivas, cuya par-

ticularidad es incrementar la escalada del conflicto hacia salidas violentas.

Como se ilustra en el siguiente gráfico, en el caso específico del Paro Nacional del 2021, hay tres grandes momentos que muestran la evolución del conflicto. Todo inicia con el lanzamiento del paro, el cual está compuesto por dos grandes acciones estratégicas: movilizaciones en diferentes ciudades del país y bloqueo de vías estratégicas (inicialmente en Cali). La respuesta del gobierno y sus instituciones es utilizar la represión policial para desmontar los bloqueos y enfrentar los disturbios que se presentan en las manifestaciones. Esto trae como consecuencia personas muertas, heridas y otras detenidas. Un tercer momento, es la presencia de actores, como la Minga y los vecinos de barrios aledaños a las zonas de bloqueo, lo que origina confrontaciones directas entre ciudadanos. La participación de nuevos actores busca por un lado fortalecer el paro y, por otro, generar una expresión paralela que cuestiona los bloqueos, apoya las acciones de la fuerza pública y busca salidas políticas como la revocatoria del mandato del actual alcalde de la ciudad. Este esquema se mantiene, aunque se propone una mesa de negociación entre el gobierno y el Comité del Paro. Antes bien, se suman nuevos actores, como los camioneros, taxistas, etc.



El problema con la violencia es que está tiende a expandirse, como lo han mostrado los hechos en el actual paro, a tal punto que se terminan desconociendo las normas vigentes y es allí cuando se instaura la condición del "todo vale" que poco a poco se ha ido presentando en los espacios de confrontación entre protestantes y la fuerza pública. Esto hace que se vinculen cada vez más actores, con menos argumentos y con más acciones violentas, lo que termina desdibujando el sentido mismo de la movilización.

Las prácticas políticas descritas no resisten el examen que un autor como Nohlen (2007), hace de la cultura política democrática, la cual se caracteriza por 4 grandes criterios: la confianza en las instituciones; la existencia de iniciativas que luchen contra prácticas públicas basadas en la desconfianza; la tolerancia frente a la diferencia y el reconocimiento del pluralismo; y la capacidad de la élite política para formar compromisos y consensos.

Cómo hemos podido esbozar a partir de la revisión de las prácticas descritas en este trabajo, lo que prima es una gran desconfianza frente a las instituciones, hay poca tolerancia a la diferencia y una tendencia a prácticas racistas entre la misma ciudadanía, así como muy poco interés de las élites, tanto nacionales como locales, en negociar y crear consensos.

Cuanto más tiempo pasa, la estrategia de los bloqueos y la movilización se vuelve insostenible no sólo por su impacto económico, sino por la sensación de caos y de desgobierno que genera entre los ciudadanos y da pie para cualquier expresión violenta. También se corre el riesgo de que ninguno de los actores dé un paso atrás en sus demandas y conductas, lo que dificulta aún más cualquier salida del conflicto. Lo peor de todo es que estas confrontaciones benefician posturas extremas, que seguramente sabrán atizar los odios y canalizar los miedos de los ciudadanos para el logro de sus propios objetivos políticos.

Referencias

Agudelo-Ramírez, A., Murillo-Saá, L., Echeverry-Restrepo, L. & Patiño-López, J. A. (2013). Participación ciudadana y prácticas políticas de jóvenes en la cotidianidad. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud* 11 (2): 587-602.

Bourdieu, P. y Wacquant, L. (1995). *Respuestas para una antropología reflexiva*. México: Grijalbo.

Gutiérrez, R. (1996). La cultura política en México: teoría y análisis desde la sociología. En Krotz, E. (Coord.) *El estudio de la cultura política en México*. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, pp. 42-68.

Korstanje, M. (2010). El miedo político. En C. Robin y M. Foucault. *Antropología Experimental* 10: 111-132.

https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rae/article/view/1943

Nohlen, D. (2007). Instituciones y cultura política. En: *Constitución, Democracia y elecciones: la reforma que viene*. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pp. 271-275.

Tejero, H. (2009). Prácticas políticas, imaginarios y ciudadanía: la disonancia entre cultura y democracia en la ciudad de México. *Revista Mexicana de Sociología* 71 (2): 247-285.

Useche, O. (2008) Miedo, seguridad y resistencias: el miedo como articulación política de la negatividad. *Polis. Revista Latinoamericana* 19: 19.

http://journals.openedi tion.org/polis/3893

"AL OTRO LADO DEL MIEDO ESTÁ EL PAÍS QUE SOÑAMOS": Mujeres y feministas en el Paro Nacional del 2021

María Eugenia Ibarra Melo[1]
Stephania Recalde García[2]

En esta gran movilización se identifican claros signos del renacer y fortalecimiento de la protesta social y del protagonismo que han asumido varios sectores poblacionales. Los más visibles son los/las jóvenes: muchachos/as de sectores populares, desempleados, sin formación académica o con precaria instrucción para el trabajo y que proceden de hogares con múltiples precariedades; aquellos vinculados a la economía informal y que tienen empleos mal remunerados, sin acceso a la seguridad social y escasa estabilidad laboral; los politizados que cuentan con experiencia en organizaciones de base, estudiantiles y sindicales o en movimientos que promueven las identidades étnicas, de género, que defienden el medio ambiente y aquellos que se reincorporaron con el proceso de la Habana y que mantienen su filiación política con el partido y las organizaciones conformadas por varios de ellos. Un grupo no menos importante lo constituyen los

[1] Socióloga, Doctora en Ciencias Sociales. Profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle. Integrante del grupo Acción Colectiva y Cambio Social (ACASO) vinculado al Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica (CIDSE) de la misma institución. Investigadora del Instituto de Investigaciones e Intervenciones para la Paz (IIPaz) y del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, Mujer y Sociedad (CIEGMS), ambos de la Universidad del Valle.

[2] Trabajadora social. Estudiante de la Maestría en Sociología de la Universidad del Valle e integrante del grupo ACASO del CIDSE. Investigadora del Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana Cali.

milicianos de diferentes grupos armados, ya sea con ideología política o con otros intereses.

No obstante, en este artículo nos interesa identificar los principales cambios y continuidades de la participación de las mujeres en la "explosión social"[3] que ha vivido Colombia, desde el 28 de abril de 2021. A ellas también las moviliza la rabia, la indignación y el deseo de cambio que se expresa en esta coyuntura y, por eso, acompañan "la rebeldía y la resistencia del pueblo". Somos conscientes de que un sector importante de mujeres no ha participado del paro y ha desplegado su influencia en cargos de poder y medios de comunicación para expresar su oposición a esta explosión social. Varias de ellas defienden posturas conservadoras y tradicionales y continúan sosteniendo el *statu quo*, a pesar de sufrir las mismas discriminaciones de sus congéneres. Esta contra movilización es fundamental para comprender el apoyo que tiene la represión que han sufrido los manifestantes por parte de la fuerza pública, pero en esta oportunidad dedicamos atención al activismo que emerge en apoyo al paro nacional y que ha generado gran expectativa en el mundo.

Por lo anterior, se hará énfasis en los rasgos de ese protagonismo en las acciones colectivas que tienen lugar en el espacio público de diferentes ciudades del país y se presentarán evidencias de la constitución de las mujeres y las feministas como un actor fundamental para la continuidad del paro. Aclaramos que las reflexiones sociológicas que presentamos en este artículo incluyen las observaciones de sus autoras, algunas presentaciones públicas realizadas en varios eventos académicos y percepciones y opiniones de 25 personas consultadas para esta indagación, vía What-

[3] Nos referimos a esta noción, acuñada por Manuel Castells (2019), porque refleja el carácter de la movilización contemporánea, que no corresponde propiamente a los movimientos articulados y en torno a proyectos que intentaban cambiar ciertas formas de las instituciones. Las acciones colectivas que presenciamos en el Paro Nacional reflejan el agotamiento de la gente, que se manifiesta de manera pacífica en algunos lugares, pero también con violencia limitada y, en otros casos, con violencia más extrema. Como reconoce Castells, en la protesta hay infiltrados y hay vándalos, pero lo esencial está en la movilización democrática, pacífica.

sApp. Entre estas hay estudiantes universitarios/as de pregrado, maestría y doctorado en Cali y en el exterior (España, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra), además de integrantes de todas las líneas de diferentes puntos de concentración de Cali.

Entre los/as profesionales consultados hay sociólogos/as vinculados a ONG, el sector público, centros de investigación y profesores/as universitarios/as que ejercen en Bogotá, Medellín, Cartagena y Cali; enfermeras, comunicadoras sociales, economistas, ingenieras ambientales, biólogas, además de personas dedicadas a diferentes oficios en Colombia y en el exterior. Varios de ellos/as son activistas y están muy vinculados/as a diferentes actividades del paro. Respecto a sus edades, algunos apenas llegan a la mayoría de edad mientras otros superan los 60 años y cuentan con una experiencia organizativa en sindicatos y otras organizaciones sociales, redes, alianzas y movimientos sociales. En este universo hay mujeres y varones cis género, mujeres trans, lesbianas y hombres homosexuales. A todos/as les agradecemos sus opiniones porque resultaron fundamentales para la comprensión de lo que ocurre en Colombia.

Las preguntas que respondieron los/as entrevistados fueron: 1) En la movilización de los últimos días, las imágenes que circulan en las redes sociales muestran el protagonismo de las mujeres, ¿en su opinión, en qué actividades se destacan más? 2) Si pudiera identificar algunos rasgos del liderazgo de las mujeres en el paro nacional, ¿cuáles serían? 3) ¿cómo la organización en la que participas está vinculada a las movilizaciones? 4) Solo para las feministas: ¿cuáles son las reivindicaciones o demandas de las mujeres que más se recogen en la explosión social de los jóvenes manifestantes? Sus respuestas fueron enviadas en audio o en mensajes de texto y se procesaron de forma artesanal, dado que la muestra no está configurada y atiende a intereses académicos por captar percepciones sobre la coyuntura, utilizando contactos personales de las investigadoras.

El artículo está estructurado en tres partes. En la primera identificamos las principales intersecciones entre la utopía feminista que se expresa en el ciclo de protesta que viene desde 2019, que tiene raíces en la campaña global contra el acoso sexual *Me Too* y la acción internacional contra el feminicidio *Ni una más* y la rebeldía juvenil que se ha expresado en la última explosión social del mismo período (noviembre de 2019 y abril-mayo de 2020). En la segunda parte se describen los escenarios donde tienen protagonismo las mujeres durante esta movilización. Se resalta la especificidad de sus repertorios de acción, sobre todo de aquellos que derivan de la experiencia organizativa de mujeres y feministas y que aprovechan el reconocimiento y el estatus de las madres. La tercera parte muestra la construcción de una hipótesis de trabajo que resulta del análisis de esta coyuntura (abril-mayo de 2021) y de las conexiones que se pueden establecer con las movilizaciones de 2019 y 2020, en las que fue central la denuncia de las feministas para visibilizar la violencia contra las mujeres y, principalmente, el acoso, el abuso sexual y los feminicidios. Aquí también se presentan las principales conclusiones del trabajo.

1. Intersecciones entre la utopía feminista y la rebeldía juvenil en la explosión social que detonó el paro nacional en Colombia

Desde sus inicios el movimiento feminista global se ha opuesto al militarismo porque lo considera el principal soporte del sistema patriarcal. En el caso colombiano esta oposición se expresa en la condena de la violencia sexual y otras prácticas de los militares que convierten el cuerpo de las mujeres en botín de guerra; en su insistencia para que se reduzca el presupuesto militar y en el rechazo del reclutamiento forzado y del servicio militar obligatorio. Al tiempo, este movimiento ha respaldado los diálogos y la negociación con actores armados, incluyendo la perspectiva de género en los acuerdos de paz. Todas sus acciones para lograr estos objetivos les han permitido renovar y fortalecer el currículo

feminista, sobre todo en la explosión social que empieza en 2019 y se prolonga hasta el Paro Nacional de abril y lo corrido de mayo de 2021.

Para la construcción de una sociedad en paz, democrática, justa y equitativa el movimiento feminista ha convocado a otros actores que también rechazan el belicismo y las prácticas asociadas a la militarización. Trabaja de la mano con las víctimas del conflicto armado, que exigen verdad, justicia y reparación; con las organizaciones de afrocolombianos e indígenas, que defienden la autonomía en sus territorios; con las víctimas de violencia sexual, que reclaman justicia y seguridad para vivir sin miedo y disfrutar del espacio público. Con las demás organizaciones de mujeres se vincula para ampliar los derechos sexuales y reproductivos y para condenar el sexismo, la violencia contra las mujeres y la demanda por mayor seguridad para vivir sin miedo; eliminar la discriminación basada en género en el empleo y para ampliar la participación política formal, además de exigir la garantía de los derechos fundamentales.

En concordancia con las solicitudes de otros manifestantes, para ellas es central la reducción de las brechas de desigualdad socioeconómica y de los privilegios de clase, los étnico-raciales y de género, así como la protección del medio ambiente y la riqueza cultural de nuestro país. Por ello, exigen al Gobierno que formule un plan nacional de rescate social y económico de la juventud, que garantice los derechos a la educación y la salud de calidad, a la vivienda y el empleo dignos, que desarrolle un modelo tributario progresivo y equitativo y que respete el acuerdo final para la terminación del conflicto firmado en 2016. Ante la sistemática violación de los derechos fundamentales por parte de la Fuerza pública, exigen protección para los ciudadanos que protestan y, por ello, proponen la desmilitarización de las ciudades, el desmonte del Esmad y la reforma civilista de la Policía.

Juntos/as están elaborando pliegos en los barrios alrededor de las ollas comunitarias, en asambleas populares y otros espacios de diálogo, pero como actor político autónomo reclaman la inclusión o la conciliación de las reivindicaciones feministas históricas. Por lo anterior, en sus acciones colectivas se vislumbra la fuerza y el ímpetu de sus activistas, de organizaciones sociales, culturales y políticas de diferentes sectores (estudiantes, artistas, populares-comunitarias, afrocolombianas e indígenas, reincorporadas, feministas, profesionales, jóvenes; de diversidades sexuales y trans, defensoras de derechos humanos, consejeras territoriales, ediles, trabajadoras domésticas, víctimas del conflicto armado, trabajadoras sexuales, sindicalistas, adultas mayores, mujeres privadas de la libertad y discapacitadas, entre otras) que, sistemáticamente, exigen cambios sociales, culturales y políticos al Estado y a la sociedad.

Así mismo es evidente el apoyo y la solidaridad que han logrado las mujeres no organizadas para sostener acciones colectivas y participar en la protesta. En su análisis de este tipo de movilización Fraser (2009) encontró que lo que se inicia como un movimiento contracultural radical pasa, en la actualidad, a convertirse en un fenómeno social de masas de base amplia, que atrae a mujeres no organizadas pero que también moviliza intereses de clase, étnicos, nacionalistas y de ideología política. Para esta autora, las ideas feministas se han difundido con amplitud global desde los años 1970 y con particular fuerza en las últimas décadas, lo que ha sido facilitado por el internet y las redes sociales. Así, "el efecto no sólo fue el de ampliar enormemente las filas de activistas, sino también remodelar las percepciones lógicas de la familia, el trabajo y la dignidad" (p.96).

Ahora bien, la negociación que proponen las feministas con los demás manifestantes del Paro Nacional no ha sido fácil. Los/as líderes tradicionales se resisten a incorporar sus demandas, bien porque las consideran radicales, peligrosas, desviacionistas,

utópicas, inmorales o porque, según ellos, son inapropiadas para el momento político. Sin embargo, los sucesos de estos días en Colombia revelan una interesante intersección de temas que están siendo debatidos por varios actores, que refleja la influencia del feminismo en la construcción de esa agenda de negociación y, sobre todo, en el modo en que se negocia con el Estado, se estructura un movimiento social diverso, incluyente, legítimo y democrático. Esto es inédito en el país y las evidencias permiten constatar esa novedad en el uso de repertorios con los que se manifiestan. Pero esto lo desarrollamos en el siguiente punto, donde se presentan evidencias del fortalecimiento de este actor político clave en la explosión social que emerge en Colombia y que se constata por los medios de comunicación y, principalmente, por las redes sociales.

Para retomar la reflexión sobre la intersección de las agendas de feministas y de jóvenes es preciso señalar que las primeras tienen una amplia experiencia organizativa y han integrado en su proceso político repertorios de acción y símbolos que marcan un avance hacia una sociedad más equitativa y justa para la diversidad de hombres y mujeres en el país. Cuando gritan "las mujeres no parimos ni forjamos hijas e hijos para la guerra", exigen ser tratadas como ciudadanas y denuncian que no son botín de guerra, expresan su rechazo a la militarización de las ciudades y a la represión de la protesta. Antes denunciaban las violencias contra los cuerpos femeninos y feminizados en el marco del conflicto armado y ahora se oponen a aquella que ejercen miembros del Esmad y la Policía contra los manifestantes. Bajo esta idea demandan más seguridad y cuidado colectivo que se refleja en la consigna "el Estado no me cuida, me cuidan mis amigas".

Su marco de significado no ha variado, pero a este le han sumado varias insignias que las identifican, que son visibles en las marchas, los bloqueos, los plantones y concentraciones. El pañuelo morado, el símbolo de venus y las camisetas con alusiones

a los derechos de las mujeres engalanan a las participantes de los espacios promovidos en el Paro Nacional. Estos símbolos y el lenguaje incluyente se trasladan a murales, proyecciones y comunicados; lo que no es un dato menor, dado que estos guardan relación con sus exigencias. Sus luchas por la justicia de género, los derechos humanos y por una vida libre de violencias, etc. encajan y se sintonizan con las demandas de los/as manifestantes responsables de la efervescencia social que hoy se expresa en las calles.

Este fortalecimiento de la agenda feminista también guarda relación con su participación en las movilizaciones nacionales de los últimos años, en especial las del 25 de noviembre de 2019 en varias ciudades del país, donde se hicieron virales los performances 'Un violador en tu camino' elaborado por LasTesis, un colectivo universitario chileno. Este escenario permitió visibilizar las violencias contra las mujeres, el miedo y la zozobra que sufren en la calle y el espacio público. Así mismo, puso en la agenda pública sus necesidades y exigencias en torno a la formulación de políticas públicas diferenciadas y la creación de instituciones públicas que garanticen sus derechos.

Ahora bien, las feministas saben "capotear" las prácticas de estigmatización que han utilizado las élites masculinas o aquellos grupos con poder para descalificar sus reivindicaciones y, en este momento, aportan esa experiencia a los manifestantes para que no desistan de sus ideales y continúen insistiendo en derrumbar los cimientos patriarcales que sostienen las inequidades, las injusticias y mantienen los privilegios de los varones, de los ricos y de los blancos. El feminismo parte de un proyecto emancipador más amplio, en el que la lucha contra las injusticias de género está ligada a la lucha contra el racismo, el imperialismo, la homofobia y el clasismo, que exige transformar las estructuras profundas de la sociedad (Fraser, 2009). Por eso esperan que esta oportunidad aseste un golpe fuerte al patriarcado y empiezan a

darlo al ampliar y cualificar su participación como delegadas en los comités de paro y a partir de allí han integrado las demandas de género al pliego general. En el punto 5 de este se incluyó la "No discriminación de género, diversidad sexual y étnica". Sin embargo, como en otros espacios políticos, en este están infrarrepresentadas.

Para hacer frente a esta baja representatividad, cerca de 500 feministas de 173 organizaciones construyeron sus propuestas para aportar a la situación social que atraviesa el país basándose en los planteamientos de Nancy Fraser sobre la redistribución, el reconocimiento, la representación y la igualdad como medidas para proteger y garantizar una vida libre de violencias. Señalan que el Comité de Paro "no es suficiente para representar a las feministas" (Peláez, 2021). Por ello, complementan y plantean demandas propias basadas en el diálogo, el fortalecimiento de la democracia y el cuidado de la vida. Dentro de sus exigencias se encuentra la negociación con todas las fuerzas sociales y políticas del país, una renta básica universal que priorice a las mujeres, la reducción de las desigualdades y las brechas de género, la justicia ante las violaciones de DDHH en el marco del Paro Nacional, especialmente violencias contra las mujeres y la reforma a la seguridad.

Situación similar ocurrió en noviembre de 2019 cuando se produjo un documento con enfoque de Derechos Humanos de mujeres diversas, que complementaba las demandas expuestas por el Comité de Paro. En este se exigía el acceso a los derechos humanos de forma diferencial para las mujeres, su participación en la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 y la eliminación de las violencias sexuales y de género (Gaitán, 2019).

2. Tránsitos femeninos y feministas hacia nuevas formas de acción colectiva y repertorios de acción

Desde hace varios años las mujeres y las feministas exponen sus demandas con prácticas disruptivas, formas alternativas y

contenidos que politizan la esfera privada y movilizan prácticas culturales, de cuidado y artísticas, que fortalecen sus apuestas como movimiento. En este paro esa riqueza de los repertorios de acción que están ensayando se amplía para contribuir a la redefinición de espacios políticos y a la transformación de las instituciones tradicionales.

Las mujeres y feministas que están en las principales ciudades son las que han tenido mayor eco en el desarrollo de acciones colectivas y en la construcción de agendas propias, dadas las condiciones geográficas donde se desarrolla con mayor fuerza el paro nacional. Sin embargo, las mujeres rurales (indígenas, afrodescendientes y campesinas) que hacen parte de los procesos sociales y comunitarios, también participan en esta coyuntura y se manifiestan en sus territorios y en las carreteras. Los liderazgos comunitarios tienen presencia sobresaliente de mujeres que han venido formándose en escuelas políticas y de empoderamiento con enfoque feminista, por lo que cuentan con gran cualificación para liderar en escenarios de diálogo y negociación con actores institucionales.

Todas ellas aportan en la organización de acciones colectivas que permiten aprovechar la estructura de oportunidades políticas: gestionan apoyos y consiguen recursos, fortalecen o crean relaciones con aliados poderosos, hacen visibles las reivindicaciones y exigencias del paro ante nuevas audiencias, toman la vocería en los diálogos con el gobierno local y nacional, denuncian la victimización que sufren los manifestantes y contrarrestan la estigmatización de la que estos son objeto por parte de los medios tradicionales y las autoridades.

A continuación enunciamos los espacios de participación más importantes en esta coyuntura, que involucran la creación de acciones colectivas y repertorios de acción o la renovación y ajuste de otros que permiten tejer alianzas y redes, entre la diversidad de organizaciones que conforman los movimientos feministas y de mujeres.

a) Soporte emocional y material. El trabajo de cuidado se traslada de la casa a la barricada

La protección de la vida de los jóvenes de la primera línea se ha convertido en una de las tareas fundamentales para las madres biológicas y para aquellas que asumen el *maternaje,* en el sentido propuesto por Sara Ruddick (1990), en *Maternal Thinking. Toward a Politics of Peace* para referirse a los cambios en la forma en que se vive la maternidad. En los puntos de concentración, ellas asumen sacrificios emocionales y exponen su propia vida por sus hijos y vecinos. Reconocemos que también hay padres cuidando a sus hijos, no obstante, es visible la autoridad que tienen las madres para organizar el trabajo de cuidado: cocinar, limpiar, ordenar, atender enfermos, dar ánimo, contener la angustia y la rabia, disminuir las tensiones, etc. Ellas deciden el menú del día, definen tareas para la preparación de los alimentos, distribuyen equitativa y oportunamente la comida y la hidratación indispensable para los/as muchachos/as de la primera línea. También se encargan de la recolección de alimentos e insumos médicos y proporcionan primeros auxilios para los lesionados durante los enfrentamientos con el Esmad y la Policía

Los medios resaltan su labor porque con estas tareas siguen representando los roles domésticos feminizados, que responden a las virtudes de obediencia, castidad y amor. Sin embargo, mantener el fogón, tomar decisiones para alimentar a los/as manifestantes y proporcionarles confianza adquiere un sentido político trascendental. Alrededor de la olla comunitaria se conversa sobre la vida nacional, se aconseja y se aprende sobre la situación social y política colombiana y de otros países. Estas ollas son impulsadas por mujeres adultas y adultas mayores de barrios aledaños y desarrollan una importante labor de contención emocional con la palabra, los consejos, el llamado a la prudencia y la paciencia.

b) Maternidad politizada

Cuando nos referimos a la politización de la maternidad aludimos a la fuerza con la que actúan las madres durante la protesta, aprovechándose de su estatus simbólico y del reconocimiento que la sociedad les otorga. Sus acciones están orientadas a exigir el respeto por la vida, la búsqueda de los/as desaparecidos/as y la justicia para quienes fueron asesinados. Este rol es diferente al que expusimos en el punto anterior, porque aquí la condición maternal no está referida, necesariamente, a las virtudes de abnegación y sacrificio que se exigen a las mujeres, sino que se ha ido forjando en la práctica política, en algunos casos mientras politizan el dolor y hacen el duelo colectivo por las víctimas. En la consigna "No parimos, no sangramos, no sufrimos, para que el gobierno nos arrebate nuestra razón de ser" se percibe bien esa politización.

Entre las acciones emprendidas en este paro destaca la marcha de las madres y comadres de Cali y el Pacífico realizada en Cali. En esta participaron mujeres diversas, disidencias sexuales y de género, acompañadas de otros sectores sociales; emplearon sahumerios para armonizar, entonaron cánticos, lanzaron manifiestos y se protegieron con mándalas.

También sobresale su participación en la primera línea (véase Foto 1), identificándose como madres. Lo han hecho a partir de los atropellos y la violencia policial que sufren los y las jóvenes en las barricadas. Los/as jóvenes se encapuchan, pero su papel es más de defensa que de confrontación. En algunos carteles se reconoce su labor con la consigna: "El Estado no me cuida, me cuidan las madres de primera línea", en estas acciones asumen un rol maternal de cuidado de la vida de los y las manifestantes sin que, necesariamente, tengan una filiación familiar con ellos. Aunque se ha vuelto viral el caso de las madres de primera línea del Portal de las Américas en Bogotá, que usan escudos de madera para proteger a la multitud que participa de las manifestaciones, hay madres de primera línea en varias ciudades.

Foto 1. *Las madres de la 1ª línea en Pasto.* Foto tomada por Alberto Acevedo

c) Mujeres en las primeras líneas, alineadas con la resistencia

Hay mujeres jóvenes que hacen parte de la primera línea y asumen los mismos roles de los varones. Dada la diferencia con la acción que emprenden las madres es importante aclarar que las jóvenes de la primera línea avanzan adelante en las marchas, están detrás de las barricadas en los puntos de resistencia y se encargan de enfrentar los ataques de la Policía y el Esmad. Esta línea está conformada, sobre todo, por hombres pero las mujeres también participan en la construcción de barricadas, con los elementos que tienen a la mano; hacen labores de vigilancia y

de protección de los puntos, se arman de piedras, sostienen un escudo y repelen la acción del Esmad. En varios puntos toman la iniciativa y no esperan órdenes, actúan de acuerdo con las circunstancias.

d) "Si tocan a una, respondemos todas" No más violencias contra las mujeres

Como señalamos en el primer punto, las acciones que las feministas emprenden en esta coyuntura están ligadas al ciclo de protestas que inició en 2019 cuando tuvieron gran protagonismo al denunciar los abusos de la Fuerza pública, en los casos de una niña indígena violada por varios soldados y el acoso y abuso sexual contra una mujer policía por parte de sus superiores, entre otros. También cuando volvieron virales las campañas *Me Too* y *Ni una más* o *Ni una menos* que crearon una protesta global contra el acoso, el abuso sexual, el feminicidio y otras formas de violencia contra las mujeres, que a pesar de las denuncias seguían en aumento y sin justicia para las víctimas. En ese momento tomó fuerza el performance que convocaba a más mujeres a dramatizar "Un violador en tu camino". Una denuncia de la violencia sexual y su perpetuación como práctica machista auspiciada por el silencio estatal ("El Estado opresor es un macho violador") y la mojigatería de una sociedad que justifica el acoso sexual, porque supuestamente las mujeres lo propician ("El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que no ves").

En el marco del paro nacional de 2021 las feministas retoman la *Canción sin miedo* de Vivir Quintana, que se ha convertido en un emblema del feminismo, y la acondicionan a cada contexto, señalando hechos, nombres de víctimas y agrupaciones locales reconocidas. Esta canción se ha interpretado en diferentes lenguas, con voces de mujeres variopintas. Las frases de la canción se han convertido en consignas pegajosas que se repiten en todos

los eventos para denunciar la desmesura con la que han actuado varios miembros de la Fuerza pública. Las más reconocidas son "Hoy a las mujeres nos quitan la calma. Nos sembraron miedo, nos crecieron alas", "Cantamos sin miedo, pedimos justicia. Gritamos por cada desaparecida". "Que resuene fuerte "¡nos queremos vivas!" Que caiga con fuerza el feminicida", "Ya nada me calla, ya todo me sobra", "Si tocan a una, respondemos todas".

Dada la brutalidad policial y la escasa investigación de los casos de violencia contra las mujeres, las organizaciones de mujeres y feministas han elaborado recomendaciones para las manifestantes; han activado líneas telefónicas y de WhatsApp (la violeta), protocolos, rutas seguras, pautas de autocuidado (Sisma Mujeres) etc., e imparten clases de defensa personal como una forma de protección para las mujeres en espacios públicos.

e) El arte y cultura como potencia política para la movilización de las mujeres

Desde que se desencadenó esta explosión social en Colombia se ha pasado progresivamente de las acciones colectivas tradicionales a las disruptivas, que utilizan el arte para hacer pedagogía, atraer aliados, convencer audiencias y mantener a la ciudadanía en las calles, sosteniendo como principios feministas al antimilitarismo, el pacifismo, el llamado al diálogo amplio y diverso y las prácticas políticas orientadas al fortalecimiento de la democracia.

Las mujeres han sido protagonistas en el desarrollo de actividades lúdicas, recreativas, pedagógicas y deportivas, que motivan a los ciudadanos a permanecer y acompañar a la primera línea en los puntos de resistencia y a marchar por las ciudades arengando en contra del Gobierno y de la Fuerza pública, principales oponentes de este estallido social. Se vinculan como gestoras culturales o participan en las obras de teatro, compiten en concursos de baile, dirigen juegos recreativos para niños y adultos, cuentan

cuentos, cantan, imprimen consignas en camisetas, promueven discusiones políticas y clases en la calle, etc.

El desarrollo de estas acciones les permite demostrar sus habilidades y destrezas, visibilizar su arte y adquirir un mayor reconocimiento en el ámbito social. Además, buscan reivindicar desde lo simbólico su competencia y el lugar que ocupan las mujeres en el espacio público como lugar privilegiado de la política que se construye en contraste y oposición con lo privado (Castro, 2018). Esto es posible porque el movimiento feminista ha logrado politizar temas, espacios y modos de hacer que son considerados cotidianos para apropiarlos e incorporarlos al debate público.

En este sentido las distintas acciones artísticas y culturales han dotado de potencia política la acción de las mujeres, favoreciendo la producción de otros sentidos y la construcción de relaciones horizontales y de sororidad. En los puntos de concentración se realizan clases de tejido, que unen a hombres y mujeres para dialogar alrededor del círculo. Si bien esta es una práctica feminizada, el traslado del acto privado a las calles es usado para protestar y tejer consignas feministas y de apoyo al paro. Desde aquí se recupera la intervención artística como un acto político en sí mismo, que trastoca los estereotipos tradicionales. El muralismo también ha sido usado en varias ciudades como forma de denuncia frente a las violencias sufridas, como es el caso del mural realizado en Bucaramanga que denunciaba "Estado feminicida, ni perdón ni olvido".

Otra acción muy divulgada fue el performance de tres mujeres trans en Bogotá, a través del baile Vogue, en la Plaza de Bolívar y varias estaciones de Transmilenio en apoyo al paro nacional. Este es un gesto subversivo en el que se desafían las normas heteropatriarcales, al usar el baile como estrategia de lucha y resistencia bajo la presencia y desconcierto de policías que se encontraban alrededor.

En estos espacios también convergen las acciones de mujeres con identificación étnico-racial. Especialmente en Cali, las mujeres y hombres afrocolombianos, son actores clave de las movilizaciones en el oriente de la ciudad, que exigen mejores condiciones de vida. Las mujeres cantadoras del Pacífico alzan su voz durante las marchas refiriéndose a los/as jóvenes muertos, desaparecidos/as y los abusos sufridos en durante las protestas. Así mismo, participan de espacios de baile y performance para visibilizar las violencias en sus cuerpos. Por su parte, las mujeres indígenas usan el tejido, los rituales de sanación, la música y el baile andino como aporte a las diversas acciones desarrolladas. En la cotidianidad del espacio público apropiado durante el paro, ellas realizan rituales de protección y mándalas.

En Puerto Resistencia, la Loma de la Dignidad y otros puntos de concentración han acondicionado bibliotecas populares con libros recolectados de la propia comunidad, hacen trueques y se dedican a la lectura colectiva como forma de resignificar los lugares donde estaban situados los CAI (Centro de Atención Inmediata) de la Policía.

f) "Si no luchamos juntas nos matan por separado". Coordinación, gestión y representatividad, mujeres en la tercera y cuarta línea de resistencia

Las mujeres han asumido, progresivamente, espacios de representación y coordinación en el paro nacional. Este cambio en los roles tradicionales se debe al largo proceso que han desarrollado y al relevo generacional que ha tenido el feminismo en la lucha por los derechos políticos y sociales de las mujeres a nivel nacional y latinoamericano, lo cual trae mayores compromisos, desarrollo de agendas y la inclusión de demandas en pliegos más amplios como los que está elaborando el Comité de Paro a nivel nacional. Como señalaron varios/as entrevistados, el ímpetu de las jóvenes rompe barreras, crea redes y forja lugares de partici-

pación y representatividad en la toma de decisiones, a pesar de los obstáculos que todavía les imponen los líderes tradicionales.

En cuanto a coordinación, tienen un papel fundamental en la organización de eventos, en la elaboración de comunicados públicos y de denuncia, el desarrollo de estrategias comunicativas y de difusión, gestión de recursos, entre otras. Son las cabezas visibles en cada punto de resistencia y aportan su gestión en espacios locales del Comité de Paro. Estas acciones dan cuenta que jóvenes y adultas van copando espacios de gobernanza, que se están construyendo a nivel local. Así mismo, se destaca la acción de mujeres que desde su profesión y experticia apoyan la defensa de los derechos humanos y ponen en funcionamiento redes de apoyo psicosocial. Las primeras acompañan el proceso de denuncia, seguimiento y sistematización de los casos de violaciones a DDHH; se encuentran en los puntos de concentración y aportan a la protección de las y los manifestaciones. Las segundas hacen parte de grupos mixtos y de mujeres que, como profesionales de trabajo social y psicología, crean canales virtuales y presenciales de acompañamiento para hacer atención en crisis y contención emocional, con el objetivo de aportar a la situación social que enfrenta el país.

En esta tarea de gestión y coordinación sobresale la labor de las colombianas en el exterior, que trabajan o están realizando estudios de postgrado. Aunque no pertenezcan a una organización social o tengan escasa formación política, los/as migrantes constituyen un "agente" muy relevante para ampliar alianzas y redes internacionales que mantienen la vigilancia sobre el Estado colombiano.

Tal como comprobamos con las entrevistadas que residen en Alemania, Inglaterra, Italia, Estados Unidos, España y Brasil, entre los/as colombianos/as residentes en el exterior hay muchos colombianos comprometidos con el Paro Nacional. Su trabajo con las redes que han armado refuerza la transmisión de

La "Mona". Foto tomada por BBC Mundo.
Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57110382

mensajes, el llamado a la organización, la solicitud de permiso a las autoridades locales para realizar plantones, concentraciones, marchas, foros, performances y expresiones artísticas y culturales, entre otras acciones que estimulan la movilización en Colombia. Han logrado comunicados públicos de autoridades políticas y académicas de los países donde residen, que denuncian la violación de DDHH, la estigmatización de los jóvenes. Ellas recopilan información y la divulgan casi en tiempo real a todos los lugares del planeta, asumen la vocería y animan a los colombianos a "continuar en la calle, a no desfallecer, a aumentar las fuerzas para resistir". Reconocen que sus acciones generan empatía con la resistencia que expresan los jóvenes y propician la conmoción de los colombianos, que antes no tenían interés por la política.

En Colombia las mujeres asumen la vocería y representación de los manifestantes en los puntos de resistencia, comparten sus demandas a los medios de comunicación comunitarios, locales, nacionales e internacionales y llevan las exigencias colectivas a los espacios de diálogo con el gobierno local, regional y nacional. Ellas lideran un nuevo esquema político-organizativo que prescinde de las estructuras jerárquicas y verticales, cambiándolos por espacios democráticos y horizontales. En este sentido, se caracterizan por el trabajo colectivo, amplio y no centralizado.

Un rasgo de esta vocería es la que asumen las mujeres jóvenes y que ha sido visible en varios eventos con funcionarios del Estado. Por ejemplo, en el foro "los jóvenes tienen la palabra", organizado por representantes a la Cámara de diferentes partidos en Cali, las mujeres negras fueron determinantes; también lo fueron en el encuentro con el Alcalde de Cali en el Coliseo María Isabel Urrutia. Allí una mujer sentenció que no se negociaría ese día y alentó a los participantes a retirarse y la reunión se interrumpió. Si bien las vocerías se asumen de forma tranquila y bien argumentada, han aparecido posiciones radicales que sorprenden a los asistentes de los diferentes espacios de concertación. Algunos funcionarios, empresarios y líderes de opinión las han catalogado como violentas cuando no ceden la palabra, porque no hablan pausado y en tono bajo o no se dejan imponer el silencio. Es decir, el nuevo rol no está libre de prejuicios, sobre todo cuando su comportamiento no se ajusta a los estereotipos de género.

Lo anterior es un cambio sustancial en la figura de vocería, al menos en los espacios comunitarios y locales donde logran ser delegadas para dialogar con actores institucionales. Se reconfiguran los estereotipos tradicionales en los que las mujeres son participantes pasivas de reuniones y actividades públicas. Es posible que esto ocurra más en el nivel local que en el central porque la mayoría de los espacios de representación política están ocupados por hombres, por ejemplo, en el Comité Nacional de

paro la única representante es Jennifer Pedraza, líder estudiantil, miembro de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles ACREES. Bajo estas apreciaciones, la diversidad del movimiento feminista y de mujeres en Cali y a nivel nacional vienen transformándose e impactando de forma más amplia las estructuras patriarcales. En este momento de ebullición social, se visibilizan y fortalecen las apuestas de las mujeres como se verá en el siguiente apartado.

3. Crece y se fortalece el feminismo colombiano en el paro nacional. Reflexiones inconclusas

Este trabajo fue realizado a partir de la observación directa y, sobre todo, del conocimiento de la trayectoria del movimiento de mujeres y feminista en Colombia y de los diferentes ciclos de acción colectiva en los que participan. Se alimentó de las apreciaciones que proporcionaron las entrevistadas y de abundantes fuentes documentales (audios, videos, declaraciones) que circularon en las redes durante el desarrollo del paro. El análisis de esta información requiere un procesamiento más riguroso y quizás con la distancia que proporciona el tiempo, más adelante podamos confirmar algunas de las intuiciones que dejamos plasmadas en esta sección.

Sabemos que la sororidad entre feministas y mujeres se viene afianzado en Colombia, desde que luchan juntas para denunciar los efectos del conflicto armado en la vida y el cuerpo de las mujeres victimizadas por actores armados legales e irregulares. Sus caminos son concomitantes, pero mantienen la independencia en diferentes campos y todavía es visible la distancia en varias de sus apuestas. Mientras las primeras siguen reivindicando *intereses estratégicos* que modifiquen las estructuras culturales que sostienen el patriarcado. Las mujeres siguen atadas a la búsqueda de *objetivos prácticos* que mejoren sus condiciones de vida, las de sus familias y comunidades, sobre todo, y lo hacen apegadas a la

formulación de políticas públicas y sociales (Molineux, 2003), que siguen convirtiéndolas en sujetos carentes, o en clientes que requieren servicios de emergencia.

En este ciclo de protesta las une la denuncia por el incremento de los hechos asociados a la violencia contra las mujeres. La sistematicidad de los casos cometidos por la Fuerza Pública (militares y policías) ha impulsado su "juntanza" para exigir justicia, garantías para la vida y los DDHH. Un ejemplo fue la gran movilización en Popayán producida por la indignación de colectivas feministas y comunidad en general, después del suicidio de una menor de edad que sufrió una agresión sexual por uniformados de la Policía. Así mismo, el movimiento de mujeres de Cali convocó a una rueda de prensa para referirse a las violencias contra las mujeres en el marco del paro nacional. En este espacio las víctimas denunciaron ante medios locales y nacionales la violencia y la represión vivida en la ciudad. Todo esto fue acompañado con acciones artísticas que reivindican la búsqueda de justicia.

Feministas y mujeres combinan repertorios simbólicos y culturales, acuden al performance, que tiene gran repercusión cuando se hace de manera simultánea y se vuelve viral en sus amplias redes sociales nacionales e internacionales, que se han convertido en el principal medio de difusión para ampliar la conciencia social respecto a la violencia que se cierne sobre las mujeres, por el solo hecho de serlo. En ese sentido es fundamental destacar la continuidad que tiene esta reivindicación con lo que aconteció en el mundo a partir de las denuncias emprendidas por artistas y deportistas en la campaña *Me too* y *Ni una menos*, que permitió visibilizar y reconocer el acoso y el abuso sexual como prácticas masculinas que victimizan a mujeres de todas las clases sociales, etnias, religiones, edades, etc. Su cercanía y articulación ha permitido una transición de los pequeños colectivos a un movimiento amplio y diverso donde confluyen mujeres de diversas características sociológicas. Esto genera mayor ebullición en las

protestas, potencialidad en sus exigencias generales y en las diferenciadas, además de las acciones de defensa y protección de la vida de los jóvenes, de la ciudadanía movilizada y en particular de las mujeres. También se constata que, en medio de la explosión social, ellas continúan erosionando las formas tradicionales de pensar la política y la función de sus instituciones.

Luchas compartidas, logros parciales

Durante un mes de protestas se han producido varios logros, conseguidos a partir del sostenimiento de la acción colectiva politizada, artística y pacífica desde los/as manifestantes: el retiro de la reforma tributaria, motivo principal de las protestas; se archivó el proyecto 010 de la reforma a la salud y dos altos funcionarios renunciaron, el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos.

La difusión de la situación nacional ha desencadenado una amplia solidaridad internacional expresada a nivel individual por colombianos/as que viven fuera del país y a nivel colectivo por centrales sindicales europeas, congresistas estadounidenses, organismos internacionales de DDHH, el Vaticano, universidades, asociaciones académicas y demás actores políticos que siguen con detenimiento las violaciones de DDHH en el país. En este marco, las organizaciones feministas y de mujeres han ganado habilidad para reunirse, acordar e incidir en los pliegos que se construyan para las negociaciones con el gobierno nacional, que posibiliten la participación real y efectiva de las mujeres en tanto no se subordinan a simples espectadoras, sino a agentes con liderazgo y disputa de poder, que se traduzcan en mejores condiciones de vida para las familias y las poblaciones más vulnerables que tienen un gran porcentaje de jefatura femenina.

Las demandas y exigencias históricas del movimiento feminista y de mujeres empiezan a tener asiento en los espacios políticos, empezando por la forma en que se nombran. El uso del

lenguaje inclusivo en comunicaciones verbales y escritas de los puntos de resistencia y comités de paro se ha convertido en una oportunidad para el reconocimiento de las mujeres como actoras políticas, que proponen, escriben y divulgan los pliegos. Acorde con esto hay una visibilización a nivel nacional e internacional de la situación de los derechos humanos de las mujeres, que ha posibilitado la denuncia, seguimiento, sistematización y divulgación de documentos para constatar la sistematicidad de los casos en el marco de las protestas por parte de la Fuerza Pública. Las ONG y redes de DDHH presentan casos e informes detallados que evidencian un avance en el reconocimiento de las violencias, las diferencias en el marco de la protesta social y el llamado a la justicia de género.

Unido a lo anterior se ha activado una importante discusión académica, política y jurídica promovida por las universidades y en la que participan líderes/as sociales, funcionarios/as e investigadores/as en foros, paneles y propuestas audiovisuales que buscan identificar la participación de las mujeres y los/as jóvenes en los puntos de resistencia, reconocer las violencias diferenciadas sufridas en el paro y exponer el pliego de negociación con el gobierno. Así mismo se perfilan análisis sociológicos y políticos para comprender el estallido social en el país, sus causas, oportunidades de diálogo, entre otras.

No obstante, esta intensa actividad, a un mes del inicio del paro nacional no hay una mesa de diálogo establecida entre los distintos actores, por ello persisten las exigencias de los/as manifestantes hacia el gobierno nacional. Estas pasan por la desmilitarización de las ciudades, la reforma civilista a la policía donde la vida sea una prioridad. También se exige justicia frente a las graves violaciones de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública; todo bajo la garantía de una vida libre de miedo y de violencias. Otro asunto importante que se suma a las exigencias del comité de paro y de las feministas es la renta básica universal,

priorizando a las mujeres que sufren con más fuerza el desempleo y la desigualdad.

Referencias

Castells, M. (2019). Intervención en el seminario *Explosiones sociales: una visión global*. Santiago de Chile, en https://www.youtube.com/watch?v=h97emCUyMf0

Castro, A. (2018). El lugar del arte en las acciones políticas feministas. *Configurações* 22: 11-30.

Fraser, N. (2009). El feminismo, el capitalismo y la astucia de la historia. *New Left Review* 56: 87-104.

Gaitán, L. (2019). Ninguna lucha vale más que la otra: las mujeres en el paro. En: https://pares.com.co/2019/12/16/ninguna-lucha-vale-mas-que-otra-las-mujeres-en-el-paro/

Molineux, M. (2003). *Movimientos de mujeres en América Latina*. Estudio teórico comparado. Madrid: Cátedra.

Peláez, L. (2021). Qué proponen los colectivos feministas en el Paro Nacional en Colombia. En: https://www.nodal.am/2021/05/que-proponen-los-colectivos-feministas-en-el-paro-nacional-en-colombia/

Ruddick, S. (1990). *Maternal Thinking*. London: Women Press.

LO LOCAL

ARDE CALI, SUCURSAL DEL CIELO Y CAPITAL MUNDIAL DE LA SALSA

Luis Carlos Castillo Gómez[1]

El Paro Nacional

El 28 de abril de 2021, Colombia fue escenario de un paro nacional que convocó a miles de manifestantes en las principales ciudades del país en oposición al proyecto de reforma tributaria que el Congreso de la República discutía. Ante la crisis económica y social de grandes proporciones generada por el Covid-19, la propuesta pretendía recaudar 23 billones de pesos, unos 6.300 millones de dólares. Aunque Colombia es el segundo país más desigual de América Latina después de Haití, con un Coeficiente de Gini de 0.544 (DANE, 2021, p. 3), indicador de la profunda desigualdad, la propuesta buscaba que buena parte de esos recursos proviniesen de los sectores medios y asalariados de la población, empobrecidos como resultado de la pandemia, ampliando la base gravable para que un mayor número de personas declararan y pagaran renta.

El proyecto fue una decisión de política pública, iniciador de una trayectoria autodestructiva para el alto gobierno, que evidencia la incomprensión de un Ministro de Hacienda neoliberal que no leyó correctamente la crisis producida por la pandemia,

[1] Sociólogo, Doctor en Sociología. Profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle. Miembro del grupo de investigación sobre Estudios étnico-raciales y del trabajo en sus diversos componentes sociales, que forma parte del Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica (CIDSE) e investigador del Instituto de Investigaciones e Intervenciones para la Paz (IIPaz) de la Universidad del Valle.

el acelerado proceso de empobrecimiento de buena parte de la población y la ruptura entre gobernantes y gobernados que viene de tiempo atrás. Una vez presentado, los diferentes sectores de la coalición gubernamental se distanciaron. El máximo dirigente del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, dijo que era una propuesta inconveniente para su partido; insinuó que podía comprometer las aspiraciones de su agrupación política de continuar en el poder en las elecciones presidenciales de 2022. El expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, señaló que era nefasta porque gravaba a las clases medias tan duramente golpeadas por la pandemia; por su parte, Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de la República y jefe de Cambio Radical, se distanció de la propuesta, porque consideraba que no era el momento oportuno para que hiciese tránsito en el congreso. A este grupo se sumó Dilian Francisca Toro, presidenta del Partido Social de la Unidad Nacional, más conocido como de la U. Por su parte, la oposición, en sus diferentes matices, Partido Verde, Polo Democrático, Colombia Humana, atacó fuertemente el proyecto por regresivo, por pretender gravar bienes de la canasta familiar y por hacer recaer en los hombros de los sectores medios y de la clase trabajadora la solución de la crisis fiscal generada por la pandemia.

El proyecto de reforma tributaria fue el florero de Llorente[2]. Después de las masivas marchas del 28 de abril de 2021, en las que miles de colombianos se expresaron pacíficamente en contra de la iniciativa, tanto en las grandes como en las pequeñas concentraciones urbanas, el Presidente lo retiró, no sin remilgos. Con una infinita incomprensión de lo que estaba sucediendo y

[2] En Colombia, la expresión "florero de Llorente" refiere a la causa aparente del grito de independencia del 20 de julio de 1810. En Santafé de Bogotá, el criollo Luis de Rubio le solicitó al negociante español Luis González Llorente el préstamo de un florero para atender en una cena al comisario real Antonio Villavicencio. Los criollos sabían que Llorente se negaría. Efectivamente, la negativa fue utilizada para caldear los ánimos contra los españoles e iniciar la revuelta, pero detrás había causas profundas y estructurales que llevaron al proceso independentista que concluyó con la batalla de Boyacá del 7 de agosto de 1919.

a pesar de que el país comenzaba a arder por todos los costados, llamó a los partidos políticos a presentar un nuevo proyecto de reforma tributaria. Este fue el combustible que avivó la hoguera a límites inimaginables. El fenómeno de las grandes concentraciones y movilizaciones de las masas en las calles o de la multitud, como diría Negri (2004), tan característico de la sociedad contemporánea, se tomó la geografía nacional.

El país se incendió como un reguero de pólvora y las protestas se extendieron por el territorio de la nación. Las principales arterias y ciudades capitales como Bogotá y Cali fueron bloqueadas internamente y en sus principales vías de acceso. El 12 de mayo, volvieron las masivas y pacíficas manifestaciones pero, cuando los miles de manifestantes se disgregaban, apareció una expresión de ira y de odio manifestada en la destrucción de la infraestructura de los sistemas de transporte masivos y de las instalaciones de instituciones oficiales, el incendio de los llamados Centros de Atención Inmediata (CAI) y en enfrentamientos con la policía. Las autoridades llamaron a estas acciones vandalismo y plantearon la hipótesis de que todo obedecía a una conspiración de vándalos coordinados internacionalmente[3].

Mientras la confrontación se hacía más intensa, el comité de paro presentó un pliego de peticiones de siete puntos:

1) Retiro del proyecto de Ley 010 de salud y fortalecimiento de una masiva vacunación.
2) Renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual.
3) Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina).
4) Subsidio a las mipymes, empleo y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria.

[3] Sobre el vandalismo, el Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico dice: "VANDALISMO, del fr. Vandalisme, creado en 1794 por el obispo republicano Grégoire para vituperio de los destructores de tesoros religiosos, y en memoria del pueblo germánico de los Vándalos que saqueó a Roma en 455 y asoló a España y otros países romanos" (Corominas y Pascual, 1983, p. 738).

5) Matrícula cero y no a la alternancia educativa.
6) No discriminación de género, diversidad sexual y étnica.
7) No privatizaciones y derogatoria del decreto 1174. Detener erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato.

Luego, el Comité de Paro presentó 19 exigencias más.

Por los excesos de la Fuerza Pública comenzaron a morir jóvenes y se presentó el fenómeno de personas desaparecidas que habían tomado parte en las manifestaciones y en los enfrentamientos con los organismos de seguridad del Estado. El 6 de mayo, 26 ONG defensoras de derechos humanos, entregaron un informe a la Defensoría del Pueblo, en el cual reportaron 471 personas desaparecidas; sin embargo, el 12 de mayo la Fiscalía informó que habían sido ubicadas 227 personas, antes reportadas como desaparecidas (*El Tiempo,* 16 de mayo de 2021, p. 1.8).

El 13 de mayo la Cancillería entregó un informe a la opinión pública en el cual presentó un balance de lo acontecido hasta esa fecha. De acuerdo con dicho informe, durante los primeros 13 días de manifestaciones, se habrían presentado 2.761 concentraciones, 1.382 bloqueos, 1.535 movilizaciones, 5.690 actividades, 878.000 participantes. Se habrían destruido parcial o totalmente por efectos del vandalismo 1.052 vehículos de transporte público, 828 entidades y cajeros del sector bancario, 305 establecimientos comerciales, 156 estaciones de trasporte público, 87 estaciones de gasolina, 79 infraestructuras públicas y de gobierno, 46 vehículos particulares, 14 monumentos culturales, 99 unidades de policía atacadas, 51 vehículos institucionales vandalizados, 19 vehículos incinerados; 1.594 ciudadanos habría resultados lesionados, de los cuales 852 (53%) eran uniformados de la Policía; 34 personas fallecidas, dos eran agentes de la Policía (Cancillería, 2021, pp. 3-6).

El 23 de mayo, a escaso un mes de inicio del paro, habían fallecido 42 personas. Se hablaba de cientos de desaparecidos; aunque la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo decían que no existían denuncias formales por desaparecidos en el marco del Paro Nacional (p. 6), se habrían producido 4.399 concentraciones, 1.808 marchas, 2.151 bloqueos, 464 movilizaciones y el impacto sobre la economía excedía los $10 billones (*El Tiempo*, 23 de octubre de 2021, p.12).

Mientras el suministro de alimentos, combustibles y medicamentos es afectado y la población ha comenzado a sufrir la escasez de dichos suministros, el país enfrenta el tercer y peor pico de la pandemia. Con cerca de 100.000 fallecidos por Covid-19 al 30 de mayo de 2021, según el Centro de Investigación sobre el Coronavirus de la Universidad Johns Hopkins, Colombia se ubica como el cuarto país en el continente en el número de muertos por el virus, después de Estados Unidos, Brasil y México. Con un ritmo lento en el proceso de vacunación, al 21 de mayo de 2021 solo habían sido completamente inmunizadas 3 millones de personas, es decir, el 6% de los habitantes y el 8,7% de la población necesaria para alcanzar los 35 millones que garantizan la inmunidad colectiva frente al Covid-19 (*El Tiempo*, 21 de mayo de 2021, p. 1.6).

Sin atinar a comprender las profundas y complejas causas del estallido social, el más amplio y masivo de que se tenga noticia en la historia contemporánea colombiana, por encima de las protestas de noviembre de 2019 y septiembre de 2020, del paro cívico nacional de 1977, de las manifestaciones de mayo de 1957 que concluyeron con la renuncia del general Rojas Pinilla y de su reemplazo por la Junta Militar de Gobierno, incluso, de El Bogotazo del 9 de abril de 1948. El Gobierno y algunos dirigentes políticos de la coalición gubernamental, en especial los del Frente Democrático, acudieron a las teorías conspirativas, tan usadas por los gobiernos para explicar las convulsiones sociales

y atribuyeron el estallido a un complot de la delincuencia, a las disidencias de las Farc, a las milicias del ELN, al narcotráfico, a la injerencia de Venezuela y al principal dirigente de la oposición, Gustavo Petro. Aunque es cierto que las milicias son un actor del conflicto y creen estar en un momento insurreccional y que delincuentes han destruido infraestructuras públicas como alcaldías, palacios y despachos judiciales en Bogotá, Medellín, Popayán, Cartagena, Cali, Bucaramanga, Pasto y Tuluá, entre otras ciudades, enfatizar en una maquinación del vandalismo, no deja de ser una explicación sociológicamente simplista y maniquea. Y así como en el octubre chileno, el presidente Piñera dijo que el país estaba en guerra y para sofocar el volcán social acudió a dichas teorías para decretar el estado de excepción y el toque de queda, el primer mandatario colombiano intentó hacer lo mismo, pero la Corte Constitucional lo disuadió, al no encontrar motivo para tan crucial decisión.

Cali: epicentro del estallido social

Cali, la tercera ciudad de Colombia, ha tenido un protagonismo axial en el estallido social. ¿Por qué?

La teoría de los movimientos sociales y la acción colectiva enseña que en las sociedades contemporáneas siempre habrá razones para que la gente proteste y se movilice, pero el tránsito de estos estados latentes a una convulsión social, como la que vive Colombia y Cali, implica la mezcla compleja de causas estructurales y coyunturales y de condiciones de oportunidad política que conectan recursos, organizaciones e identidades colectivas.

En efecto, al lado del surgimiento de cientos de escuelas de salsa, donde jóvenes, en su mayoría negros empobrecidos, encuentran en el baile la forma de subsistir ante el entrampamiento de la pobreza, Cali se fue convirtiendo aceleradamente en una olla de presión social, pronta a estallar en cualquier momento. El paro del 28 de abril de 2021 fue la chispa que incendió la pradera.

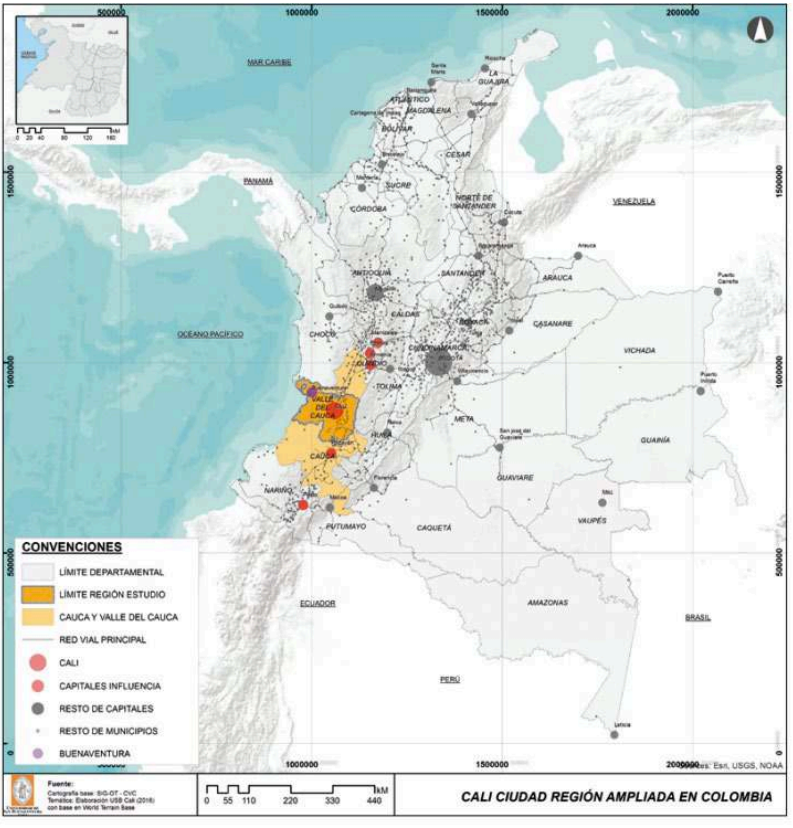


Ilustración 1: *Cali, ciudad región en Colombia*
Fuente: Urrea, Loaiza y Hurtado, 2019, p. 25.

Cali es el centro de la región metropolitana más importante del suroccidente de Colombia. De acuerdo con el censo de población de 2018 tiene 2.228.000 habitantes y se caracteriza por una segregación racial espacial (Barbary, 2004, pp.157-194). Concentra en el oriente quinientos mil afrodescendientes, que contabilizados con los del área metropolitana, suman millón y medio. Una de las principales concentraciones de gente negra de América Latina. La ciudad es receptora de miles de migran-

tes iletrados provenientes de la región de la costa Pacífica –la pequeña África colombiana– y del sur del país, desplazados por el conflicto interno y que el sector formal de la economía no ha podido absorber, por lo que se han sumido en condiciones de pobreza y de miseria, denigrantes de la condición humana. Recientemente han llegado contingentes importantes de venezolanos que, huyendo de la crisis de su país, llegan a Cali porque dicen que la gente es amable y los tratan bien. Las ilustraciones 1 y 2 muestran la ubicación de Cali como región metropolitana en Colombia y en el suroccidente colombiano.

Desde los años 1950, pero especialmente desde 1980, la ciudad ha sido uno de los principales centros del narcotráfico, cuna del tristemente célebre cartel de Cali. Desmantelado en los años 1990, surgieron estructuras descentralizadas que controlan armas y el tráfico de drogas. Después de pasar por siete generaciones, los "nuevos" narcotraficantes se convirtieron en gatilleros (Vanegas, 2019, pp.241-247), es decir, en bandas que resuelven sus desavenencias mediante el accionar mortífero de las armas, fenómeno más conocido como el "ajuste de cuentas", principal causa de las altas tasas de homicidios. Ante la miseria y la exclusión, jóvenes de las grandes aglomeraciones poblacionales integran decenas de pandillas que más que ser grupos de delincuentes, como los medios de comunicación los califican, constituyen espacios de socialización y relación con sus pares; aunque integrantes de dichas pandillas, para subsistir y comer, se vinculan con el microtráfico de estupefacientes, el robo e, incluso, el sicariato (Cocuñame, 2021; Ordoñez, 2007, 2017; Perea, 2007, 2021).

Cali es también el epicentro de la región donde existe el área cultivada de coca más grande del mundo. En efecto, el número de hectáreas cultivadas de esta planta saltó en el Pacífico colombiano de 18.437 en el 2005 a 60.437 en el 2019, acumulando el 40% de las hectáreas productivas a nivel nacional (Oficina de las

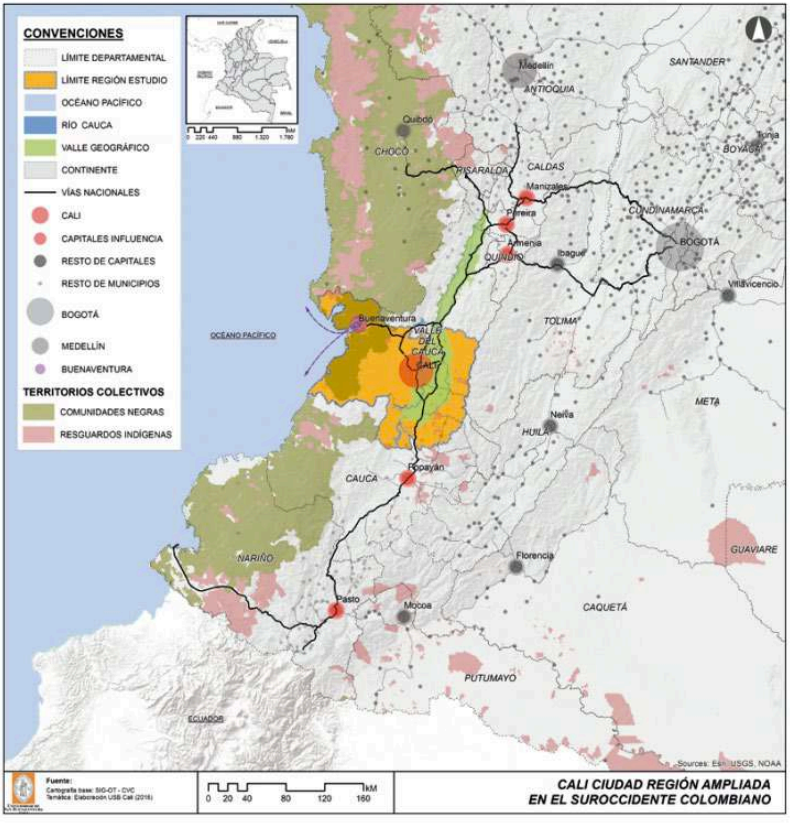


Ilustración 2: *Cali, ciudad región en el suroccidente colombiano*
Fuente: Urrea, Loaiza y Hurtado, 2019, p. 26

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, 2020, p. 69). Después del Acuerdo final para la terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera del 2016, firmado entre el presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc, se ha originado una disputa sangrienta entre grupos armados ilegales por el control del territorio, de las zonas cultivadas de coca y de las rutas del narcotráfico (Vanegas, Calderón y Vélez, 2018). A lo anterior se suma la debilidad y la crisis de legitimidad de un

Estado local ineficiente, con prácticas de corrupción endémicas que desangran el presupuesto de inversión social; el desprestigio de los partidos, su desconexión con la gente y una juventud sin futuro que no cree en el sistema político.

De acuerdo con la sociología política no hay conexión directa entre pobreza y protesta social o entre bajos salarios y estallidos sociales. Los campesinos chinos vivieron durante siglos en condiciones de miseria y no hubo convulsiones sociales hasta la Revolución China del siglo XX. Pero en el caso de Cali el empobrecimiento de los jóvenes se articuló con la irritación producida por las medidas de confinamiento, por las cuarentenas y los toques de queda para detener la expansión del contagio y la mortalidad por el Covid-19.

En efecto, el 29 de abril de 2021, después de las grandes manifestaciones del día anterior, el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) informó que la pobreza monetaria en Colombia pasó del 35,7% de la población en el 2019, al 42,5%, en el 2020. Un aumento brutal de 3,5 millones de personas arrojadas al infierno de la pobreza de un año a otro, y 2,8 millones convertidos en miserables que no generan los ingresos para comer (DANE, 2021, pp. 2-4). En este orden de ideas el 2020 cerró con 21 millones de colombianos empobrecidos. Esto significa que subsisten con 87 dólares mensuales. Y lo peor, de esos 21 millones, más de tres millones no tienen con qué comer. Y mientras la pobreza y la miseria se enseñoreaban con la gente, la riqueza, como un lobo hambriento, se concentraba mucho más, puesto que el Coeficiente de Gini pasó de 0,526 en el 2019 a 0,544 en el 2020 (p. 3).

Estos datos nacionales se acentúan en la "sucursal del cielo". La crisis económica ha afectado también a los sectores medios de la población que ven quebrados sus negocios, restaurantes y comercio. En el mes de enero de 2021 la tasa de desempleo en Cali y su Área Metropolitana llegó al 17,3%, para el momento la más alta desde registros oficiales (DANE, Gran Encuesta Inte-

grada de Hogares del trimestre de diciembre de 2020 a febrero de 2021). Pero en Cali el desempleo se ha ensañado con los jóvenes con una tasa del 27,7%, y en las mujeres saltó al 31,3% (*Portafolio,* 14 de mayo de 2021, p.6), concentrándose en aquellos que tienen pieles oscuras.

Las condiciones de exclusión, miseria, desempleo y racismo difuso, que produce segregación racial espacial, se entrecruzan para producir la ausencia de futuro de grandes contingentes de jóvenes caleños, hacinados en las grandes concentraciones poblacionales del oriente y de la zona de ladera del occidente, muchos de los cuales tienen que acudir a la delincuencia para comer.

En la anterior descripción, que no gusta a muchos de los que añoran la "caleñidad" y la Cali cívica de los años 1960 y 1970, "cuando se hacía cola para tomar el bus y los hombres cedían el puesto a las mujeres", están las causas estructurales y coyunturales en las que radica el estallido social en la "capital mundial de la salsa".

Las barricadas de Cali

Como consecuencia de las razones expuestas en los puntos anteriores, cuando el Gobierno esperaba que con el retiro del proyecto de reforma tributaria la protesta terminaría, aparecieron decenas de barricadas y puntos de bloqueo en los barrios marginales de la ciudad. Los protagonistas eran los jóvenes de las barriadas pauperizadas que nacieron, crecieron y se extendieron, a imagen y semejanza de las favelas de Río de Janeiro. Rápidamente fue claro que, aunque articulados al paro nacional, estos jóvenes tenían demandas específicas y detrás de los "puntos de resistencia", como también llaman a las barricadas, había actores diferentes a los que impulsaban el paro nacional y las grandes marchas de Cali y el país.

El 6 de mayo de 2021, delegados de doce puntos de resistencia (Calipso, Puerto Resistencia, Meléndez, Guapi, Siloé, Same-

co, La Luna, Paso del Comercio, Loma de la Dignidad, Univalle y Portada al Mar), aunados a otras organizaciones, firmaron *El Pliego de Exigencias Político y Unitario.* Entre las peticiones está el retiro de la asistencia militar de las ciudades; solicitud de perdón público de la Fuerza Pública por las muertes causadas; información y retorno de los desparecidos y detenidos; reparación a las víctimas y familias que han sufrido violaciones, muertos, heridos, desaparecidos y capturados durante el paro; implementación del acuerdo de paz; retiro de los proyectos de reforma laboral, pensional y de salud; eliminación del decreto 1174 que legaliza la contratación por horas; renta básica para las personas en condición de pobreza; auxilio a los pequeños comerciantes; vivienda para el pueblo; educación gratuita; mayor inversión en la educación media, básica y secundaria; aceleración de la vacunación; y alimentos para lugares apartados de la ciudad; entre otras demandas (Declaración Política, 6 de mayo de 2021).

Una barricada o centro de resistencia es un repertorio de acción que se caracteriza como un punto de la malla urbana, ubicado en intersecciones viales estratégicas, regularmente de las concentraciones poblacionales pobres. Los jóvenes usan troncos, piedras, separadores viales, alambres y objetos metálicos, entre otros elementos, para bloquear la movilidad de las personas y los vehículos, alterar la normalidad de la vida y producir una sensación de caos: este es el símbolo de la resistencia.

Las barricadas son un repertorio de acción inédito en la historia de Cali; nunca antes ningún actor lo había utilizado en su extensión e impacto. Sin embargo, es menester recordar que hay una tradición de revueltas populares en Cali y en el suroccidente colombiano, que se remonta a las insurrecciones comuneras de la segunda mitad del siglo XVIII, en las cuales hubo asonadas, quema de estancos y persecución del pueblo a las autoridades parroquiales. Por ejemplo, son famosas las Asonadas del Zurriago de la mitad del siglo XIX, en las que la población esclavizada les dio físico fuete a los hacendados (Castillo, 2012, pp. 396-397).

Ilustración 3. *Punto de bloqueo de la Calle 100 con Carrera 13. Alrededores de la Universidad del Valle donde se concentraron 4.000 indígenas.*
Fuente: Fotografía del autor.

Los puntos de resistencia operan mediante cuatro líneas. La primera defiende físicamente la barricada; la segunda se encarga del abastecimiento de alimentos; la tercera del suministro de medicamentos y de la atención a los heridos que resultan de los enfrentamientos con la Fuerza Pública; y la cuarta de comunicar a nivel nacional e internacional, en tiempo real, lo que está sucediendo.

Con la anterior estructura organizativa, en algunos de esos puntos, usualmente durante las horas de la tarde, se concentran cientos de jóvenes, algunos con el rostro encapuchado, que desarrollan actividades culturales centradas en la música y el baile; otros tienen puestos de asistencia médica para atender a los heri-

dos y otros puntos de resistencia han abierto improvisadas bibliotecas. Reforzando una característica axial de la sociedad caleña, en una división del trabajo por sexos, las mujeres preparan los alimentos, práctica conocida como "ollas comunitarias". Por la noche, algunos hombres y mujeres vigilan la barricada y, al día siguiente, amanecidos, retornan a sus lugares de trabajo.

Regresando a la situación actual se debe mencionar que los bloqueos de la vía que conecta a Cali con Buenaventura –el principal puerto sobre el Pacífico colombiano y por donde se transporta el 40% de la carga nacional– y los de la Panamericana, la principal arteria del país que conecta a la ciudad con el centro y el sur de Colombia, han convertido a la "capital mundial de la salsa", en una especie de ciudad sitiada y en estado de guerra. Rápidamente, comenzaron a escasear los alimentos, los medicamentos y la gasolina. Pero el bloqueo, aunque es uno de los repertorios más eficaces políticamente, es un bumerán, que se vuelve en contra del actor o de los actores que lo utilizan. Y esto ha sucedido en la "sucursal del cielo".

La carencia de alimentos y de gasolina, pero también de medicamentos y de oxígeno para atender a los pacientes que mueren de Covid-19, en un sistema de salud colapsado, con el 95% de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) copadas, ha generado rechazo en parte de la población. El impacto se ha aminorado con la apertura corredores humanitarios. Como resultado de los enfrentamientos con la Fuerza Pública han perdido la vida 12 jóvenes y el número de desaparecidos es indeterminado. El 24 de mayo la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la Corporación Justicia y Dignidad entregaron un informe en el cual dan los nombres de 120 desaparecidos. El 21 de mayo murió por un disparo de fusil en el sector de Calipso, Juan Sebastián Briñez, un joven policía de 22 años. A lo anterior, se suman estaciones del sistema de transporte masivo (MIO) incineradas, sedes bancarias destruidas, comercios atacados e instalaciones de instituciones públicas afectadas.

Ilustración 4. *Barricada de Puerto Resistencia*
Fuente: Fotografía del autor.

Como se muestra en la ilustración 5, al 13 de mayo de 2021, había en Cali 25 puntos de resistencia. Las barricadas se han concentrado mayoritariamente en el oriente de la ciudad y en la zona de ladera al occidente, donde vive la mayor parte de la gente pobre, como se dijo antes. Dichas barricadas han producido procesos de resignificación de la ciudad en clave de resistencia. Así, Puerto Resistencia, era conocido antes como Puerto Rellena. El Puente de los Mil Días, ahora recibe el nombre de Puente de las Mil Luchas. La Loma de la Cruz fue rebautizada como La Loma de la Dignidad.

Desde el punto etario detrás de las barricadas hay mujeres y hombres jóvenes, pero de una gran heterogeneidad. Los hay empobrecidos y miserables sin futuro, algunos vinculados a la economía informal, trabajadores de la construcción y del transporte pirata, unos más tienen experiencia política y conocen el manejo de las armas resultado de su vinculación con las milicias urbanas. También hay estudiantes universitarios, algunos seguidores a muerte de los equipos de fútbol de la ciudad, vigilantes, reincorporados, excombatientes y unos más son parte del lumpen y de las llamadas "oficinas de cobro". Los puntos de resistencia enfrentan una encrucijada, porque el liderazgo de los primeros actores podría ser desplazados por el de los segundos.

Desde la perspectiva de la acción colectiva los actores son difusos y heterogéneos, no están predefinidos y se están configurando. Crean discursos y mediaciones, y aquellos que tenían identidades colectivas las están reconstituyendo. Hay solidaridades explosivas. Los promotores han sido rebasados por la solidaridad de la gente y por las masivas movilizaciones. Se presentan alianzas entre los que eran oponentes en otros campos, como las llamadas barras bravas. Los liderazgos son emergentes y borrosos, no se vinculan con ningún partido político y hay cruces de agendas; hacen un uso extraordinario de las redes sociales con transmisión en tiempo real de los enfrentamientos con la Fuerza Pública y de información permanente a través del Internet.

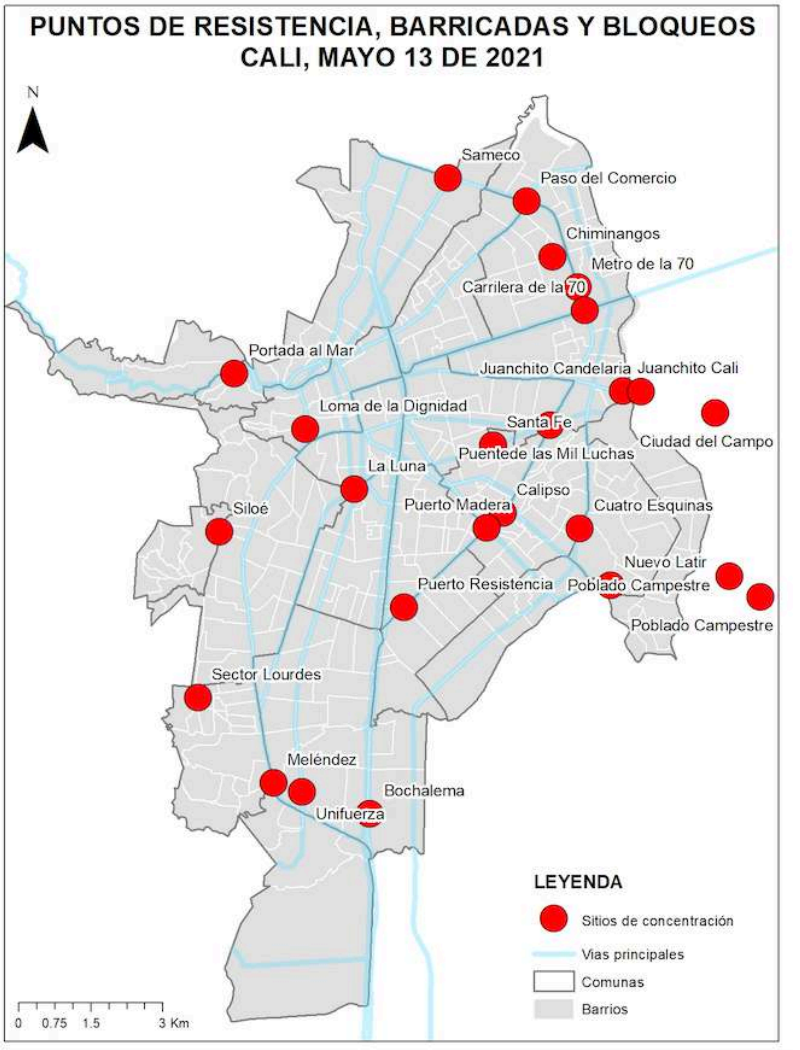


Ilustración 5. *Puntos de resistencia, barricadas y bloqueos en Cali, al 13 de mayo de 2021.*
Fuente: Laura López Ibarra. Con base en la Declaración de Unión de Resistencia de Cali, 11 de mayo de 2021.

En una de las barricadas, un joven dijo que estaba en ella porque no tenía trabajo, porque sus padres trabajan por ingresos miserables y no tienen derecho a una pensión digna y porque él no veía futuro. Otro expresó que estaba en el punto de resistencia porque por lo menos le llegaba la comida que durante años había escaseado en la mesa de su casa.

Puerto Resistencia

El símbolo de la protesta es la barricada bautizada como Puerto Resistencia, que el mundo ha conocido gracias al uso estratégico de las nuevas tecnologías de la información. Ubicada en uno de los corredores estratégicos del oriente de la ciudad, donde confluyen ocho vías, es uno de los principales accesos a una gran concentración de cerca de 400.000 habitantes, buena parte de ellos gente negra, que recibe el nombre del Distrito de Aguablanca.

Desde la década de 1960, cuando campesinos que huían de la violencia partidista fundaron el barrio Mariano Ramos, los pobladores bautizaron el lugar como Puerto Rellena. Así nombraron el sitio donde las mujeres, regularmente negras, vendían un alimento elaborado con sangre de cerdo y arroz, y envuelto en los intestinos de este mamífero. El nuevo nombre es resultado de un proceso de resignificación de los lugares, como se dijo en líneas precedentes. Las llamadas barras bravas conocidas como Barón Rojo e Hijos de Caín, seguidores del América, y Frente Radical Verde, hinchas del Deportivo Cali, caracterizadas por enfrentamientos violentos, han depuesto sus desavenencias y establecido alianzas para unirse a los reclamos de los jóvenes que defienden la barricada donde funcionan con un alto grado de coordinación las cuatro líneas; está dotado de enfermería, de una improvisada biblioteca, de una olla comunitaria, y la afluencia de jóvenes es numerosa. En las horas de la tarde, se desarrollan múltiples actividades culturales y hasta se celebran los cumpleaños de los que están en la primera línea.

Ilustración 6: *Puerto Resistencia*
Fuente: Fotografía del autor.

El 21 de mayo de 2021, entrevisté en Puerto Resistencia a un joven de la primera línea. Le pregunté quién era, qué razones lo habían llevado a estar en la barricada, qué esperaba de su lucha y cuándo dejaría el punto. Contestó de la siguiente manera:

> Soy un albañil, un vendedor de agua, he sufrido para darle de comer a mis hijos y saber que para otro personaje, un corrupto, no valgo nada (vos quebrada a punto de llorar), esto no es justo para el pueblo. Estoy contento porque los 25 puntos están unificados y nosotros somos la base, nosotros los jóvenes estamos en este punto. Me siento orgulloso de pertenecer a mi barrio, las familias son lo más bonito y por ellas peleamos, cómo es posible que nuestros viejos no tengan el poder de movilizarse, ni tener su medicina. No es justo, pero los jóvenes estamos en resistencia, la gente de la primera línea hace un gran sacrificio (voz quebrada), ustedes ni se imaginan, amanecen aquí, se van a trabajar y en sus hogares piensan en lo que viene, eso no es justo. Vimos acabar cien años, un siglo y tuvimos que esperar 21 años para rebelarnos (llorando), pero lo que viene es la grandeza de todas nuestras generaciones afros en, latinos, indios y no indios, este es la gran Colombia.
>
> Me quedaré en la primera línea hasta que el Señor, nuestro Señor, me dé las fuerzas y logremos con hechos, no con palabras, ¡hechos!, tiene que haber justicia. La primera línea es la de choque, lo más sangriento, estamos allí los que no se nos da nada caer por nuestra gente. Segunda línea es el respaldo, pero primera línea lo es todo, así caigamos, vamos a lo que vamos, ¿sí entiende? Con sangre, con heridas, porque nos estamos matando. En la primera línea, hay hambre, sed de justicia, darlo el todo por el todo, por nuestra generación y que lo aprecien, que lo valoren, porque el que no valore y no aprecie esto, no quiere a su país, no quiere a los jóvenes.
>
> En la primera línea hay mujeres tan agresivas que ustedes ni se imaginan, con machete, liderazgo, damos gracias porque todos venimos de una mujer, pero ustedes no conocen la ira que se les mete a ellas cuando están en la primera línea enfrentando lo que

Ilustración 7. *El Centro de Atención Inmediata (CAI) convertido en biblioteca en Puerto Resistencia.*

Fuente: Fotografía del autor.

viene: gases lacrimógenos, balines, tiros, solo con el escudo y una lámina, un pedazo de arena, las tácticas de nosotros porque la gente nos ha dado la orden de sacar lo que se debe sacar, pero estas son cosas que no se deben hablar. Se trata de conocimiento, al que no sabe hay que enseñarle, para que todos vean que esto es valorar a su país, estar contentos porque esto es semillero de todos, afros, latinos, del ser humano que nace entre dos mares, rodeado de tantas riquezas pero que solo cuatro o cinco familias se benefician de ellas. Ellos no nos quieren dar estudio, lo que quieren es tenernos brutos para que sigamos haciéndolo todo por nada. Por

En la primera línea tenemos relevos, hay gente que salió de trasnochar y se fue a laborar. Ellos llegan en la noche y se arman los turnos, los bloques, se planifica la seguridad. Tenemos un bunker y de ahí procedemos a que descansen, los que estuvieron el día resistiendo. Claro, hay estrategias militares con el fin de que aprendamos. Estamos dispuestos al diálogo, estamos dispuestos, pero también estamos dispuestos a la guerra.

Ante la muerte de los jóvenes en las barricadas caleñas, el poeta Julián Malatesta escribió el siguiente poema:

Las dos muertes

La tarde caía vertiginosa,
los estallidos y la pólvora le hurtaban la luz.
Los muchachos con sus escudos de lata y trozos de madera,
se ejercitaban como legionarios antiguos
en las tácticas del repliegue y la ofensiva.

Josué levantó la mano e imploró al sol que se detuviera,
ansiaba ponerle el tatequieto a la noche
que se les venía encima con sus densas manos negras.
A empellones me abrí paso hasta la barricada
y me puse en la primera línea.

Ese es mi muchacho, me dije,
y halé a Josué de la camisa, ordenando:
Nos vamos ya, es hora de irse.

¿Usted quién es? Contestó airado.
Soy tu muerte, la tuya, la propia.
Mi hermana, que trabaja a sueldo con las tropas,
La mercenaria, la traidora, te tiene en la lista.
Es hora de irse…
La vida del muchacho alucinaba con el brillo de los explosivos,
Lo sacudí con fuerza y grité:
¡Hasta que tu vida y yo cerremos el último umbral,
soy tu muerte, carajo!
¡Ese es nuestro pacto!

Pero mi hermana,
la mercenaria, la ajena, la súbita,
del otro lado ultima los detalles,
esos hombres de negro le pagan a destajo.

Estaba yo en estas, encontrando palabras…
Usted me entiende, señora,
cuando un balazo dobló a Josué entre mis brazos
y ya no pude traerlo a casa.

Santiago de Cali, 20 de mayo de 2021

La minga indígena y el repertorio bloqueo

La expresión minga proviene de la palabra quechua *min`k*y y refiere desde los tiempos coloniales "a una reunión de gente invitada" para algún trabajo (Sevilla, 1986, p. 156). En la institución del resguardo o del territorio comunal indígena es la forma como colectivamente la fuerza de trabajo participa en la producción.

Con la efervescencia del movimiento social indígena, su significado ha mutado y comenzado a designar a las grandes marchas de los pueblos indígenas del sur de Colombia en las que participan los niños, las mujeres y los hombres, que exigen al Estado reconocimiento y redistribución.

En el contexto del paro nacional, la llegada de la minga a Cali estuvo antecedida, por un lado, del asesinato de la gobernadora indígena Sandra Liliana Paz, acaecido en el departamento del Cauca; por otro, del derribamiento de la estatua de Sebastián de Belalcázar, el conquistador de los territorios del sur de Colombia y fundador de Cali. Dice la leyenda que sus huestes, dirigidas por los tenientes Juan de Ampudia y Pedro de Añasco, se enfrentaron en las goteras de Cali con diez mil indígenas dirigidos por el cacique Jamundí. En una batalla épica donde las flechas y las cerbatanas se enfrentaron contra el caballo y la espada, supuestamente, murieron dos mil jamundíes (Castellanos, citado por Arboleda, 1956, p. 20; Castillo, 2012, p. 378). Estos posibles y legendarios acontecimientos se transmiten a través de la historia oral indígena y, posiblemente, ayudan a comprender el porqué de la destrucción de la estatua del conquistador. Pero, ¿por qué llegó la minga a Cali en medio del paro nacional?

Al ser preguntado un dirigente del Consejo Regional Indígena del Cauca, (CRIC) de por qué ingresaron a la ciudad, respondió: "Venimos a Cali porque los jóvenes nos llamaron porque los estaban matando". 4.000 indígenas se concentraron el campus de la Ciudad Universitaria de Meléndez, la única universidad pública de la ciudad. En medio de la protesta, que ha convertido a Cali en el centro del conflicto, la minga bloqueó algunos de los accesos a la ciudad. Como lo saben los analistas del movimiento social indígena, el bloqueo ha sido uno de sus principales repertorios de su acción y lo utilizan desde los años 1980.

El bloqueo de las carreteras es tal vez el instrumento más poderoso con el que han contado los indígenas para que sus deman-

das sean escuchadas por el Estado y por la sociedad nacional. La predilección por este tipo de repertorio está asociada con varios factores que son estratégicos, en tanto implican un análisis de lo costoso que resulta para la acción colectiva; un tipo de repertorio fácilmente reprimido por la Fuerza Pública y que tiene tenues líneas divisorias con la protesta no institucional, es decir, con aquella que el Estado no acepta, porque implica el uso de la violencia ilegítima.

El suroccidente de Colombia tiene como principal arteria de comunicación la carretera Panamericana. Esta es la vía nacional más importante del sur de Colombia porque comunica el centro con el sur del país y porque por ella se transporta buena parte de las mercancías del intercambio comercial con el Ecuador, uno de los principales socios económicos de Colombia. Por tanto, el taponamiento de esta arteria así sea por algunas horas, tiene costos económicos altos y genera caos vial por su alto grado de uso.

El Observatorio Social América Latina (OSAL), que sigue las protestas y los movimientos sociales en el subcontinente, ha mostrado que el bloqueo de vías es el principal repertorio que usa el movimiento indígena en América Latina. Mediante el taponamiento de las vías, los movimientos indígenas de Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia han logrado en varias oportunidades, paralizar estos países y negociar sus demandas ante el Estado central (OSAL, Nº 18; Castillo, 2006).

En el día 24 del paro el diario *El Tiempo* informó que diariamente se habían producido 90 bloqueos y que en total se habían registrado 2.151 en las vías del país (23 de marzo de 2021, p. 1.2). Es menester aclarar, que los indígenas no han provocado todos los taponamientos. Las grandes marchas pacíficas y los bloqueos han sido los dos repertorios estratégicos del paro nacional, pero desplegados por actores diferentes.

Como se dijo en líneas anteriores, el bloqueo es un repertorio bumerán, es decir, en algún momento se vuelve contra el actor

que lo utiliza. En efecto, como en todo el país, en Cali ha generado el desabastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles. Desesperados por ello, sectores blancos de clase alta del sur de la ciudad, se enfrentaron físicamente contra los indígenas. Se presentaron ataques armados para "echar a los indios", "que no son de la ciudad". Hay testimonios de que en algunas unidades residenciales los vecinos se organizaron en brigadas, que en las horas de la noche hacían rondas y permanecían en alerta para defender sus casas de la posible llegada de los indígenas, vándalos o saqueadores. Ello es indicador de un racismo cultural difuso y del rechazo soterrado de sectores altos de la sociedad a los indígenas, prejuicios que se creían desparecidos o, por lo menos, atenuados con la Constitución de 1991, que declaró que la riqueza de la nacionalidad está en la diversidad étnica y cultural. El hecho es también ilustrativo de la incomprensión de que en Cali se hablan cinco lenguas, además del castellano, que es el centro de una amplia región metropolitana donde viven indígenas y una amplia población afrodescendiente. El 11 de mayo, la minga abandonó Cali e informó que continuaría el paro en el departamento del Cauca.

El paro nacional y lo acontecido en Cali no han sido "un rayo en cielo sereno"[4]. Como se dijo antes, los acontecimientos tienen una etiología profunda relacionada con la desigualdad social, la ruptura del vínculo entre los gobernantes y los gobernados y la crisis de legitimidad de la democracia. Los jóvenes no creen en los partidos políticos, ni en los jefes de estas agrupaciones y el Congreso es una de las instituciones más deslegitimadas. De alguna manera, hacen parte de la ola mundial de protestas contra los sistemas políticos y su incapacidad para responder a las de-

[4] Marx uso la expresión en su libro El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, para señalar que el golpe de estado de diciembre de 1851 en Francia no fue un hecho fortuito, ni repentino, sino el resultado de la intensa lucha de clases. En el prólogo a la segunda edición dijo: "Demuestro cómo la lucha de clases creó en Francia las circunstancias y las condiciones que permitieron a un personaje mediocre y grotesco (Luis Bonaparte) representar el papel de héroe" (Marx, 1869, 1978, p. 2).

Ilustración 7. *La minga indígena abandona la Ciudad Universitaria de Meléndez*
Fuente. Fotografía del autor.

mandas de la población, de lo que son ejemplos la primavera árabe, los indignados en España, los chalecos amarillos en Francia, los *Occupy Wall Street* y la lucha de los jóvenes en Hong Kong.

Aunque con sus singularidades, lo que acontece en Colombia y Cali se relaciona en América Latina con el octubre chileno de 2019, que tuvo como florero de Llorente el incremento de 30 pesos en el pasaje del metro de Santiago (Araujo, 2019); con el estallido social en Bolivia; con el levantamiento ecuatoriano de 2019, que tuvo como detonante la eliminación del subsidio a los combustibles. Todas estas convulsiones, como la de Colombia, son la expresión de la desconexión de los aparatos políticos con la ciudadanía, con las organizaciones sociales y evidencian la irritación de la gente contra un sistema social inequitativo y contra un modelo de desarrollo que tiene como Dios al mercado.

Dejando de lado una visión romántica, es relevante decir que, en medio de las balas, los gases lacrimógenos, las decenas de desaparecidos, los heridos y los más de diez muertos, resultados del enfrentamiento con la Fuerza Pública, la juventud caleña excluida aprendió cómo bloquear la ciudad y como resistir en barricadas por días y semanas. En consecuencia, si no se producen reformas sociales estructurales que distribuyan mejor la riqueza en el segundo país de más desigualdad de América Latina, que brinden empleo digno, educación y salud, es decir, medidas de políticas públicas que saquen de la miseria y la pobreza a estos contingentes de población y transformaciones de inclusión política, en el futuro serán recurrentes los bloqueos, las barricadas y los taponamientos en la "capital mundial de la salsa". Y, paradójicamente, en la "sucursal del cielo", los pobres, indignados por sus condiciones seculares de pobreza, perdieron la paciencia y no tienen miedo, sino esperanzas en los frutos de sus luchas.

Referencias Bibliográficas

Araujo, K. (2019). *Hilos tensados: Para leer el octubre chileno.* Santiago de Chile: Editorial Usach.

Arboleda, G. (1956). *Historia de Cali*. Tomo I. Cali: Biblioteca de la ciudad de Cali.

Barbary, O. (2004). El componente socio-racial de la segregación residencial en Cali. En F. Urrea y O. Barbary (eds.). *Gente negra en Colombia: Dinámicas sociopolíticas en Cali y el Pacífico.* Medellín: Editorial Lealon, pp.157-190.

Castellanos, J. (1589) (1955). *Elegías de varones ilustres de Indias.* Tomo III. Bogotá: Editorial ABC, Biblioteca de la Presidencia de Colombia.

Cancillería, Embajada de Colombia en España (2021): *Las movilizaciones sociales en Colombia*: Bogotá: Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Castillo, L. C. (2006). *El movimiento indígena colombiano: redes globales, alianzas geoestratégicas en la lucha por el territorio y resistencia globalizada contra globalización y la guerra*. Ponencia presentada en el 52° Congreso de Americanistas, Sevilla, España, 17-21 de julio de 2006.

Castillo, L. C. (2012). *Cali, ciudad pluriétnica, multicultural y de resistencia de negros e indios*. En G. Loaiza (director general). *Historia de Cali siglo XX*. Tomo II: *Política.* Cali: Universidad del Valle, Grupo de investigación Nación, Cultura, Memoria, Alcaldía de Santiago de Cali, pp. 376-411.

Corominas, J., Pascual, J. (1983). *Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. Volumen V.* Madrid: Gredos.

Cocuñame, B. (2021). *Vida cotidiana, relaciones sociales y consumos culturales de jóvenes miembros de pandillas del suroccidente de Cali.* Trabajo de grado para obtener el título de sociólogo. Programa Académico de Sociología, Universidad del Valle, Cali.

Departamento Nacional de Estadística, DANE (2021). *Gran Encuesta Integrada de Hogares. Trimestre de diciembre de 2020 a febrero de 2021.* Bogotá D.C.: Gobierno de Colombia.

Departamento Nacional de Estadística, DANE (2021). *Pobreza monetaria en Colombia, 2020. Comunicado de Prensa*. Bogotá D.C.: Gobierno de Colombia, 29 de abril.

El Tiempo. Cifra oficial de muertos en medio de las protestas, un debate que sigue abierto. Bogotá, 16 de mayo de 2021, p. 1.8.

————. *Van en el país 3 millones de inmunizados y arranca la etapa III de*

la vacunación. Bogotá, 21 de mayo de 2021, p. 1.6.
————. *En 24 días de han registrado 2.151 bloqueos de vías en el país*. Bogotá: 23 de mayo de 2021, p. 1.2.
Fundación Ideas para la Paz (2018). *Trayectorias y dinámicas territoriales de las disidencias de las Farc.*
Marx, C. (1978). *El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte.* Pekín: Ediciones en Lenguas Extranjeras.
Negri, A. y Hardt, M. (2004). *Multitud. Guerra y democracia en la era del imperio.* Barcelona: Debate.
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC (2020). *Colombia. Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2029.* Bogotá: Gobierno de Colombia.
Ordóñez, J. (2007). *Causas estructurales y culturales de la violencia en Aguablanca*. En: *Uno mata por amor a la vida: Conflictos y justicia restaurativa en el Distrito de Aguablanca*. Cali: Pontificia Universidad Javeriana, pp. 51–85.
Ordoñez, J. (2017). *De la pandilla a la banda: transformaciones de la violencia pandillera en barrios marginales en Cali.* En: *Revista Economía y Sociedad* 32: 107-126.
OSAL [Observatorio Social de América Latina] Nº 18 (2006). *Los movimientos sociales de Porto Alegre a Caracas: dominación imperial y alternativas*. Buenos Aires: CLACSO.
El Cotidiano (2004). El que la debe la paga: Pandillas y violencias en Colombia. *El Cotidiano* 20 (126). México D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco.
Perea, C. (2007*). Definición y categorización de pandillas*. Washington: Secretaría general de la Organización de los Estados Americanos, Departamento de Seguridad Pública.
Perea, C. (2021). *El parche es parche: pandillas, pánicos y violencias.* Disponible en: *https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08ccfe5274a31e000146e/perea1.pdf.*
Portafolio (2021). *Ni empleo ni educación, el drama de 27,7% de los jóvenes*. Bogotá, 14 de mayo de 2021, p. 6.
Presidencia de la República de Colombia (2016). *Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.* Bogotá: Tipografía Garamond.
Sevilla, E. (1986). *La pobreza de los excluidos: economía y sobrevivencia en un resguardo indígena del Cauca-Colombia.* Quito: Ediciones Abya-Yala.
Urrea, F., Loaiza, J. y Hurtado, M. (2019). *Cali, ciudad región ampliada: un territorio metropolitano.* Cali: Universidad del Valle, Universidad San Buenaventura.

Vanegas, E., Calderón, D. y Vélez, A. (2018). *Trayectorias y dinámicas territoriales de las disidencias de las Farc.* Bogotá: Fundación Ideas para la Paz.

Vanegas, Gildardo (2019). *Cultura y barbarie: Los avatares de la saga del narcotráfico en Cali, 1960-2018.* Tesis para obtener el título de doctor en Sociología, Doctorado en Sociología, Universidad del Valle.

DE LA MARCHA HACIA EL CENTRO AL BLOQUEO EN LOS BARRIOS: LAS LUCHAS POR RECONOCIMIENTO Y OPORTUNIDADES EN CALI DURANTE EL PARO NACIONAL DE ABRIL-MAYO DE 2021

Jorge Hernández Lara[1]

La vida cotidiana de todos los habitantes de Cali quedó alterada desde tempranas horas de la mañana del pasado miércoles 28 de abril y así continuaba un mes después. Ha sido una experiencia colectiva nueva y muy intensa para millones de personas, que dejará huella en la historia de la ciudad y la memoria de sus moradores. No se trata apenas del capítulo local de un paro nacional excepcional, por lo masivo y duradero que ha sido; las jornadas del paro fueron vividas aquí más intensamente que en otras ciudades, de una manera que nadie esperaba y que resultó singular.

La hipótesis que inspira este escrito es que en Cali hubo una especie de levantamiento popular urbano, protagonizado especialmente por jóvenes de los barrios de estratos bajos, que se cobijaron bajo la sombrilla del paro nacional para poner de presente sus propias demandas de reconocimiento social y oportunidades de vida digna, más que mera inclusión al orden establecido, mediante formas de acción novedosas y eficaces, por motivos dife-

[1] Sociólogo, Magister en Ciencias Sociales. Profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle. Miembro del grupo de investigación sobre Acción Colectiva y Cambio Social (ACASO) del Centro de Investigación y Documentación Socioeconómica (CIDSE) de la Universidad del Valle.

renciados pero complementarios de los del comité nacional de paro y sus aliados.

La peculiaridad de lo que ha sucedido en Cali puede, tal vez, ser comprendida si se toman en cuenta cinco aspectos de la movilización: el contexto, los motivos, los protagonistas, las modalidades, los resultados y la forma en que puede terminar.

Carencias agudizadas por la pandemia

Una protesta social con las características que esta tiene no puede ser explicada por rasgos estructurales de la sociedad caleña que están presentes desde hace muchos años y se han mantenido prácticamente inalterados a pesar de que mientras tanto se han sucedido, una tras otra, distintas coyunturas, unas parecidas a la actual y otras muy diferentes, casi opuestas, de quietud y aparente tranquilidad. Pobreza, desigualdad, segregación, desempleo, violencia y otras carencias parecidas no son una novedad en la situación de la ciudad. Si lo es, en cambio, la pandemia del Covid-19 que agudizó esas carencias según lo indican datos que se han mencionado en la discusión pública de estos días.

El DANE actualizó cifras. Reveló que entre 2019 y 2020 la cantidad de personas consideradas pobres en Cali aumentó en más de un 10%, pasando de 558 mil a 934 mil. También que al finalizar 2020 los pobres eran el 35.2% de la población total de la ciudad y los "vulnerables" (en la práctica otra categoría de pobres), el 26.2%, de manera que más del 60% de los habitantes de la ciudad tenían enormes dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. El empleo disponible no ayudaba; según las definiciones de la misma entidad la tasa de desempleo había aumentado del 12% en 2019 al 20% al finalizar 2020, es decir que 120 mil personas habían perdido su fuente de ingresos en 2020 (EE, 2021b), y se sabe que la calidad de ese empleo es precaria en grado sumo.

Con la llegada de la pandemia "lo que en el país fue tormenta en Cali fue huracán", según palabras de un comentarista informado, pues el número de pobres aumentó 67%, más del triple que en el resto del país, y la pérdida de ingreso de los más pobres fue del 50%, el doble que en el conjunto nacional (Cabrera, 2021). A esto puede añadirse que los efectos del encerramiento "no fueron igualitarios", como lo dijo otro analista, porque las condiciones en que tuvieron que padecerlo los más pobres hicieron que fuera vivido como una humillación: "Los 3 o 4 m^2 habitables por persona, donde vivían y viven la mayor parte de habitantes de la ladera y del oriente, hicieron imposible obedecer las exigencias de aislamiento total y preventivo ordenadas por las autoridades" (Salazar, 2021).

Como parte del contexto en que se desencadenó la protesta en Cali habría que mencionar otros aspectos, aunque no se cuente con cifras actualizadas: elevados niveles de violencia en todas sus formas, existencia de organizaciones ilegales de distinta dimensión y fortaleza: al menos 182 en 2019 según informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, discriminación social articulada en torno a las diferencias de ingreso, etnia, género y edad, todo agravado por la forma en que el gobierno manejó la pandemia.

Cuando estos y otros indicadores se representan en un plano de la ciudad surge el mapa de la segregación. Dos grandes zonas de pobreza y discriminación, una al oriente y otra al occidente, bien representadas por las barriadas de Aguablanca y Siloé, situadas en los bordes de la ciudad, sobre las denominadas avenidas Simón Bolívar y de Los Cerros, ejes viales en los cuales no por casualidad se han consolidado varios puntos de bloqueo durante el paro. En medio de esas dos zonas, otra, central, alargada de norte a sur, con ramales en varias direcciones, en la que habitan las clases medias y trabajan casi todos los que consiguen hacerlo. En el extremo sur y el centro-oeste dos áreas más en las

que viven las familias de clase alta, un 2.3% de la población total de la urbe según el DANE.

Se trata pues de una ciudad con economía informal extendida y población muy diversa, en su gran mayoría carente de recursos materiales, dedicada al rebusque y la sobrevivencia, a la que los subsidios focalizados que brinda el Estado no le alcanzan, que experimentó un agravamiento de su situación durante un año de pandemia, en medio de enceramientos imposibles. Todo un poco más difícil y menos llevadero que en otras capitales. Esto quiere decir que en abril había activistas en potencia de sobra para participar en la protesta.

Respeto, trabajo, educación y oportunidades de vida digna

Tanto en Cali como en el resto del Colombia este paro es la continuación de otro, el de finales de 2019, cuyo trámite quedó pendiente a raíz de la llegada de la temporada navideña y, sobre todo, el covid-19. Este es el cierre del paréntesis que entonces se abrió. Pero este paro es también el tercer episodio de una serie de tres grandes jornadas de protesta nacional contra las políticas de un mismo gobierno, porque entre el 21-N de 2019 y este 28-A de 2021 hubo una explosión generalizada de ira popular que duró varios días a partir del 9 de septiembre de 2020, después de que unos policías asesinaron en Bogotá a un hombre de 43 años, casi en vivo y en directo ante los ojos de millones de seguidores de las redes sociales y los medios de comunicación, poniendo de presente la brutalidad policial que en los días siguientes se multiplicó para tratar de contener la protesta de entonces.

Las demandas del Comité Nacional de Paro en 2019 eran inicialmente pocas, la mayor parte de ellas centradas en la política fiscal y laboral del gobierno. Le pedía a este que renunciara a proyectos de reforma tributaria, pensional, salarial, tarifaria y financiera que auspiciaba en ese momento. Adicionalmente, le pedía suspender las privatizaciones, combatir la corrupción,

cumplir los acuerdos firmados anteriormente con diversos sectores sociales y garantizar la protesta social (CNP, 2019a). Pocas semanas después el pliego de peticiones se amplió a trece puntos, cada uno de los cuales estaba subdividido en varios otros, de tal manera que cuando llegó el momento de la negociación la lista rondaba los cien (CNP, 2019b). Esto, que dificultó los diálogos con el gobierno, era un reconocimiento explícito de la diversidad de motivos que impulsaba a la gran cantidad de nuevos sectores sociales que se fueron sumando a la movilización, cada cual con su agenda.

El gobierno escogió la represión policial para responder al paro, que fue bastante dura, produjo muertos y heridos por montón. Lo hizo después de que la táctica de desprestigiarlo, señalando que estaba dirigido o infiltrado por gobiernos extranjeros, guerrillas o "fuerzas oscuras", no le dio resultado. Era la primera gran protesta nacional después de firmados los acuerdos de paz entre el gobierno anterior y la guerrilla más grande y fuerte que existió en Colombia, de manera que aquello de asustar con el "coco" de la subversión comenzaba a perder efecto.

El pliego de peticiones del Comité Nacional de Paro en 2021 es el mismo "Pliego de Emergencia" que le presentó al gobierno en junio de 2020, ya en plena pandemia, cuando las cien demandas fueron reducidas a seis: atención eficaz de la pandemia, renta básica de emergencia, defensa de la producción nacional, matrícula cero y otras formas de apoyo al sistema educativo público, acciones diferenciadas para mujeres y diversidades sexuales, derogatoria de los decretos de emergencia que han deteriorado la vida económica y social (CNP, 2020). Apenas se inició este nuevo paro, el 28 de abril pasado, volvieron a sumarse a la protesta gran cantidad de sectores que rápidamente mostraron otros motivos, inclusive agendas completas propias, aunque todos apoyaban las seis reivindicaciones del Pliego de Emergencia.

De nuevo el gobierno escogió la represión para contrarrestar el nuevo paro; en Cali y otras ciudades hubo decenas de muertos y centenares de heridos en las dos primeras semanas de movilización, así que el Comité Nacional de Paro tuvo que incluir como prerrequisito de las negociaciones la exigencia de garantías para la protesta pacífica. Por otro lado, esta vez los organizadores iniciales del paro renunciaron a ampliar su propia agenda para incluir las otras y prefirieron reconocer desde muy temprano que las movilizaciones estaban motivadas por agendas múltiples, de manera que ellos iban a negociar el Pliego de Emergencia, pero respaldaban la negociación de otros sectores con el gobierno nacional y los gobiernos departamentales o locales (CNP, 2021).

Cali es la sede de un Comité Departamental de Paro que sigue los lineamientos del Comité Nacional, pero en la ciudad también se expresan otros sectores, muchos otros. Entre ellos se destacan, como ya se ha dicho, los jóvenes de los barrios populares. Sus motivos de protesta fueron al comienzo difusos, pero con el paso de los días se fueron articulando en torno a una mezcla más específica de reivindicaciones generales compatibles con el Pliego de Emergencia, sectoriales de la juventud popular y locales de los barrios en que viven.

En vísperas de la reunión dos veces frustrada que iban a tener con representantes de los gobiernos nacional, departamental y municipal, programada primero para el miércoles 12 y luego para el jueves 13 de mayo, los activistas de los puntos de resistencia hicieron el esfuerzo de poner en orden sus reivindicaciones y nombraron delegados para la reunión. Los de Puerto Resistencia, el punto de bloqueo más emblemático, leyeron un comunicado en el que presentaron dos agendas y propusieron dos mesas de concertación, una nacional y otra local. La agenda nacional incluía: (1) esclarecer los daños y abusos de la policía para sancionarlos, (2) retiro del proyecto 006, derogatoria de la Ley 100 y elaboración de nuevo proyecto de Ley de Salud construido entre

todos los interesados, (3) retiro del proyecto de Ley 241 que atenta contra estabilidad laboral, (4) reforma laboral y pensional concertada, (5) eliminación de pensiones vitalicias y reducción en 50% del sueldo de altos funcionarios, (6) reducción de impuestos para las pequeñas y medianas empresas junto con capital semilla para emprendimientos, (7) revisión de actas Congreso para comprobar ausentismo y sanciones a quienes corresponda. La agenda local exigía (1) investigación de casos de agresión durante el paro, (2) financiación de política de juventud consensuada para Cali, (3) ejecución de presupuestos participativos en varias áreas, (4) biblioteca y museo en Puerto Resistencia, en el pequeño edificio que antes ocupaba el CAI de la policía, (5) creación de empleos a través de Guardianes de Vida para los jóvenes, (6) mega colegios con educación superior y subsidios, (7) ruta cultural y deportiva por el sector (Facebook, 2021).

El esfuerzo por clarificar las reivindicaciones de los puntos de resistencia se produjo también para neutralizar la iniciativa del alcalde que había decidido entablar un diálogo aislado con los activistas de uno de los bloqueos, el del Paso del Aguante (antes del Comercio), entre el domingo 9 y el lunes 10 de mayo. En esa conversación los activistas del punto de resistencia alcanzaron a expresar sus necesidades: empleo, rutas culturales y deportivas, proyectos sociales para la comunidad, intervención de Migración Colombia en una zona específica del dique del río Cauca, plan de ayuda a emprendedores de micro, pequeñas y medianas empresas (EE, 2021c)

Un activista de Nuevo Resistir (antes Nuevo Latir), situado al oriente de la ciudad, afirmó el martes 25 de mayo, de manera bastante tajante: "el Comité de Paro no nos representa" y a continuación precisó algunas de las demandas que formulan quienes se agrupan en la denominada Plataforma de Juventud. Lo hizo en medio del dolor de haber perdido a uno de sus compañeros, Juan Guillermo Bravo, asesinado dos días antes por hombres

vestidos de civil a tres cuadras de ese punto sin que mediara confrontación alguna, como quien caza una presa. Las demandas mencionadas eran unas de carácter nacional: cambiar el código de policía; otras de nivel departamental: mejores políticas de juventud; y otras de ámbito local: preservar los humedales de Aguablanca y, por tanto, detener los planes de construcción del terminal del MIO en esa zona (CR, 2021c).

Por fuera de los pliegos de demandas que se hicieron en distintos puntos de resistencia siguieron existiendo pequeñas reivindicaciones sueltas. Un activista de Siloé, por ejemplo, dijo que anhelaba un proyecto para convertir esa zona de la ciudad en parte de un circuito turístico que contribuyera a eliminar la estigmatización que sufre el barrio. Otros activistas, como José y Estiven, de Puerto Resistencia, hablaron en términos más generales de la necesidad de oportunidades, cambio e ingresos (EE, 2021d).

Como se puede ver entre la gente movilizada en Cali existen reivindicaciones múltiples que se pueden agrupar en tres categorías: (1) una agenda nacional y general a cargo del comité nacional de paro, (2) varias agendas sectoriales de maestros, mujeres, indígenas, campesinos, artistas, camioneros y otros sectores, a veces nacionales y a veces regionales o locales, (3) una agenda de los jóvenes que viven en los barrios populares, más local y situada que cualquiera de las otras, también más importante a la hora de pensar en un cierre adecuado para lo que se está expresando en la dinámica de las movilizaciones en la ciudad. A pesar de su diversidad y de algunas reticencias con el grado de representación del Comité Nacional de Paro, todas las agendas se cobijan bajo la sombrilla de la primera mencionada: el Pliego de Emergencia y la necesidad de garantías para la propia protesta.

Jóvenes, familias, vecinos, aliados solidarios y redes

Los protagonistas de estas jornadas son muchos, pero principalmente los jóvenes de los barrios populares, como habrá que insistir en señalarlo. Ellos estuvieron entre los madrugadores que salieron el 28 de abril antes del amanecer a hacerse cargo de la primera jornada del paro en los sitios que previamente habían escogido, generalmente importantes cruces viales cercanos a sus lugares de residencia. Y son ellos los que sostuvieron el paro en la ciudad durante su primer mes. Al comienzo eran grupos de vecinos desconectados unos de otros: "nunca se pensó que se unieran todos los barrios y puntos, cada uno, eran cerca de 18 puntos, luchando cada uno por lo suyo", dijo Efraín a un medio de comunicación (CR, 2021b). Esto fue así en parte porque ni ellos mismos esperaban que la protesta se prolongara durante tantos días. Luego esos grupos comenzaron a coordinar sus acciones, se conectaron entre sí con marchas de un punto a otro, prepararon pliegos de reivindicaciones para dialogar con las autoridades, hicieron pronunciamientos a nombre de la Unión de Resistencias de Cali, ganaron autonomía y capacidad de gestión con respecto a otros sectores movilizados, pero no han logrado configurarse aún como un actor social organizado con perfil propio. La represión policial y su complemento o sustituto, la que ejercen civiles anónimos armados, cada vez más selectiva, con la amenaza implícita que representa para la vida de los activistas, es el principal obstáculo.

Estos jóvenes, hombres y mujeres, de no más de treinta años, se sienten todos pertenecientes a la denominada Primera Línea, la que contiene los ataques policiales y protege con escudos de lata o madera a los demás manifestantes: ¡Todos somos primera Línea!, dicen. Son admirados por sus familiares y vecinos, han obtenido reconocimiento nacional e internacional, intuyen que están por primera vez haciendo historia.

Son estudiantes, colegiales o universitarios, en receso forzado por la necesidad de trabajar, tecnólogos, profesionales recién graduados sin esperanza de trabajo, trabajadores informales, vendedores ambulantes, repartidores a domicilio, transportadores en motocicleta o automóvil viejo, padres y madres de niños pequeños, hijos de madres que han sido lo mismo que ellos, maestras, webcamer, artistas callejeros, peluqueros, músicos, deportistas, enfermeros, paramédicos, miembros de barras de futbol, pequeños delincuentes, desempleados, subempleados y rebuscadores. Gorobeto, por ejemplo, tiene veinte años, era estudiante de pedagogía en una universidad pública y al mismo tiempo trabajaba como domiciliario, pero cuando llegó la pandemia tuvo que dejar de hacerlo para cuidarse, siguió recibiendo clase por internet hasta que sus ahorros se agotaron, canceló el semestre académico, volvió a trabajar y encontró que su oficio ya no le daba lo suficiente, vendió algo que tenía para obtener licencia de conducción sin que hubiera podido encontrar salida por ese lado, más recientemente se ha ofrecido como técnico en sistemas para el arreglo de computadores, vive con su madre y una hermana menor. Un típico todero. Es activista en Puerto Resistencia. "Uno sabe lo que es trabajar todos los días y a veces no tener siquiera para comer […] Es mejor comer 'M' en momentos de resistencia y paro que comer 'M' el resto de la vida", dice (LSV, 2021)

Estos, los protagonistas de la resistencia, han tenido como aliados a sus familiares y vecinos, así como a pequeños grupos solidarios de abogados, salubristas, comunicadores, defensores de derechos humanos, artistas, pedagogos y otras personas como ellos, pero ya mayores. El papel de las redes primordiales, la familia y el vecindario, ha sido crucial, igual o más que las ahora denominadas redes sociales, en realidad redes electrónicas de interacción. Los indígenas, tanto los que viven en Cali como los que vinieron en la Minga que estuvo acompañando los puntos de resistencia entre el 2 y el 12 de mayo, fueron tal vez sus mejores

aliados: "La Minga es un referente […] son muy sabios, nos comparten no solo su capacidad organizativa sino el saber ancestral, dice Efraín (CR, 2021b).

Descontando los policías y los civiles armados que los atacan con violencia, sus contrincantes en la acción colectiva contenciosa de estos días han sido los gobiernos y los civiles desarmados, incluidos los medios de comunicación, que los denominan vándalos y los tratan como tales.

Los gobiernos porque son los que ahora mismo tienen la posibilidad de hacer algo para satisfacer sus demandas, así estas tampoco hayan sido atendidas por anteriores alcaldes, gobernadores y presidentes. Los gobernantes actuales son percibidos como miembros de una casta política que aprovecha su condición para enriquecerse a través de la corrupción y el oportunismo. Hay que "bajar al señor [Iván Duque], bajar a todos los congresistas […], mirar si es verdaderamente válido el trabajo que ellos hacen y recortarles el salario", dice el mismo Gorobeto ya citado. Otros se han mostrado de acuerdo con reducir el tamaño del Congreso, sin pensar demasiado en la coincidencia de esta idea con una de las propuestas programáticas del partido de gobierno y la derecha política.

Los civiles no armados que los tratan como vándalos son sus contrincantes porque han intentado levantar los puntos de resistencia cuando estos quedan en cercanías de los barrios elegantes, como sucedió a veces con éxito pasajero en inmediaciones de Ciudad Jardín, al sur de la ciudad. Pero también porque en sus marchas gritan que "los buenos somos más", catalogando de hecho a los manifestantes como "los malos", una muestra de superioridad moral autoasignada que esconde mal instintos clasistas. Los grandes medios de comunicación, por su parte, con alguna excepción, son de hecho contrincantes porque han tomado partido mal disimulado por el gobierno nacional, la policía y los rivales civiles de los manifestantes.

El bloqueo simultaneo y sostenido: alcances y limitaciones

Una de las mayores novedades que trajo el paro nacional de 2021, originada en Cali, fue la emergencia de una nueva modalidad de acción colectiva contenciosa a cargo de los jóvenes de los barrios populares: el bloqueo simultaneo y sostenido de una serie de cruces viales que fueron rápidamente convertidos en una red de nodos de resistencia barrial. Alrededor de veinte, unos más consolidados que otros, algunos han sido rebautizados con nombres alusivos a la lucha que se lleva a cabo: Puerto Resistencia, el más conocido; la Loma de la Dignidad, el puente de las Mil Luchas, Samecombate, el Paso del Aguante, Nuevo Resistir, Unifuerza, etc. Otros conservan sus viejos nombres, como Siloé, Portada al Mar, La Luna, Puerto Madera, entre otros. Este bloqueo simultaneo y, sobre todo, sostenido de una ciudad en veinte cruces viales es la primera vez que sucede en Colombia y es lo que explica la mayor intensidad que las movilizaciones han tenido en Cali. Si a esto le sumamos los bloqueos en carreteras a través de las cuales se abastece la ciudad, estos sí ya experimentados en anteriores ocasiones, podrá comprenderse la sensación de que el paro esta vez sí ha sido un paro y no solamente una jornada nacional de protesta, con expresiones locales más o menos intensas en una u otra parte.

Al respecto conviene aclarar algo. En Colombia nos acostumbramos a llamar paro a lo que en el mejor de los casos era una jornada de protesta que paralizaba el transporte público, pero no suspendía la producción económica o las actividades labores de un número significativo de personas, algo parecido a una huelga general, aunque no fuera todavía una huelga de masas. Ni el paro cívico de mayo de 1957 que duró diez días y quitó de la Presidencia al general Rojas Pinilla, en el que los sucesos de Cali tuvieron una influencia destacada, ni el paro cívico de septiembre de 1977 contra el gobierno de A. López Michelsen, que duró un día y no obtuvo logros significativos inmediatos, los dos grandes aconte-

cimientos del pasado más parecidos al presente paro nacional de 2021, fueron en sentido estricto parálisis del trabajo y la producción. Esta vez tampoco, pero se fue más lejos y el mecanismo que lo permitió fue el bloqueo simultaneo del que hemos hablado.

El bloqueo simultaneo esporádico ya había sido parte del repertorio de acción colectiva en Cali y otras ciudades en anteriores jornadas de protesta. Desde siempre la denominada "operación avispa" que consiste en copar, uno tras otro, varios cruces viales por poco tiempo o una variante de esta que consiste en copar simultáneamente varios cruces distanciados entre sí por el mayor tiempo posible, normalmente hasta que la policía se hace presente, eran bien conocidas. Es más, en las jornadas del paro nacional del 21 de noviembre de 2019 y los días siguientes, hubo intentos de mantener bloqueos en dos o tres puntos de la ciudad, pero no pasaron de ser un intento. No obstante, la sensación de inseguridad que se creó entonces a raíz de los rumores sobre probables ataques a las unidades residenciales, la exhibición de abundante armamento letal en manos de civiles dispuestos a usarlo, el asesinato de personas inermes en sitios aislados de la ciudad y otros rasgos de esa experiencia, convencieron a los jóvenes de los barrios acerca de la necesidad de protegerse actuando colectivamente en la cercanía de sus lugares de residencia.

La búsqueda de seguridad para sus vidas y cierto hartazgo con formas de protesta que la generación de sus padres valora mucho, pero ellos no, permiten comprender por qué esta vez se generalizaron los bloqueos simultáneos y sostenidos en la ciudad. "La única seguridad que tienen en los barrios son las Primeras Líneas", dice una activista anónima perteneciente a la Primera Línea en Puerto Resistencia (CR, 2021a). "Esto surgió desde la gente del barrio, que se mamó de hacer las marchas pacíficas ya que todo terminaba en golpes por parte de la policía. Se prefirió estar cerca del barrio por seguridad" dice Efraín, otro activista de Puerto Resistencia (CR, 2021b).

Durante este paro de 2021 no se ha realizado alguna majestuosa marcha de protesta hacia las plazas públicas del centro de Cali, donde están situados los complejos administrativos de la alcaldía y la gobernación, símbolos del poder establecido. En cambio, grandes marchas y caravanas han ido de uno a otro punto de resistencia o a través de varios, muy nutridas cuando desembocan en Puerto Resistencia, La Loma de la Dignidad o Siloé, símbolos del poder en movimiento. Paradójicamente, fueron sectores partidarios de terminar con los bloqueos los que llevaron a cabo una manifestación pública en los bajos del Centro Administrativo Municipal el 25 de mayo, vestidos de blanco. Es como si las plazas del centro y el color blanco, con toda la simbología que encierran, hubieran sido cedidos esta vez por las nuevas generaciones de protestantes a sus émulos, críticos o contrincantes. No ha ocurrido lo mismo en otras ciudades.

Puerto Resistencia se ha convertido de hecho en una nueva plaza urbana, capaz de albergar miles de personas. Se trata de una estrella vial en la cual se cruzan varias calles en todas direcciones, incluida la avenida Simón Bolívar cuyas cuatro calzadas conectan el norte con el sur de la ciudad y, más importante que eso, es un cruce que conecta entre si a todos los barrios aledaños a través de varias bocacalles. Cuando el tránsito de vehículos se suspende en ese punto emerge un espacio público más grande que cualquiera de las plazas públicas tradicionales de la ciudad.

Los puntos de resistencia más consolidados comparten con Puerto Resistencia el hecho de estar orgánicamente vinculados con su entorno barrial. Esto permite el desarrollo de la logística necesaria para defenderlos y mantenerlos ininterrumpidamente. Los miembros de la denominada Primera Línea no son necesariamente los mismos siempre, se rotan, entran y salen, no son un cuerpo especializado en defensa, aunque cumplen esa función, pueden ser "cualquiera" o "todos" como dicen los jóvenes movilizados. Son sí los más admirados. Las segundas y terceras

líneas apoyan de diversas formas a quienes están en la primera, pero no solo hacen eso pues realizan también otras actividades que no tienen que ver directamente con el enfrentamiento. En la retaguardia, en las casas de los barrios, están las madres y los padres desempeñando una función clave de protección y cuidado, la misma de siempre, pues no ha sido especialmente alterada por el paro. Claro que hay puntos de resistencia en los que predominan las mujeres, como en el barrio Alfonso López, y otros en los que las madres jóvenes actúan en primera línea.

Todo esto implica un proceso de territorialización de la acción colectiva no experimentado antes, la vuelve más situada, la hace más local. Los barrios o, más en general, los vecindarios, los sectores, las áreas que conforman la morfología urbana, tienen su historia particular, la de las familias y las generaciones que los fundaron o han llegado luego a compartir allí sus vidas. En algunos casos todo lo que tienen ha sido luchado, conseguido gracias a anteriores movilizaciones de las que se tiene memoria, gestas cuyos recuerdos se trasmiten y reviven en ocasiones especiales. Siloé o Aguablanca son los ejemplos más evidentes. Los acontecimientos de estos días ya están siendo incorporados a la microhistoria épica de las comunidades que los protagonizan. El orgullo de la pertenencia al barrio está siendo fortalecido.

Una activista anónima lo expresó de la siguiente forma: "Mucha gente suele pensar que el éxito de un pobre es salir de su barrio y ya, pero no siempre es así, para nosotros también es importante poder hacer carrera en nuestro entorno y ayudar a que más personas puedan ver un futuro diferente desde ahí, no desde afuera" (EE, 2021d)

No todo es conquista y defensa de las posiciones ganadas en los puntos de resistencia. Después de los primeros días en que los cruces fueron bloqueados, los CAI policiales fueron atacados, por lo que representan como enclave de maltrato y represión en los barrios, o los postes de las cámaras para registrar infracciones

de tránsito fueron arrancadas para construir pequeñas barricadas, vinieron otras cosas. La fiesta, la creatividad, el arte en todas sus expresiones se hicieron presentes. Los miércoles fueron días de grandes concentraciones, como en el resto del país, respondiendo así a la invitación del Comité Nacional de Paro para producir réplicas del primer miércoles, 28 de abril, cada semana. Muchas de estas concentraciones incluyeron presentaciones artísticas, rituales, danzas, cánticos, oraciones y cosas parecidas, muy notables en la Loma de la Dignidad. Los sábados y domingos fueron de carnaval, mercado de productos agrícolas, festivales, actividades deportivas, etc., muy destacados en Siloé. En medio de todo, cualquier día, asambleas populares para discutir y decidir entre todos asuntos de interés general para el punto de resistencia específico o para la Unión de Resistencias de Cali que surgió casi dos semanas después de iniciadas las movilizaciones.

La eficacia de la nueva modalidad de acción fue contundente. El primer día resultaron más notables las concentraciones que las marchas, se produjeron enfrentamientos múltiples entre manifestantes y policías en diferentes sitios, hubo destrozos en instalaciones gubernamentales, incluida la sede de la Administración de Impuestos, fueron atacados algunos bienes públicos, principalmente el sistema de transporte, se produjeron también ataques a algunas sedes bancarias, en la tarde varios almacenes de comercio fueron saqueados aunque eso ya no hacía parte de la protesta como lo puso de presente el rechazo del que fueron objeto los saqueadores. Un toque de queda que entró en vigencia a partir de las 3 p.m. y estaba vigente como medida para controlar la expansión del coronavirus, no impidió que al llegar la noche hubiera varios sitios con manifestantes. Más tarde se alcanzó a escuchar un cacerolazo, no tan fuerte como los de finales de 2019. Al final del día quedó claro que el paro había sido más intenso y contencioso en Cali que en otras ciudades, por lo que el gobierno decidió reforzar el pie de fuerza disponible en la

ciudad. El Ministro de Defensa y los altos mandos de Ejército y Policía se hicieron presentes.

En los días siguientes los manifestantes le perdieron el miedo al coronavirus y al toque de queda, decidieron convertir las concentraciones en bloqueos permanentes, se desató una feroz represión policial contra quienes protestaban, hubo decenas de civiles muertos y heridos, se prendieron las alarmas por la masiva violación de los derechos humanos que se estaba produciendo, la idea de resistir se impuso entre los manifestantes y los indujo a convertir los bloqueos permanentes en puntos de resistencia, hasta que llegó de nuevo el toque de queda, la represión policial y militar, la respuesta favorita del gobierno nacional, justo un mes después de que todo había comenzado.

La violencia que se desató durante el mes merece comentario aparte. Como casi siempre que se presentan situaciones parecidas, se formó una espiral de violencia en la que distintos tipos de esta se fueron superponiendo y combinando hasta producir un ciclón. En términos generales, salvo pequeñas excepciones, la lógica fue como se describe a continuación.

Antes del primer día ya el gobierno nacional había realizado significativos esfuerzos por deslegitimar el paro con base en una idea recurrente: estaba infiltrado por enemigos externos e internos de Colombia, idea con la que fueron preparados para la ocasión los cuerpos de represión policial especializados. Ahí ya había violencia represiva en potencia.

En el momento de comenzar el paro la mayor parte de los participantes acudió a las manifestaciones y las concentraciones de manera completamente pacífica y relativamente despreveni-da, a pesar de los riesgos que todo el mundo sabe que existen.

Cuando se produjeron las primeras concentraciones en cruces viales, que obviamente obstaculizaban el tráfico, los mandos policiales decidieron enviar efectivos del ESMAD, un escuadrón supuestamente especializado en el manejo del orden público que

en realidad genera más violencia de la que pretende controlar siempre que actúa. Se desató entonces la violencia represiva.

Para contrarrestar la violencia represiva los manifestantes más indignados respondieron con violencia defensiva, incluida en esta oportunidad la actuación de las denominadas Primeras Líneas, para tratar de proteger al resto de quienes protestaban. Esta es la que puede denominarse violencia colectiva, porque además de ser defensiva es espontanea, ejercida por personas no especialistas en violencia y desigual ante el ESMAD.

Paralelamente, desde temprano otros cuantos manifestantes buscaron asegurar que "esta vez sí" el gobierno se diera por enterado y escogieron hacerlo atacando algunos edificios gubernamentales y algunos bienes públicos, como las señales de tránsito y las estaciones del MIO. Esta es una especie de violencia anticipativa, muy difícil de comprender, salvo si se tiene en cuenta que la composición social de quienes protestan incluye sectores que tienen dificultades para distinguir entre la aventura y la responsabilidad, que traducen su rabia y su frustración en acción coordinada e inclusive la expresan en palabras.

Con la generalización de la confrontación entre violencia represiva y violencia colectiva se generaron condiciones para que aparecieran otros tipos de violencia.

La violencia oportunista hizo su aparición esta vez muy temprano, en la tarde del primer día, cuando se presentaron los primeros saqueos de mercancía en almacenes de comercio, que se han mantenido después de manera intermitente, con ataques a las estaciones de gasolina para robar residuos de combustible, la instalación de peajes para cobrar el paso a los transeúntes y conductores, saqueos e intentos de saqueo recurrentes. Esto ha obligado a los activistas del paro, especialmente las Primeras Líneas, a rechazar y diferenciarse públicamente de esas prácticas, como ha ocurrido en Puerto Madera (EE, 2021e).

La violencia vengativa, ejercida por civiles armados contra los manifestantes, ha estado también muy presente durante esta coyuntura en Cali. Dos días después de iniciado el paro, cuando ya la violencia policial había producido una decena de muertos, hasta 14 según lo denunciaron entonces organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, se tuvo noticia de que había hombres de civil disparando contra habitantes de los barrios en las noches (Temblores e Indepaz, 2021). Denuncias confirmadas y no confirmadas sobre hechos parecidos continuaron presentándose en las semanas siguientes. Pero la muestra más notable de este tipo de violencia ocurrió el domingo 9 de mayo cuando civiles armados vestidos de blanco atacaron a indígenas miembros de la Minga en la zona sur de la ciudad (EE, 2021a). En medio de gritos, estos civiles justificaron su acción señalando que se sentían secuestrados por los bloqueos, que los indígenas no eran de Cali, que ellos eran los que creaban empleo en la ciudad y, otra vez, que "los buenos somos más".

No hay evidencia de que las guerrillas sobrevivientes, las estructuras del narcotráfico u otras bandas criminales organizadas hayan aportado violencia al paro en Cali, pero tampoco se puede descartar. Si es verdad que los hombres de blanco que atacaron indígenas en la zona de Ciudad Jardín no eran vecinos de ese sector, como algunos habitantes de este lo han manifestado, se podría sospechar entonces de estructuras del narcotráfico. Igualmente, algunos ataques con armas largas, como el que sufrió la estación de policía de El Guabal en la noche del domingo 23 de mayo, podrían ser obra de bandas criminales organizadas. En cualquier caso, la actuación de estos otros agentes de violencia ha sido marginal y episódica. Entre las muestras de violencia letal que no están claramente identificadas sobresale la que han ejercido civiles desde carros y motos contra manifestantes, activistas y miembros de la misión médica en sitios como La Luna, Siloé y muchos otros sitios.

Un balance general del bloqueo múltiple y sostenido, prolongado en el tiempo hasta por cuatro semanas, permite afirmar que ha demostrado ser un mecanismo eficaz para garantizar que este paro sea más parecido que cualquiera otro anterior a una parálisis del trabajo y la producción, pero obviamente no es un mecanismo sin limitaciones. Es contencioso, literalmente un desafío a las autoridades que pone a prueba el apoyo con que cuentan quienes protestan y la forma en que aprovechan las oportunidades creadas en la coyuntura. Requiere ser manejado con cierta flexibilidad, para permitir que fluyan personas, alimentos, combustible y especialmente todo lo relacionado con la atención en salud, incluyendo las ambulancias. Puede desgastarse si comienza a afectar población simpatizante del paro, no logra diferenciarse de las actuaciones delincuenciales que otros realizan en el entorno o dura más de lo conveniente.

Resultados

Las movilizaciones de Cali contribuyeron a los logros obtenidos por el paro nacional, porque hacen parte de él. Desde la ciudad se luchó contra la reforma tributaria que el gobierno nacional retiró el domingo 2 de mayo, así como contra la reforma a la salud que se hundió en el Congreso el miércoles 19, igual que a favor de la exigencia de garantías para la propia protesta y el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos que han sucedido en estos días, tal como lo pidió en la mesa de negociaciones el Comité Nacional de Paro desde la primera reunión exploratoria que tuvo con el gobierno el lunes 10. Cualquier otro resultado que surja de esa mesa de negociaciones será también un logro parcial de quienes participaron en el paro nacional desde Cali.

Los jóvenes manifestantes agrupados en la Unión de Resistencias Cali lograron también un primer acuerdo con el gobierno de la ciudad el martes 25 en torno a tres cosas: (1) garantías para

el derecho a la protesta a nivel local, (2) agendas culturales y pedagógicas para manifestarse en paz, (3) comisión de derechos humanos para esclarecer los hechos en que fueron violados y protección para personas cuya vida está en riesgo por participar en la protesta pacífica (Cali Alcaldía, 2021).

El solo hecho de que los grupos dispersos de activistas que se hicieron cargo de los veinte y tantos puntos de resistencia en los primeros días del paro hayan logrado coordinarse, para elaborar pliegos de peticiones y dialogar con el gobierno local, es ya otro resultado meritorio. Quiere decir que en medio de las movilizaciones se comenzó a configurar un nuevo actor social, diverso y plural por dentro, pero con cierta cohesión general en potencia, que tendría posibilidad de incidir en la vida de la ciudad.

Otro resultado destacable es el aprendizaje colectivo que ha logrado gran parte de la población y la ratificación de algo sabido para quienes ya lo habían aprendido antes, acerca de la función que cumple la protesta popular en la vida de las sociedades, porque llama la atención sobre prioridades que el gobierno y las élites no detectan, obliga a la redefinición de políticas públicas, vigoriza la discusión de alternativas y, por esa vía, fortalece la opinión pública ilustrada, refuerza la democracia directa y la democracia deliberativa, obliga a escuchar la voz de la calle.

Un logro más, que ya se ha subrayado en este escrito, es haber aportado una nueva modalidad al repertorio de acción colectiva contenciosa que se usa en Colombia: el bloqueo simultáneo y sostenido en el tiempo de una constelación de puntos de resistencia, en una misma ciudad, mecanismo que garantiza de manera significativa la parálisis del trabajo y la producción, protege a los activistas de la represión al permitirles actuar cerca de los barrios a los que pertenecen, territorializa las luchas sociales urbanas por sectores, resignifica y reinventa la ciudad al cambiar nombres de lugares emblemáticos, convierte instalaciones policiales en centros culturales, funda nuevas plazas públicas y puebla con nuevas

gestas la memoria colectiva de los ciudadanos. El paro convirtió a Cali en Capital de la Resistencia, sumando así una nueva imagen global de la ciudad a otras que la han identificado en el pasado. Como es modular, esta modalidad puede replicarse en otras ciudades, total o parcialmente, tal como ya ha comenzado a suceder. Tiene este potencial porque ella misma es una modalidad de acción que surgió con base en aprendizajes y emulaciones creativas respecto de otras experiencias, la de Santiago de Chile en 2019-2020, la de Bogotá en 2020 y la propia en 2019.

Perspectivas

Un mes después de iniciado el paro los bloqueos se habían convertido en el principal motivo de divergencia entre el gobierno nacional y el comité nacional de paro. Un protocolo de garantías acordado entre las dos partes no fue ratificado por el Presidente porque, según dijo, no contenía una postura clara en contra de los bloqueos. Voceros del comité afirmaron que los "mal llamados" bloqueos eran una forma legítima de protesta si permitían corredores de abastecimiento, como los manifestantes habían tratado de garantizarlo en todo momento. El vocero del gobierno en las negociaciones dijo entonces que el bloqueo, así fuera intermitente, era una violación de los derechos de los que no protestaban y por lo tanto debían levantarse del todo.

El 28 de mayo hubo actos de provocación contra protesta, el más notable fue el ataque de un agente de la Fiscalía que disparó contra la multitud en La Luna, asesinando a dos manifestantes antes de morir él mismo linchado por los sobrevivientes del ataque. Esas provocaciones hicieron que al final de la tarde gran número de activistas se dirigiera hacia el centro policial de Ciudad Jardín, donde fueron repelidos por uniformados y civiles que también les dispararon, con saldo de más heridos. En la noche el presidente Duque se hizo presente en la ciudad, ordenó máximo despliegue de "asistencia militar" para Cali y el Valle del Cauca,

dijo que la fuerza pública se triplicaría y condenó una vez más los bloqueos. Las autoridades decidieron implantar el toque de queda durante tres días seguidos entre 7 pm y 5 am. Las fuerzas armadas levantaron puntos de resistencia esparcidos por toda la ciudad. La Unión de Resistencias de Cali denunció la andanada represiva y manifestó seguir dispuesta a dialogar con la administración local.

Sin tener en cuenta escenarios apocalípticos que algunos analistas han mencionado, como alguna forma de gobierno militar o cívico-militar, una guerra civil o el recrudecimiento del conflicto armado auspiciado por las guerrillas sobrevivientes, lo más probable es que una versión amortiguada de la situación creada tienda a volverse crónica a nivel nacional, mediante la alternancia de negociaciones esporádicas y protestas recurrentes.

A medida que pasen los días y las campañas electorales vayan tomando forma, es muy posible que la energía social producida durante el paro tienda a encontrar canales de expresión política. Todo depende de cómo fluyan las cosas a través de los vasos comunicantes entre sociedad y política. Un dato para tener en cuenta es que en la anterior elección presidencial Duque le ganó a su contendor por un poco más de dos millones de votos y desde entonces no ha hecho más que revelar las perversiones del proyecto político que representa, mientras que el perdedor se ha mantenido como alternativa viable y tiene un proyecto sintonizado en casi la misma onda de las movilizaciones del último mes.

Referencias

Cabrera, M. (2021). ¿Qué pasa en Cali? En: *Portafolio.co*, 10 de mayo.

Cali Alcaldía (2021). https://www.cali.gov.co/gobierno/publicaciones/160999/avance-en-la-construccion-de-acuerdos-y-garantias-para-la-proteccion--del-derecho-a-la-manifestacion-pacifica-y-respeto-a-la-vida/

CNP Comité Nacional de Paro (2019a). Razones para el paro del 21 de noviembre.

-------- (2019b). Agenda del CNP para la negociación con el gobierno nacional.
-------- (2020). Pliego de emergencia, 19 de junio.
-------- (2021). Lo que vamos a decir al presidente de la república, 10 de mayo
CR (2021a) La única seguridad que tenemos en los barrios son las primeras líneas. En: *caracol.com.co, 10AM Hoy por Hoy*, 11 de mayo
-------- (2021b) La vida en "Puerto Resistencia": la Primera Línea y más. En: c*aracol.com.co, 10AM Hoy por Hoy*, 13 de mayo
-------- (2021c) Escuchado en: *caracol.com.co, 10AM Hoy por Hoy*, 25 de mayo
EE (2021a) Choques entre civiles y Guardia Indígena en la vía Cali-Jamundí. En: *elespectador.com*, 9 de mayo
-------- (2021b) Las cifras para entender el estallido social en Cali. En: *elespectador.com*, 10 de mayo.
-------- (2021c) Pelando la cebolla: las raíces detrás del estallido social en Cali. En: *elespectador.com*, 10 de mayo
-------- (2021d) El malestar de Cali, una ciudad con varias ciudades furiosas que no se hablan. En: *elespectador.com*, 15 de mayo
-------- (2021e) Primera línea del paro en Cali se retira para desmarcarse de saqueadores. En: *elespecador.com*, 19 de mayo
Facebook (2021) https://www.facebook.com/621182606/videos/hay-voluntad-de-di%C3%A1logo-y-los-chicos-de-cali-tiene-mucho-que-decir-armaron-un-pl/10158539908822607/
LSV (2021) La revolución de los NiNis. En: *lasillavacia.com*, 13 de mayo
Salazar, B. (2021). Humillados y ofendidos: los jóvenes de Cali y el paro nacional. En: *razonpublica.com*, 17 de mayo.
Temblores ONG e Indepaz (2021) Informe a la Corte IDH sobre uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia en el marco de las protestas realizadas entre el 28 de abril y el 12 de mayo de 2021. Disponible en: http://www.indepaz.org.co/informe-de-temblores-ong-e-indepaz-a-la-cidh/

NO SALGAS DE TU BARRIO: CALI ENTRE EL HORROR Y LA ESPERANZA

Boris Salazar Trujillo[1]

Ni siquiera sabemos cómo llamar lo que ha estado ocurriendo en Cali. No por ausencia de términos, sino por su abundancia manifiesta: explosión social, estallido social, revuelta popular, revuelta urbana, movilización, revolución, paro nacional, paro solo. Y en clave generacional: revuelta juvenil, revolución de los jóvenes, revuelta de la dignidad.

Todos tienen algo en común: aluden a un cambio radical y explosivo, capaz de lograr en pocos días lo que décadas de aparente calma no habían podido alcanzar. Los que hablan desde lo generacional dan cuenta de la emergencia abrupta de un actor político desconocido: la juventud movilizada y empoderada de la ladera y el oriente de la ciudad. Un actor que antes del 28 de abril ni siquiera existía como fantasma o como producto de la imaginación. Nada que ver con los fantasmas de *Hamlet* o de *El Manifiesto Comunista*.

En realidad, estos muchachos y muchachas de las márgenes de nuestra ciudad aparecían como cifras en los conteos de víctimas de homicidio, de desempleados, de trabajadores informales o precarios, de desertores educativos, de pobres monetarios o de pobres sin más, de detenidos por delitos comunes, de sospecho-

[1] Economista, Magister en Economía. Profesor del Departamento de Economía y líder del grupo de investigación Conflicto, Aprendizaje y Teorías de Juegos (COAPTAR) adscrito al Centro de Investigación y Documentación Socioeconómica (CIDSE) de la Universidad del Valle.

sos de los cientos de crímenes que se cometen a diario en nuestra Cali bella.

Por supuesto, aparecer en las cifras de desigualdad, pobreza, hambre, violencia y exclusión no garantiza una identidad. Mucho menos una identidad política. Por el contrario, su existencia desnuda en los datos de desigualdad económica y social era un signo de su falta de identidad, de su inexistencia como ciudadanos. ¿Cómo, entonces, estos jóvenes se convirtieron, de repente, en actores cruciales de lo que hoy ocurre en la ciudad y en Colombia? Hay una respuesta inmediata: porque el empeoramiento de la precaria situación social y económica en la que *ya* se encontraban los llevó a rebelarse contra el orden establecido, y en ese proceso empezaron a construir su identidad política y social hasta llegar a ser lo que hoy son.

Los datos son elocuentes: para Cali, en el primer trimestre de 2021, los hombres entre los 14 y 28 años, en estado de desempleo, llegaron al 27.2%, y las mujeres del mismo rango de edad al 31.9%. Para las 13 ciudades y áreas metropolitanas de la encuesta GEIH del Dane, los hombres de la misma edad representaban el 43,4% de los desocupados, y las mujeres jóvenes en la misma situación el 42,8% del total.

Fuerte pero no suficiente. Sí, los jóvenes de ambos sexos fueron los que más perdieron, entre todos los perdedores de la recesión inducida por el control de la pandemia. Pero no, un levantamiento popular de la magnitud, intensidad y duración del ocurrido en el último mes en Colombia y en particular en Cali, no puede ser el resultado de un salto en las tasas de desempleo y desocupación juveniles y en el porcentaje de jóvenes que cayeron en la pobreza extrema. Y, sobre todo, no puede explicar por qué, y cómo, una juventud apática, invisible, sólo existente en los datos de pobreza, desigualdad y homicidio, pudo convertirse en una formidable fuerza de protesta y resistencia que ha llevado al régimen a desplegar sobre Cali a 7,000 hombres del ejército nacional ¡para controlar un movimiento social desarmado!

Una juventud bajo el imperio de la muerte

El primer punto en el camino hacia una posible explicación de lo ocurrido es que la situación de los jóvenes marginales de Cali ha sido distinta a la de sus pares de otras capitales colombianas. Los padres y abuelos de los jóvenes que hoy están en las barricadas, en las asambleas populares y en las marchas llegaron a Cali en las últimas cuatro décadas empujados, primero, por el terremoto de 1979, y más tarde por la guerra irregular que se libraba en el sur del país, en la costa pacífica y en las altiplanicies de Nariño y Cauca, y en el Putumayo, y más al norte en el Chocó. Cientos de familias, a veces poblados, veredas y corregimientos enteros llegaron a través de la activación de sus redes familiares y de paisanos a la ladera de Cali, a las comunas 18 y 20, y al oriente, en lo que luego se conocería como el distrito de Aguablanca, para formar las comunas 13, 14, 15, 16, y 21[2].

En la ladera se asentó la población indígena que venía de las altiplanicies del Cauca[3] y en el oriente, en cercanía del río Cauca, la población afro que venía de la costa pacífica. Las calles del nuevo oriente se fueron "haciendo sin querer" (González 2013, 36), una a una, improvisando, en medio del barro y las inundaciones, mercados, servicios, peluquerías, conexiones piratas a la energía, pilones de agua, alcantarillas, escuelas. En los primeros años de los noventa, las inundaciones, el hacinamiento, la loca vida urbana y la pura interacción humana aceleraron los ciclos reproductivos de los más jóvenes: las muchachas de trece o catorce se juntaron con pelados de dieciséis y diecisiete años para invadir, construir rancho aparte (González 2011) y tener los bebés que, junto a la cohorte siguiente, están hoy en las barricadas.

[2] En las décadas del 50, 60 y 70 del siglo pasado, procesos de migración interna y de lucha por la tierra y la vivienda produjo los barrios que conformarían la primera frontera oriental de la ciudad (Campo 1977, cap. 5). Luego llegaron los desplazados del conflicto armado.

[3] Siete décadas atrás, los trabajadores del ferrocarril del pacífico decidieron levantar sus viviendas a lado y lado de la línea férrea, en las colinas y hondonadas de lo que se convertiría en Terrón Colorado, en la comuna 1.

Tuvieron una socialización dura y violenta, propia de las zonas de frontera. Muchos venían del campo, de las riberas de los ríos y de las playas del Pacífico, de comunidades unidas por antiguos lazos de solidaridad y debieron enfrentar un mundo urbano sin ninguno de los servicios y ventajas de lo urbano, pero con toda la carga de amenaza y disputa de las zonas urbanas de "colonización" reciente. La lucha que todos los jóvenes libran para lograr una posición con respecto a sus iguales y a los adultos fue más exigente para ellos. Lograr el respeto de sus iguales se hizo a través de medios violentos. Las armas blancas dieron paso a las armas de fuego provistas en abundancia por bandas criminales, policías corruptos y narcotraficantes.

Una falta de respeto, una ofensa, una humillación se convirtieron en enfrentamientos interpersonales que conducían a lesiones personales, al homicidio, y a largas cadenas de retaliaciones que involucraban a amigos y familiares. Para sobrevivir se agruparon en parches, combos, pandillas y entraron en relaciones fatales con narcotraficantes, policías, bandas criminales, políticos, agencias estatales, organizaciones no gubernamentales, y milicias urbanas. De esa combinación de agentes estatales y criminales resultó una estrategia de control de la población juvenil de las márgenes de la ciudad que la excluyó, criminalizó, enfrentó a unos contra otros y eliminó en números que variaban de acuerdo a la dinámica de los enfrentamientos y a la aplicación del principio de *hacer morir y dejar vivir.*

En la década del noventa llegó también la violencia más atroz contra los jóvenes del oriente y de la ladera. Las estadísticas de los homicidios de menores y jóvenes en 1994 bordean el *genocidio*: en ese año fueron asesinados 389 menores (entre 15 y 19 años), 462 jóvenes, entre los 20 y 24 años, y 495 entre los 25 y 29 años, para un gran total de 1,396 jóvenes asesinados[4] ¡en un solo

[4] Si bien 1994 es el pico más alto de la historia, en los últimos treinta años, los jóvenes no han dejado de ser el grupo más afectado por el homicidio. Las cifras fluctúan entre los 300 y 935 asesinatos de jóvenes por año, con 2013 como el segundo pico más alto con 935

año! ¡En una ciudad que no estaba en guerra! Una ciudad a la que sus padres y los abuelos habían llegado huyendo del conflicto armado que asolaba al campo colombiano.

Como han dejado bien claro los vídeos y "en vivos" que han circulado en las redes sociales y de teléfonos móviles en el último mes, en la respuesta que las fuerzas policivas del estado y bandas armadas de "gentes de bien"[5] le han dado a la revuelta popular en Cali,

El derecho a la vida y la muerte sólo se ejerce de una manera desequilibrada, *siempre del lado de la muerte*. El efecto del poder soberano sobre la vida sólo se ejerce a partir del momento en el que el soberano puede matar. (Foucault 2002, 218, mi énfasis).

Hasta el 27 de mayo de 2021 20 jóvenes habían caído en Cali bajo el fuego policial o a golpes y luego incinerados por unidades de la policía[6], y 5 bajo el fuego de armas accionadas por civiles armados o agentes estatales vestidos de civil. En el mismo periodo Indepaz (2021) reportó 384 agresiones físicas, 1.139 casos de

jóvenes asesinados, entre ellos 248 menores.

[5] Etiqueta que los habitantes organizados de sectores exclusivos del oeste y de Ciudad Jardín se han dado a sí mismos para oponerse a los que protestan. Aunque ambos comparten su oposición radical a la protesta, sus métodos y estilos acción han diferido en lo que respecta a la violencia: mientras que los del oeste han preferido marchar y han llegado a acuerdos civilizados con los manifestantes, los de Ciudad Jardín han optado por la táctica fascista de atacar, con armas automáticas, a manifestantes inermes y desarmados. Lo hicieron el domingo 9 de mayo, cuando atacaron a la minga indígena que llega a la ciudad, hiriendo a 8 personas, dos de ellas de gravedad, y lo volvieron a hacer, a mayor escala, el viernes 28 de mayo, en una acción planeada y coordinada con la policía. Debe ser subrayado que no se trata de todos los habitantes de Ciudad Jardín, sino de los que se han organizado para atacar a quienes ponen en peligro su seguridad.

[6] El jueves 27 de mayo apareció el cadáver de un joven en lo que quedaba del local del Dollar City, una tienda de baratijas situada junto a la glorieta de Siloé. En entrevista con Canal 2, una joven identificó al muerto como su hermano, David Stiven Sánchez, de 16 años, quien fuera detenido por los agentes de la policía en las inmediaciones de Dollar City, golpeado salvajemente y luego quemado, vivo todavía, al estilo de los carabineros chilenos durante la dictadura de Pinochet. Un sacerdote que observó al joven golpeado, les pidió a los policías que lo dejaran llevar a un hospital cercano. No lo permitieron. Después su cadáver quemado apareció en Dollar City. Quizás, los asesinos, como dijo su hermana, esperaban que su identidad desapareciera con el fuego. No ocurrió así y su asesinato, como el de decenas de jóvenes, deberá ser investigado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 472 intervenciones violentas en medio de manifestaciones pacíficas, 33 agresiones oculares, 146 casos de disparos de armas de fuego, 18 víctimas de violencia sexual y 5 víctimas de violencia basada en género, por parte de fuerzas policiales, en toda Colombia.

El viernes 28 de mayo, a plena luz del día, en distintos puntos de la ciudad, fueron asesinadas 13 personas.[7] En lo que parecía ser un plan deliberado de las fuerzas policiales, las marchas y los puntos de concentración que celebraban el primer mes del paro nacional fueron atacadas con fuego de fusiles y pistolas automáticas, por individuos entrenados para matar que vestían de civil, pero disparaban sobre la multitud inerme desde posiciones de combate, con armas cortas y de largo alcance, con la complicidad de policías uniformados que los apoyaban en su tarea, tal como puede ser observado en los vídeos que se hicieron virales a escala global, y que hoy está estudiando la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos.

Hay indicios concretos de que detrás de lo ocurrido hubo un plan. En el sector de la Luna un hombre vestido de civil asesinó a sangre fría a dos manifestantes y luego fue linchado por la multitud. El asesino resultó ser un agente del CTI de la Fiscalía General de Nación. El fiscal Francisco Barbosa, en plan de apagar incendios y a manera de justificación, afirmó que el agente "se encontraba fuera de servicio", dejando en el aire la sugerencia de que en sus vacaciones los agentes de la Fiscalía asesinan manifestantes desarmados.

En Cali, a diferencia de otras capitales del país[8], las fuerzas policiales han actuado en alianza con bandas de civiles armados que desde camionetas Toyota, o a veces a pie y en grupo, dis-

[7] Un informe completo sobre las circunstancias en que fueron asesinadas doce personas por la fuerza pública y por civiles armados fue realizado por Luis Alfonso Mena de Periodismo Libre, y está disponible en http://luisalfonsomenas.blogspot.com/2021/05/matones-del-regimen-de-duque-asesinaron.html.

[8] Salvo Pereira en donde desde una camioneta blanca fue asesinado el líder social y ambientalista Lucas Villa y los líderes sociales han sido amenazados de muerte.

paran contra manifestantes desarmados en episodios que hacen recordar el accionar de los "pájaros" de La Violencia, que ejecutaban a sus víctimas desde berlinas negras en la Cali de finales de los años 1940 y primera mitad de los 1950. Con tres diferencias cruciales: los matones de hoy van en camionetas blancas, disparan a plena luz del día, y terminan filmados, por sus víctimas potenciales, y por reporteros independientes, en vídeos que se han vuelto virales y han circulado por el mundo entero.

La emergencia de la revuelta popular

Ni a los treinta y siete jóvenes asesinados hasta el 30 de mayo, durante el estallido social, ni a los miles de jóvenes asesinados en Cali en los últimos treinta años, los mató la pobreza. La pobreza no mata a tiros —mata por otros medios. Los mataron las relaciones sociales en las que les tocó vivir, y los instrumentos elegidos por el estado, y sus aliados "civiles", para controlar lo que temían se volviera incontrolable: una juventud negra, indígena, mestiza y mulata, que había llegado de fuera y era educada en la calle, por fuera de la escuela, bajo la supervisión violenta de bandas criminales, policía, y grupos de justicia privada.

La reforma tributaria no fue la chispa que encendió la pradera. Ni los pobres ni los jóvenes de las márgenes pagan impuestos. La metáfora del campo magnético que magnetiza un material ferroso acoplando o *uniendo* sus átomos y *dejándolo magnetizado* es más apropiada para describir lo ocurrido en Cali. El campo magnético fue el paro nacional que abrió la posibilidad de regresar a las calles después de más de un año de encierro, confinamiento, despotismo, muerte y hambre. La magnetización unió a los jóvenes entre sí y a los jóvenes con los adultos de los barrios populares y a todos los anteriores con las clases medias empobrecidas por la destrucción de empleo informal y formal y la recesión económica inducidas por el tratamiento despótico de la pandemia.

La unidad que surgió al calor de las marchas multitudinarias del 28 de abril y de los primeros enfrentamientos con las fuerzas policivas, que habían comenzado a reprimir, a los balazos, la protesta popular en los barrios de Cali no era ni natural ni inevitable. Por el contrario, los jóvenes de los barrios marginales de la ciudad estaban separados, en bandos en apariencia irreconciliables, por múltiples conflictos intergrupales, interpersonales y deportivos. Estaban las pandillas y los combos que se enfrentaban por defender su "pedazo" de territorio y su honor, las barras bravas del América y del Deportivo Cali que no habían dejado de enfrentarse a muerte en distintos escenarios, y las viejas rencillas interpersonales que habían arrastrado humillaciones, rabias, muertes y venganzas por generaciones, en broncas que involucraban amigos, familiares, descendientes.

Esas distancias fueron superadas por la fuerza magnetizadora inducida por el llamado del paro nacional y por la indignación que bullía en sus mentes. Efraín[9], un líder de la protesta juvenil en Puerto Resistencia, antes Puerto Rellena, entrevistado por Caracol Radio, describía la magnitud y el significado del cambio ocurrido:

Ese reclamo por la dignidad desde 2019 brotó y salió a flote, brotó de tal manera que aquí hay pelados de parches *que antes ni se podían ver*. Universitarios, de colegio... Ojalá se replicara todo el país, porque las barras de equipos de fútbol hoy se *unieron* para manifestar esa indignación de los atropellos que estamos viviendo desde hace mucho. (10 AM Hoy por Hoy, Caracol, mayo 9 2021, mis énfasis.)

Fue una unidad que apareció en forma simultánea en cada barrio, alrededor de cada punto de concentración y resistencia, y en la ciudad entera en el despliegue de una red conformada por 18 puntos de resistencia, pero interconectada por los múltiples mensajes de Whatsapp, los "vídeos en vivo" compartidos y

[9] Efraín es, por supuesto, un nombre ficticio, adoptado por obvios motivos.

difundidos a través de una red espontánea global que permitía ver, en cualquier lugar del mundo y en tiempo real, lo que estaba ocurriendo *ahora* en un punto de resistencia de Cali.

Lo que no implica ni una dirección central y jerarquizada, ni un plan maestro, urdido en Cali o en Bogotá o en algún lugar de la Web, por los genios terroristas que la inteligencia de la Policía Nacional cree haber detectado en sus delirios de espionaje transnacional. Efraín reconoce que la unidad se hizo a partir de múltiples luchas locales, impulsada por la ferocidad de la represión estatal:

Nunca se pensó que se unieran todos los barrios y puntos, cada uno, eran *cerca de 18 puntos, luchando por lo suyo*. Fue tanto el *miedo y el rigor* que hubo por la represión que la gente *no tenía tiempo en pensar en eso*. (Ídem., mis énfasis.)

Es necesario detenerse por un poco en las interacciones cruciales entre el miedo y el rigor asociados a la represión estatal y la estrategia espontánea de hacerse fuertes en sus propios barrios —en el "pedazo" con el que se identifican los pelados de esta ciudad segregada. En la entrevista citada Efraín deja saber que los pelados de las comunas marginales habían participado en las múltiples movilizaciones que habían venido ocurriendo en Cali en 2019, y en particular en las movilizaciones y choques ocurridos durante el paro nacional del 21 de noviembre de ese año.

La experiencia les había enseñado que la secuencia rutinaria marcha-represión policiva-golpes-arrestos y fin de la protesta no podía ser repetida esta vez:

Esto surgió desde la gente del barrio, que se *mamó* de hacer las marchas pacíficas y que todo terminaba en golpes por parte de la policía. Se prefirió estar cerca del *barrio por seguridad.* (Ibid.)

Por eso decidieron hacerse fuertes en sus territorios, buscando dos objetivos estratégicos: garantizar la continuidad y la intensidad de la lucha y la seguridad de quienes estaban en "primera línea" y del movimiento todo. En la oleada de rebeliones

populares ocurridas en todo el globo desde 2011 el miedo inicial generado por la violencia de la represión estatal dio paso a la rabia que llevaba a las multitudes a no retroceder ante el avance de las fuerzas represivas. (Castells 2013)

Sin duda, esa misma sorpresa debieron haberla sufrido las fuerzas estatales cuando vieron que los jóvenes se hacía fuertes en sus barrios, y no salían corriendo como siempre lo habían hecho antes, con sus muertos sumando la pila de jóvenes muertos en "confusas circunstancias". En Cali, el miedo también dio paso a la rabia y a la indignación y a la activación de circuitos cerebrales que ya habían sido entrenados por la represión policial que desde muy temprano había estado presente en las vidas de jóvenes marginalizados por el estado y la sociedad. Pero el paso del miedo a la rabia y a la acción, propio de todo proceso revolucionario, no ocurrió en un único lugar simbólico, sino en muchos puntos de la ciudad popular, generando una rápida reconfiguración de su estructura urbana y una ciudad "más grande" en las mentes de los caleños.

La variante caleña de las rebeliones globales

En las rebeliones ocurridas en todo el globo después la crisis financiera global de 2008, la retroalimentación de los eventos masivos sobre sí mismos, a través de su reproducción en las redes sociales y en teléfonos móviles, y su crecimiento exponencial, llevó a la ocupación permanente de espacios centrales "liberados", con alta carga simbólica, en los que multitudes resistieron la represión estatal que usó en vano ataques de caballería, fuerzas especiales, matones a sueldo y hasta cortes generalizados de internet, como ocurrió en la Plaza Tahrir en El Cairo, Egipto durante la primavera árabe de 2011 (Salazar 2016). Ocurrió también, con menor intensidad y con menores efectos sobre el poder político, con la ocupación de la Puerta del Sol de Madrid, por parte de "los indignados", y con la ocupación de Wall Street por el movimiento del mismo nombre, "Occupy Wall Street" (Cas-

tells 2013). Y ocurrió, con esplendor multitudinario y con una intensidad que quebró la resistencia del gobierno de Piñera, en la Plaza Italia de Santiago de Chile durante la primavera chilena de 2019.

La estrategia de los indignados de Cali es una variación significativa con respecto a lo ocurrido en las rebeliones populares y juveniles mencionadas más arriba. En lugar de ocupar un lugar central y simbólico, como la Plaza Italia o Wall Street o la Puerta del Sol, decidieron ocupar 18 puntos de sus propios territorios, con el apoyo de sus vecinos, convirtiéndolos en lugares simbólicos a través de la acción, resignificando de paso sus usos urbanos y simbólicos y cambiando la memoria de la ciudad para sus habitantes.

En Puerto Resistencia el CAI de la Policía fue convertido en biblioteca pública, y las paredes y muros de los edificios aledaños fueron transformados en murales espontáneos por la creatividad de los artistas del lugar, y la sede de acción comunal en puesto de salud y espacio para la misión médica, y en un parque cercano otra edificación se convirtió en lugar de acopio de alimentos. En otros puntos de la ciudad han aparecido mercados móviles que han acercado a productores y consumidores saltando la cadena de intermediación y aliviando la carestía propiciada por los cierres de puntos de entrada a la ciudad y el paro de camioneros.

¿Cuándo los habitantes de la Cali tradicional y rica y de clase media, que concentra la mayor parte de los servicios, hospitales, parques y comercios de la ciudad, habían oído hablar de Calipso o de Puerto Maderas, o de Puerto Resistencia o Puerto Rellena, o de la glorieta de Siloé o de Paso del Comercio o Paso del Aguante? ¿Cuándo habían tenido que ver a esos jóvenes de quienes sólo sabían que se mataban entre sí en esa ciudad oscura que no era la suya, y de quienes quizás conocían, en el mejor de los casos, a sus madres y tías y hermanas que trabajaban en el servicio doméstico?

Peor aún, ¿cuándo habían debido enfrentar a la situación inaudita de que la comodidad de sus vidas dependiera de unos cuantos "maleantes" y "vándalos" de los barrios de indios y negros y zambos y mestizos y mulatos del oriente y la ladera? ¿Y de cuándo acá los vándalos eran un actor político que se atrevía a sentarse con ellos y hacerles exigencias en mesas de diálogo, casi siempre fallidas? El mundo al revés, como es el mundo siempre que los de abajo se rebelan.

No fue, pues, una pura reacción económica ante el hambre y la desigualdad. En lo inmediato fue una reacción *política* al despotismo con el que el gobierno nacional y los gobiernos locales habían tratado el contagio del Covid-19 y a la imposición de una reforma tributaria que gravaba la canasta familiar y golpeaba a los asalariados. En lo más profundo fue un movimiento de capas tectónicas contra la opresión sistemática con la que el estado nacional y local los había tratado a través de casi tres generaciones.

La biopolítica de la pandemia

En toda Colombia, en el campo y en la ciudad, el control social del contagio del virus fue usado como un arma política por parte del estado, gobernantes locales, bandas criminales, paramilitares y grupos residuales de la guerrilla para imponer su ley despótica sobre los pobres, y sobre los jóvenes, en particular. Toques de queda, confinamientos y ley seca se convirtieron en la nueva forma de gobernar a los más pobres y de culpabilizarlos por el contagio criminal a los que sí cumplían con las normas de bioseguridad. La serie de masacres de jóvenes y de líderes sociales ocurridas en Nariño, el Cauca, Casanare, Arauca y Antioquia, en el mes de agosto de 2020, fueron justificadas por el celo de los asesinos en hacer cumplir las normas de bioseguridad impuestas por ellos mismos y por los gobiernos locales. (Salazar 2020b)

En Cali, en agosto, el mes en que los niños y adolescentes elevan cometas, fueron asesinados cinco menores en el barrio Llano Grande en el distrito de Aguablanca, al oriente de Cali. Los

mataron asesinos al servicio de una agencia de seguridad privada que tenía a su cargo la vigilancia de una obra civil situada en un cañaduzal en el que había una laguna al que los muchachos iban a nadar. (Salazar 2020b)

La masacre de los menores de Llano Grande respondía al clamor de las "gentes de bien" por un tratamiento más duro a los jóvenes que robaban, violaban las medidas de bioseguridad y parecían divertirse mientras la ciudad responsable vivía encerrada por la pandemia. Cada fin de semana escuadrones de la policía y de la secretaria de seguridad de Cali hostilizaban, perseguían y ponían cientos de comparendos a los jóvenes desempleados y sin ingreso que encontraban en las calles del oriente y de la ladera, acabando de paso con la economía informal con la que sobrevivían a medias antes de la pandemia.

En algunos barrios los encuentros entre la policía y los jóvenes y las comunidades que desobedecían las estrictas medidas de control se convirtieron en batallas campales, que terminaron con la expulsión de la policía. La pandemia volvió a mostrar a los jóvenes y a los habitantes de los barrios marginales de Cali la cara opresora y demagógica del estado. Con una mano les entregaban, con gran escándalo mediático, unos mercados muy caros, y con la otra los hostilizaban, multaban y criminalizaban como responsables del contagio que se abatía sobre la ciudad. La bioseguridad se convirtió en biopolítica para encerrar, castigar y controlar a los jóvenes pobres y a los pobres en general.

Los jóvenes aprendieron a reconocer en la policía y en los funcionarios de la administración local a un estado opresor que los encerraba, no los dejaba trabajar, los privaba de un ingreso, los reducía a la inactividad y encima de todo los criminalizaba como los culpables de la expansión del contagio. Era el escenario perfecto para un estallido social producto de la indignación, la rabia y la humillación vivida durante años y profundizada a extremos inhumanos durante la pandemia.

Fascismo ordinario

La rebelión popular que ha transformado la ciudad en el último mes ha sido respondida con violencia cruel y desbordada por el gobierno de Duque. En las manifestaciones violentas de las bandas armadas de "la gente de bien" de la ciudad y en sus pedidos de mano dura con los vándalos, Duque ha creído encontrar al aliado que le daría la legitimidad social y política que tanto necesita en su aislamiento político. Sus aliados quisieron mostrar su arrojo y efectividad militar con los actos de matonería del viernes 28 de mayo. Pero ni siquiera lograron un acto fascista auténtico con su violencia ilimitada y celebración ostentosa de la muerte. No corrieron tanto riesgo porque se saben protegidos por un gobierno alcahueta de la violencia de los de arriba. A duras penas lograron un acto de fascismo ordinario: dispararon y luego ordenaron la tortura de los jóvenes detenidos por una policía que funciona bajo sus órdenes, como una guardia privada pagada con los impuestos de todos los colombianos.

La alianza quedó sellada el sábado 29 de mayo cuando Duque fue a Ciudad Jardín a presentar sus respetos a "las gentes de bien" y a anunciar su nuevo decreto de "asistencia militar", con el que desplegó 7,000 hombres del ejército nacional para sofocar una protesta social que requiere un tratamiento político, no militar. En la mañana del 30 de mayo cientos de hombres del ESMAD y de la policía, cargados de equipos y apoyados por cientos de vehículos controlaban los alrededores de la calle 5 con 94.

A pesar del despliegue apabullante de fuerza, decenas de jóvenes y de pobladores seguían protestando alrededor de la estación del Mío y de la intersección mencionada. Actuaban como si allí no estuviera tan formidable fuerza policial. Quizás creen, como creemos una proporción no despreciable de los caleños, que los actos políticos deben ser respondidos con actos políticos. Duque no lo cree así. Por eso, no pudo responder nada coherente cuando un joven lo increpó por la matanza que hombres bajo sus órdenes

han perpetrado contra los jóvenes de Cali, que hoy pagan con sus vidas el atrevimiento de haberse convertido en actores políticos.

Referencias

Campo, U. 1977. *La urbanización en Colombia*. Bogotá: Ediciones Suramérica.

Castells, M. 2013. *Redes de Indignaçao e Esperança. Movimentos Sociais na era da internet*. Rio de Janeiro: Zahar.

Foucault, M. 2002. *Defender la sociedad*. México, DF: Fondo de Cultura Económica.

González, J. D. 2011. *Maestra vida. Relatos de parcería en la ciudad popular*. Cali: Fundación Ciudad Abierta.

González, J. D. 2013. *Banda Oriente. Trayectos de una ciudad que una vez…* Cali: Fundación Ciudad Abierta.

Salazar, B. 2016. *Revoluciones y conectividad. De La Bastilla a la Plaza Tahrir*. Cali: Programa Editorial de la Universidad del Valle.

Salazar, B. 2020a. "Masacre en los cañaverales de Cali". *Razón Pública*, agosto 17.

Salazar, B. 2020b. "La mediocridad del gobierno: a propósito de las masacres de agosto". *Razón Pública*, septiembre 7.

ALGUNOS FACTORES DESENCADENANTES DEL LEVANTAMIENTO POPULAR EN CALI Y SU REGIÓN METROPOLITANA

Fernando Urrea-Giraldo[1]

La mayor radicalidad del levantamiento popular en Cali en el marco del paro nacional del 28 de abril, que continúa hasta el momento de escribir estas líneas, comparado con otros centros urbanos del país, requiere plantear tanto consideraciones contextuales generales como atender a elementos particulares de caso de Cali.

Cali, una *ciudad región ampliada* con gran diversidad étnica-racial

Un primer factor a tener en cuenta es la singularidad de la región metropolitana que tiene como epicentro a la ciudad de Cali en el marco de la gran región del suroccidente colombiano. Esta área la conforman 28 municipios, 14 del norte del Cauca y 14 del sur del Valle, incluyendo a Buenaventura y a la misma ciudad de Cali (Galeano et al. 2019). Se trata de un área conformada en un proceso de larga duración, desde el siglo XVIII en adelante, con la presencia de dos poblaciones históricamente importantes además de la población blanca-mestiza: la negra o afrodescendiente y la indígena.

[1] Sociólogo, Magister en Ciencia Política. Profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle. Miembro del grupo de investigación Estudios étnico-raciales y del trabajo en sus diversos componentes sociales vinculado al Centro de Investigación y Documentación Socioeconómica (CIDSE) de la Universidad del Valle.

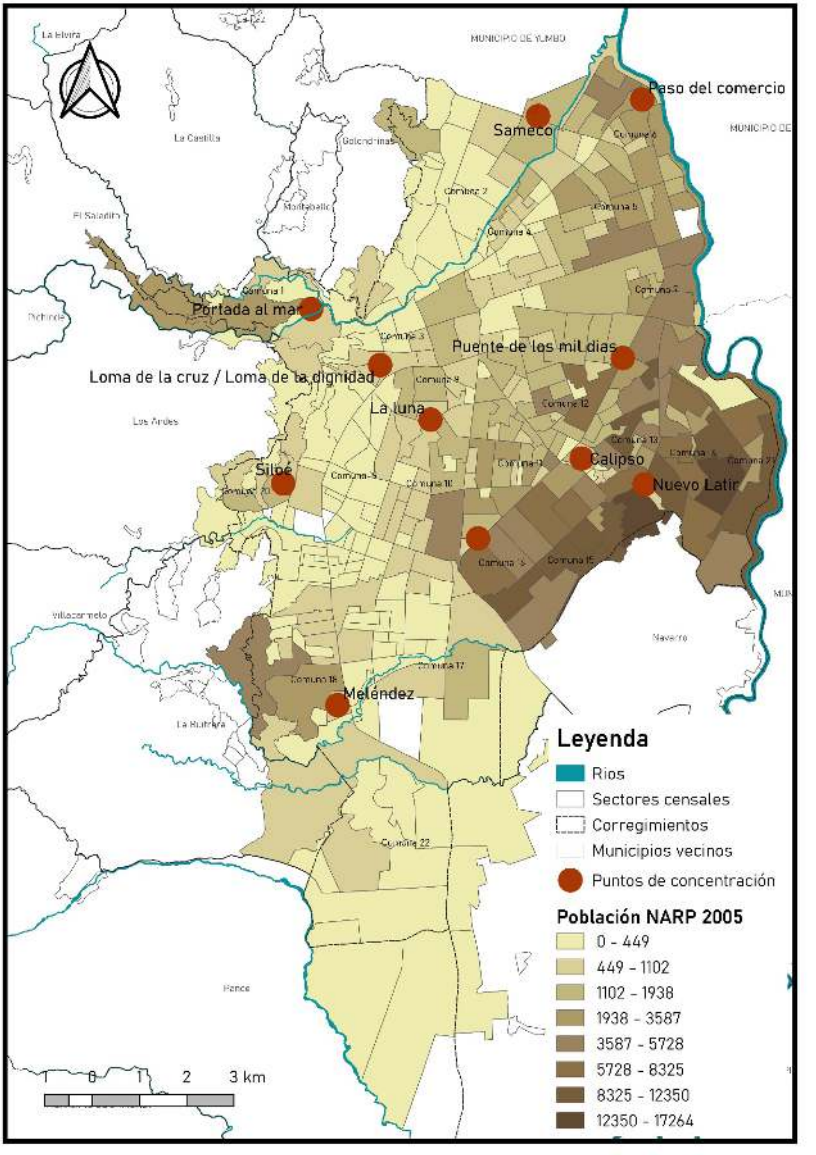
Resultado de este proceso ha sido la rica diversidad étnico-racial que combina la existencia de municipios con hegemonía demográfica negra o indígena y municipios multirraciales o multiétnicos. Este fenómeno se ha vuelto más visible a raíz de la Constitución de 1991 y de la Ley 70 de 1993, más una serie de disposiciones constitucionales posteriores que han consolidado las conquistas territoriales indígenas. En resumen, se trata de una región metropolitana donde Cali funge de *ciudad región ampliada*, con un archipiélago alrededor compuesto de manchas urbanas a lo largo del norte del Cauca y el sur del Valle. Desde su pasado colonial y republicano, y a lo largo del XX hasta nuestros días, Cali ha contado con la presencia de gente negra e indígena en su vida cotidiana. Por ejemplo, durante el crecimiento urbano de los siglos XX y XXI, la ciudad ha tenido un mercado de trabajo de empleadas domésticas negras e indígenas, en parte resultado de la herencia colonial esclavista y de servidumbre indígena que ha sobrevivido a los procesos de modernización y al surgimiento de clases medias y clases altas. Por lo menos hasta el censo del año 2005, Cali fue una de las grandes ciudades colombianas que todavía contaba con la mayor participación de mujeres negras, indígenas, además de las blancas-mestizas, como empleadas domésticas internas. Era un nivel quizás compartido por Cartagena, pero un componente muy poco significativo en ciudades como Bogotá, Medellín o Barranquilla. Vale la pena recordar aquí la caricatura de Nieves -la mujer negra empleada doméstica con su novio Hetor, un hombre negro trabajador de la construcción- creada por una mujer blanca de la elite caleña, Consuelo Lago, y publicada hasta hoy en día por los diarios El País de Cali y El Espectador.Según estimativos del CIDSE, en términos demográficos la tercera parte de la población caleña es negra o afrodescendiente. Sumando la población afrodescendiente de los 27 municipios restantes de la región metropolitana, se calcula un total de 1,5 millones, lo que equivale a entre el 32 % y el 35 % de

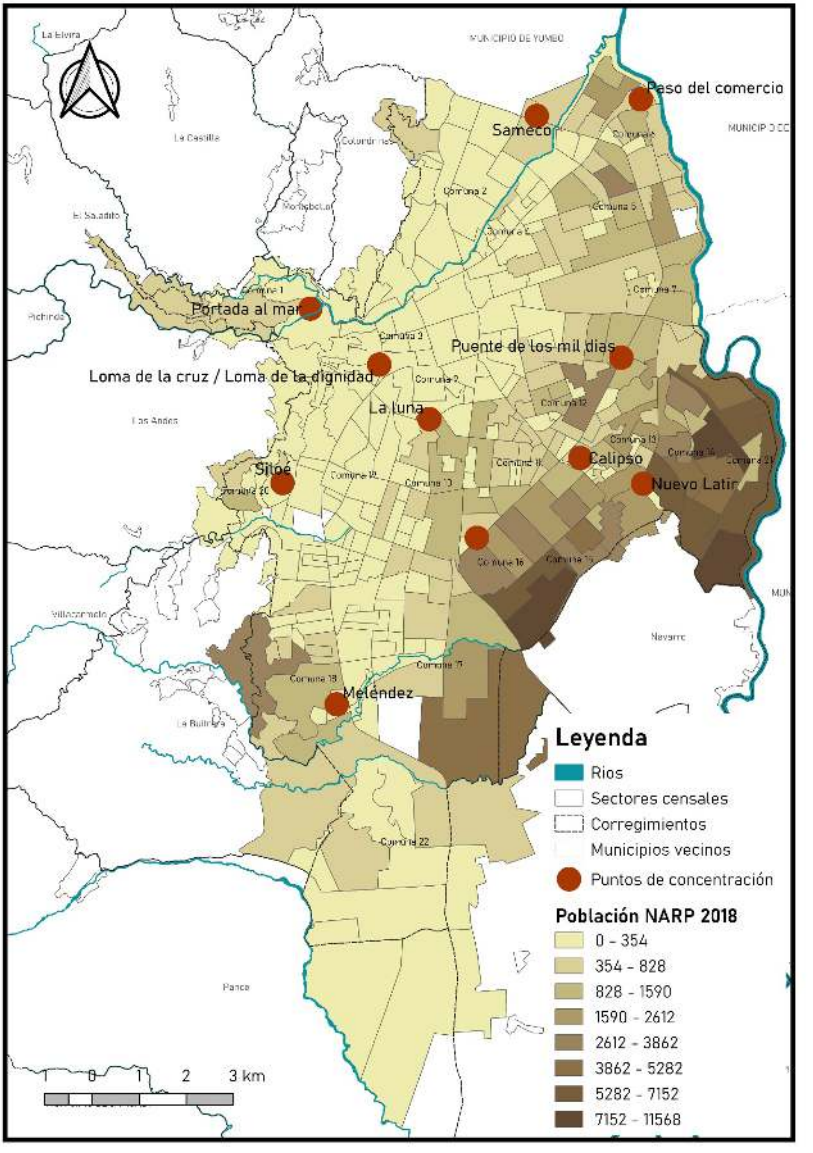
toda la población afrodescendiente de Colombia. En cuanto a la población indígena, la ubicada en los nueve municipios del norte del Cauca que forman parte de la región metropolitana (constituida en su mayor parte por miembros de los pueblos Nasa y Misak), constituye la segunda mayor concentración indígena del país cercana a un centro urbano.

El patrón de segregación racial residencial en Cali

Por medio de mapas a escala de sector censal en los censos de población de los años 2005 y 2018, se observa la presencia mayoritaria de la población negra en el oriente de la ciudad, y ello a pesar de la fuerte omisión censal en el CNPV 2018 que castigó considerablemente a la visibilidad de los afrodescendientes, en la medida en que las áreas de omisión censal concentraban importantes núcleos de población negra. En segundo lugar, se ubica la región urbana de ladera como otro espacio de concentración de gente negra. A continuación, se pueden ver dos mapas con la respectiva participación de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera (NARP) y los más importantes espacios de resistencia barrial durante el paro en Cali[2]. Los diferentes estudios de economía y sociología urbana sobre Cali, desde el trabajo pionero del proyecto CIDSE-IRD de 1998-1999, que han tomado como marco el censo de 1993, los estudios espaciales sobre el censo del 2005 y la Encuesta de Empleo y Calidad de Vida de Cali del Ministerio de Trabajo y la Alcaldía de Santiago de Cali, han confirmado un fuerte patrón de segregación espacial urbana según condiciones socioeconómicas y de la vivienda, que incluye un fuerte componente socio-racial. Este componente incide en el conjunto de las dimensiones del mercado de trabajo, de las oportunidades educativas y de salud, así como en el acceso a la canasta de bienes básicos y de consumo cultural.

[2] Los mapas fueron elaborados por el economista Luis Gabriel Quiroz Cortés y la economista Valentina Valoyes Vélez.


Paso del comercio
Sameco
Portada al mar
Puente de los mil dias
Loma de la cruz / Loma de la dignidad
La luna
Calipso
Nuevo Latir
Silos
Meléndez
Leyenda
Rios
Sectores censales
Corregimientos
Municipios vecinos
Puntos de concentración
Población NARP 2005
0 - 449
449 - 1102
1102 - 1938
1938 - 3587
3587 - 5728
5728 - 8325
8325 - 12350
12350 - 17264
0 1 2 3 km


Paso del comercio
Sameco
Portada al mar
Puente de los mil dias
Loma de la cruz / Loma de la dignidad
La luna
Calipso
Nuevo Latir
Siloé
Meléndez
Leyenda
Rios
Sectores censales
Corregimientos
Municipios vecinos
Puntos de concentración
Población NARP 2018
0 - 354
354 - 828
828 - 1590
1590 - 2612
2612 - 3862
3862 - 5282
5282 - 7152
7152 - 11568
0 1 2 3 km

Esta distribución residencial socio-racial también afecta, pero de otra manera, a las clases medias negras que residen en otras regiones urbanas de Cali, por lo general en barrios de clases medias con predominio de población blanca-mestiza. En los barrios de clases populares del oriente y la ladera de Cali se dan procesos de sociabilidad urbana y relaciones de parentesco entre la población negra y la blanca-mestiza que se caracterizan por mantenerse en un nivel horizontal, como lo mostró el estudio clásico de Olivier Barbary (2004). Por el contrario, las clases medias negras enfrentan otra escala de la segregación residencial socio-racial: en este caso son percibidos como residentes desagradables. Se trata del mismo fenómeno que los investigadores sobre las ciudades brasileras también han podido advertir -véanse en especial los diversos estudios de Edward Telles (1993, 1995 y 2006) y, más recientemente los del sociólogo brasilero D. S. d. N. França (2010, 2017 y 2018) para São Paulo. Hallazgos que coinciden con otros estudios sobre Cali, como los de Harvy Vivas (2013) y Vivas et al. (2017), y Carlos Viáfara et al. (2016), así como el excelente análisis de la segregación socio-racial residencial de las clases medias negras en Cali realizado por M. Pattillo et al. (2021); este fenómeno ha sido también descrito para Bogotá por S. F. Villamizar (2015).Estas dos condiciones de la distribución residencial (barrios populares segregados con mayor proporción población negra, por un lado, y barrios de clase media donde se ubican grupos emergentes de la población negra, por otro), han venido alimentando una creciente tensión racial a lo largo de los años.

El impacto de la pandemia en Cali

Un segundo factor a tener en cuenta es el impacto económico y social de la pandemia en Cali: reducción de los ingresos monetarios según canasta básica, incremento de la pobreza monetaria, aumento de la vulnerabilidad y abrupto retroceso de las condiciones de vida de aquella población, especialmente de aquella a

la que el DANE califica como clases medias. En términos porcentuales, se enfrentó una situación similar en otras ciudades colombianas (Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga), con incrementos altísimos de las tasas de desempleo. Por otra parte, una gran proporción de los hogares vulnerables y pobres, sumados a los que han caído en la extrema pobreza del oriente y ladera de la ciudad, han estado experimentando situaciones de hambre. Esta combinación del desplome de los ingresos monetarios en hogares con una estructura muy segregada a escala macro y meso incrementó ha debido contribuir al aumento de la rabia social colectiva.

Pero el efecto de la pandemia es más considerable si se tiene en cuenta que la mayor letalidad por su causa ha sido en los barrios populares del oriente y la ladera con alta concentración de gente negra, aunque también en sectores blancos-mestizos tan empobrecidos como los de la población afrodescendiente. Los barrios con las tasas de mayor mortalidad, entre marzo y agosto del año 2020, según lo ha mostrado un estudio reciente del CIDSE con el SISBEN (Urrea-Giraldo et al, 2021), coinciden con los sectores censales de mayor presencia de gente negra. En Cali, al igual que muestran las indagaciones hechas en países como Estados Unidos y Brasil, la población afrodescendiente enfrentó las tasas más altas en decesos por causa de la pandemia.

En ese sentido, por tanto, la pandemia no solamente conllevó caída de los ingresos por desempleo, sino que también la muerte de familiares cercanos impactó a estos hogares de las clases populares caleñas. A esto hay que añadir las menores oportunidades de atención hospitalaria durante la crisis respiratoria por la enfermedad del Covid-19 en el oriente y la ladera fueron vividas a partir de la experiencia de la dramática segregación residencial de los pobres en Cali, ya sean gente negra, indígena o blanca-mestiza.

De hecho, se observa que los barrios que han soportado los mayores niveles de contestación durante el paro han sido precisamente los más afectados por el Covid-19 en términos de las tasas de deceso. Muchos chicos y chicas de clases populares negros(as) y los de pieles oscuras mestizos y capas blancas pauperizadas han perdido a algún familiar (tíos, tías, madres, abuelas, etc. de 60 años y más).

El declive del Centro Democrático, el conflicto sobre el Acuerdo de Paz y la locura de una reforma ultraliberal

A los anteriores factores objetivos hay que añadir el desgaste de la institucionalidad a escala regional y local que había sido controlada o tenía alguna influencia del partido Centro Democrático hasta las elecciones presidenciales de 2018. Lo demuestra la derrota de Iván Duque en todos los municipios de la Cali y de la ciudad región ampliada, y en general también en casi todo el departamento del Cauca y el de Nariño. En el Valle del Cauca, solo los municipios del centro y del norte del departamento fueron más favorables a este partido político. En el sur del Valle y el norte del Cauca, incluyendo Buenaventura, ganaron alcaldes que estaban en oposición al Centro Democrático, aunque no necesariamente de la corriente de Gustavo Petro.

Otro factor, que está presente también en otros espacios urbanos en el país, ha sido la respuesta del establecimiento a los cuestionamientos que, durante estos años de Gobierno, le han planteado distintos sectores de oposición. Apoyada por el Centro Democrático y el alto mando militar y policial, así como por la misma figura mediocre del Presidente Duque, la respuesta ha sido una brutal represión policial. Esta represión ha venido acompañada de una narrativa que gira alrededor de la denuncia de la presencia de una mano internacional terrorista castro-chavista y venezolana interesada en subvertir el orden constitucional colombiano -expresión que ha llegado al colmo de la paranoia

con la intervención en inglés de Duque ante la comunidad internacional en la que acusa a la oposición petrista de fraguar un complot desde las calles con barricadas para derrocar a la administración actual, amén del discurso delirante de una supuesta "revolución molecular disipada" por parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Este discurso se articula con la narrativa previa del Centro Democrático contra el Acuerdo de Paz, la Comisión de la Verdad y la JEP, acusando a la administración del Presidente Santos de ser enemiga de la patria y aliada de las FARC y el castro-chavismo, según lo han machacado figuras reconocidas del Centro Democrático como la senadora María Fernanda Cabal y el mismo Uribe Vélez.

La combinación de todos estos factores habría llevado a una radicalización en Cali y otros municipios de la región metropolitana, como Buenaventura, que ya venían arrastrando un proceso de movilizaciones populares gigantescas durante los años 2017 y 2019.

Sin embargo, la "copa se rebosó" por la propuesta de reforma tributaria que, además de a las clases populares del oriente y la ladera, movilizó también a diferentes capas de las clases medias caleñas y de los demás municipios. Por supuesto, esto ha sido un factor común a todo el movimiento popular en el país. Las clases medias terminaron juntándose con las clases populares porque la reforma las golpeaba considerablemente. Esto ya se advertía en el paro de noviembre del 2019, pero no con la magnitud del actual. La radicación de la propuesta de reforma tributaria en el Congreso hizo evidente el carácter de clase ya que legislaba a favor de las elites financieras nacionales e internacionales a la hora de atender el futuro gasto social fiscal, así como para cubrir todo el faltante que había dejado la reforma tributaria anterior (2018-2019), con los beneficios otorgados a las grandes empresas y al capital financiero vía una fuerte reducción de los impuestos

en diversas modalidades, una reforma que también ya afectaba entonces a las clases medias.

Un boomerang que acelera el desprestigio del Centro Democrático y sus liderazgos

Lo paradójico en esta coyuntura es el *harakiri* que se ha venido haciendo el establecimiento por medio del paquete de reformas que impulsadas por la administración Duque y cuya epifanía ha sido la reforma tributaria. Es el único país de Latinoamérica con proyectos de reforma fiscal de semejante radicalidad neoliberal en medio de la peor crisis social y sanitaria del planeta en cien años. Los países que ya han hecho reformas tributarias en medio de la pandemia, como Argentina y Estados Unidos, se han basado en grabar a los grandes patrimonios y capitales, excluyendo a las clases medias y populares de mayores pagos de impuestos.

Aunque la administración Duque intenta ahora rehacer la propuesta, ya se habría enterrado la daga puesto que el movimiento popular ha ido más allá y está reclamando nuevas demandas que, cada vez más, llevan la coyuntura colombiana a tener algunas similitudes con la movilización popular chilena. Incluso los sectores de la elite más cercanos a las demandas sociales han comenzado a formular una nueva narrativa de la necesidad de un nuevo contrato social, como recientemente la ha formulado el rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, en entrevista a Noticias Caracol. En este discurso, las normas del equilibro fiscal son revaluadas a favor de un gran paquete de gasto social. Ya ningún empresario, ni siquiera los que antes alimentaban la propuesta de reforma tributaria anterior, se atreven a poner en duda la necesidad de realizar un mayor gasto en apoyo de los sectores más necesitados.

Componentes de la movilización: el papel de los jóvenes y la minga indígena

El levantamiento popular que se ha vivido en Cali es principalmente barrial y podría decirse que esto es común al conjunto de la región metropolitana y el suroccidente de Colombia, pero también a una ciudad como Bogotá y a otras ciudades del país. Aquí el papel de los jóvenes ha sido central. Pero también ha tenido su expresión en zonas rurales con sólidas organizaciones campesinas, indígenas y negras que, ubicadas en espacios veredales, han bloqueado vías importantes e incluso han acompañado las dinámicas urbanas, como es el caso de la experiencia de la Minga indígena en Cali.

Es evidente el componente juvenil de la movilización social, donde se observa la presencia de chicos y chicas menores de 25 años, desde los 14 años e incluso edades menores, procedentes de los barrios populares y de los de las clases medias bajas. Aunque es común a todo el país, el caso de la región metropolitana de Cali este elemento ha sido muy marcado. No puede desconocerse además que también ha habido muchos simpatizantes estudiantes de sectores medios acomodados de universidades privadas de Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades. Por supuesto, la participación amplia de estudiantes de la Universidad del Valle en los diferentes puntos de resistencia popular también hay que destacarlo, así como muy probablemente por parte de los de la Universidad Nacional de Colombia en Palmira.

¿Por qué la fuerte participación de los jóvenes de las clases populares? Mi hipótesis es que ellos se cuentan entre los más golpeados por todo el conjunto de factores objetivos y de coyuntura antes descritos: son las nuevas generaciones adolescentes y jóvenes de colores de piel más oscuros o menos claros, tanto chicos como chicas, en una amplia mayoría en condición de "ninis", que ni estudian ni trabajan, sin haber concluido sus estudios de bachillerato o con solo estudios de bachillerato, quienes han ex-

perimentado más directamente los efectos de una crisis económica, social y política agravada por la pandemia. Claro, primero se vieron afectadas sus familias y, con ellas, ellos mismos como hijos e hijas, nietos y nietas.

Además, si antes tenían una muy reducida opción de ganarse la vida y solamente les quedaba como alternativa para la generación de ingresos el recurso "fácil" a las actividades ilegales, con el efecto de una alta tasa de mortalidad masculina, es posible que en la coyuntura actual estas opciones también se hayan complicado. El desplome de todo el consumo y la depresión de ingresos y la brutal caída de la calidad de vida de clases medias bajas, medias medias e incluso medias altas, deprimió aún más el consumo para dar salida a las opciones más ilegales. La hambruna se ha generalizado y han sido muy limitadas las respuestas gubernamentales, tanto de la administración local como desde las políticas tacañas a la hora de ofrecer subsidios durante la gestión del Ministro Alberto Carrasquilla. Todo ello habría llevado a un proceso espontáneo de organización popular de barriada, con el recurso a los bloqueos. De ahí la marca étnica-racial de la movilización social popular en el oriente y la ladera de Cali.

Con respecto a los indígenas, quienes han tenido un papel destacado en la movilización caleña por intermedio de la Minga, hay que hacer una consideración inicial: ellos proceden de zonas que también confluyen en la región metropolitana.

La Minga llegó a desempeñar un papel muy especial durante las dos semanas iniciales de la movilización hasta que se retiró hacia el Departamento del Cauca. Los comuneros y comuneras de la guardia indígena acompañaron los diferentes puntos de bloqueos populares controlados por los jóvenes (chicos y chicas) de los barrios. Indiscutiblemente se convirtió en un referente muy importante para todas las galladas de jóvenes y, en tal sentido, se ganaron el respeto de la juventud y de los adultos de los barrios populares. En varios puntos de la ciudad operó como una espe-

cie de policía comunitaria con legitimidad ante el conjunto de la población, con excepción de sectores de los barrios de clases medias altas y clases altas, quienes a través de las redes sociales y en forma presencial manifestaron todo tipo de expresiones racistas; incluso, grupos armados de civiles dispararon en el sur de la ciudad contra la guardia indígena, ocasionando diez heridos de bala.

La guardia indígena, en coordinación con otros actores como la arquidiócesis de Cali, colaboró en la puesta en marcha y protección de varios de los corredores humanitarios destinados a permitir el ingreso de alimentos y medicamentos a la ciudad y, en determinado momento, para su transporte hasta la ciudad de Popayán. La presencia indígena en Cali tuvo amplia acogida, como se comprobó a través de los aplausos y rituales de despedida entre los combos de chicos y chicas y sus familias con los compañeros(as) indígenas. En cierto modo, la Minga selló una alianza entre clases populares urbanas y rurales étnicas en la gran región metropolitana.

Debe señalarse que en la movilización indígena también participaron miembros afrodescendientes de los consejos comunitarios del norte del Cauca, tanto mujeres como hombres, y algunos representantes de reservas campesinas de esa misma región. De ahí la importancia de la visible y masiva presencia indígena vehiculada y liderada a través del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca). Aunque participaron varios pueblos indígenas del Cauca, el mayor contingente provenía de los resguardos indígenas Nasa de los municipios del norte del Cauca (Corinto, Toribío, Jambaló, Caldono, Caloto, Santander de Quilichao y otros municipios). Por otro lado, en la composición etaria de la guardia indígena se contaba con una participación interesante de chicas y chicos indígenas, aunque no todos(as), en edades cercanas a los de los sitios de resistencia barrial en Cali.

En síntesis, esta movilización popular ha hecho visible el componente étnico-racial entre las clases populares urbanas y rurales en el conjunto de la gran región metropolitana, de alianza entre indígenas, negros, campesinos y capas populares de jóvenes caleños, en una buena parte negros(as), sobre todo en el oriente, pero también, mestizos y blancos pobres y de clases medias bajas. El principal aporte de la guardia indígena fue organización y disciplina colectiva en medio de la protesta popular.

Observaciones finales

Las movilizaciones populares en Cali y su gran región metropolitana no pueden ser explicadas por el fenómeno de los cultivos comerciales de coca y marihuana en el norte del Cauca y el municipio de Jamundí (así como en otras regiones andinas del Departamento del Cauca y en el Pacífico caucano). Por supuesto, la presencia de estos cultivos ha contribuido a deteriorar las organizaciones populares afro, indígenas y campesinas y constituir un factor de violencia homicida contra los líderes y lideresas indígenas, negras y campesinas. De esta ola homicida también ha sido responsable la minería legal de las grandes multinacionales y la ilegal, al igual que los sectores terratenientes. Se trata de acciones de grupos paramilitares que actúan en medio de la presencia de las fuerzas armadas y de policía y otros organismos del Estado. Precisamente, entre las varias demandas de la movilización indígena está la exigencia de la investigación y el desmonte de las estructuras narco-paramilitares.

A mi juicio es muy poco plausible que estas organizaciones hayan estado detrás de la movilización popular. En términos de cálculo político, económico y militar, sería para ellas una estupidez hacerlo porque pone dificultades para desarrollar su negocio. Mi hipótesis es, más bien, que esos sectores se oponen al movimiento social y por ello están a la espera de seguir con la saga de masacres y asesinatos individuales de los líderes sociales en

el Cauca y el Valle que han apoyado la protesta social. En este sentido, sus intereses de clase objetivos y subjetivos se acercan a los del establecimiento. Por lo mismo, acusar al movimiento indígena, y en concreto a la Minga, de recibir financiamiento de estas organizaciones es una "fake new" de parte de los organismos de seguridad del Estado. Tampoco hay pruebas fehacientes de que los y las jóvenes de los barrios populares y sus familias estén financiados y apoyados por estas organizaciones, ya que eso constituiría un contrasentido.

Referencias

Barbary, O. (2004). El componente socio-racial de la segregación residencial en Cali. En O. Barbary y F. Urrea (Eds) *Gente negra en Colombia. Dinámicas sociopolíticas en Cali y el Pacifico*. Medellín: Ediciones Lealon, Cidse/Univalle/Ird/Colciencias, pp. 157-194.

França, D. S. do N. (2010). *Raça, Classe e Segregação Residencial no Município de São Paulo. Universidade de São Paulo*. Dissertação para a obtenção do título de Mestre em Sociologia. https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8132/tde-28012011-122913/publico/2010_DaniloSalesdoNascimentoFranca.pdf

França, D. S. do N. (2017). Segregação racial em São Paulo: residências, redes pessoais e trajetórias urbanas de negros e brancos no século XXI. Doutorado. Universidade de São Paulo. https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8132/tde-07022

França, D. S. do. N. (2018). Desigualdades y segregación residencial por raza y clase. *Andamios* 15 (36): 163-195. https://doi.org/10.29092/uacm.v15i36.606

Galeano, J.; Urrea-Giraldo, F.; Caicedo, M.I. (2019). *Cali, ciudad región ampliada. Un territorio metropolitano.* Cali: Universidad del Valle/ Universidad San Buenaventura https://libros.univalle.edu.co/index.php/programaeditorial/catalog/book/399

Pattillo, M., Bermúdez, R. E., Mosquera, A. M. (2021). The Black Middle Class and Politics in Cali, Colombia. *Du Bois Review*: *Social Science Research on Race*.

Telles, E. (1993). *Cor da pele e segregação residencial no Brasil*. *Estudos Afro-Asiáticos* 24: 5-22.

Telles, E. (1995). Race, Class and Space in Brazilian Cities. *International Journal of Urban and Regional Research* 19 (3): 295-406.

Telles, E. (2006). *Race in Another America. The Significance of Skin Color in Brazil*. Princeton and Oxoford: Princeton University Press.

Urrea-Giraldo, F., Valoyes, V., Quiroz, L.G, Rodríguez-Mariaca, D.A., Otero, D., Romero, D.F., Guzmán, S. (2021). *Vulnerabilidad social en Cali y Covid-19*. Cali: SISBEN/Univalle-CIDSE/Fundación Univalle [en proceso de publicación].

Viáfara, C. A., Urrea-Giraldo, F., Vivas, H., Correa J. B., y Rodríguez, D. A. (2016). *Desigualdades étnico-raciales en las oportunidades de vida en Cali*. Cali: Cidse-Univalle/USAID.

Villamizar Santamaría, S. F. (2015). Desigualdades sociales, ¿inequidades espaciales? Análisis de la segregación sociorracial en Bogotá (2005-2011). *Revista Colombiana de Sociología* 38 (2): 67-92

Vivas, H. (2013). Persistencia de la segregación residencial y composición del capital humano por barrios en la ciudad de Cali. *Ensayos sobre Política Económica* 31(70): 123-155.

Vivas, H., Ipia-Astudillo, J., Rodríguez-Mariaca, D. (2020). Precios del suelo y accesibilidad a las centralidades de empleo en Cali: análisis exploratorio con información 2015-2017. *Estudios Gerenciales* 36 (155): 141-155.

LA SITUACION DEL PARO NACIONAL EN CALI
Intervención en foro programado por la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali

Álvaro Guzmán Barney[1]

El objetivo del presente texto es aclarar lo que está sucediendo en la ciudad de Cali y, desde mi perspectiva como sociólogo, describir y proponer explicaciones iniciales a un conjunto de acciones colectivas violentas en las que se encadenan y articulan distintos actores, motivos y formas de acción, que en su conjunto tienen consecuencias distintas para la ciudad. ¿Qué interpretación se le puede dar a lo que está ocurriendo?

El contexto general

Como punto de partida, considero que se deben tener en cuenta circunstancias que contextualizan lo que se ha vivido en la ciudad.

1.- En el plano internacional, pero especialmente en el latinoamericano, en Chile, Ecuador y Venezuela se han presentado eventos similares en los últimos tres años. En cada caso se hacen manifiestos nuevos repertorios y nuevos actores, especialmente de jóvenes, y presencia muy significativa de mujeres. Aparecen temas de estabilidad laboral, ambientales, derechos sexuales y

[1] Sociólogo, Doctor en Sociología. Profesor Jubilado del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle. El siguiente texto fue motivado por un conversatorio informal entre académicos convocado por Hernando Corral sobre la situación de Cali. Le agradezco la invitación a participar, así como sus comentarios y los muy reflexivos de Gonzalo Sánchez. El texto se presentó también en una reunión en la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali. Claro está, soy el único responsable de su contenido.

reproductivos. En general son reivindicaciones por la democratización de la sociedad.

En Chile, a raíz de un alza en el transporte público, se presentaron fuertes enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública. El gobierno del Presidente Piñera no insistió en la muy fuerte estrategia represiva, con la que inicialmente quiso enfrentar el conflicto, sin lograr solucionarlo. Optó por llamar a un cambio en la Constitución que regía desde la época de Pinochet. En Ecuador, en octubre de 2019, fueron los indígenas los que se opusieron a un decreto que eliminaba el subsidio a la gasolina. Hicieron movilizaciones, bloqueos y marchas indígenas muy significativos en los que se dieron también fuertes enfrentamientos con la fuerza pública. El Gobierno cedió, con la intermediación de Naciones Unidas, y puso en perspectiva el cambio de Gobierno, según el calendario electoral, lo que contribuyó a la solución del conflicto. Se hizo evidente la existencia de una sociedad polarizada y el papel significativo de los indígenas en el conflicto y en la solución del problema. En Venezuela, el descontento popular y generalizado con el Gobierno llevó a fuertes enfrentamientos en las calles. El régimen de Maduro se reafirmó, con el apoyo del Ejército, la Policía y las milicias civiles, armadas por el mismo régimen. En este caso, la represión violenta sobre la población reafirmó al régimen y mantuvo el problema latente hasta hoy, con una población empobrecida que ha optado por migrar del país. En Colombia, tenemos que evaluar entonces lo que está sucediendo, lo que está en juego, la manera como se expresa el conflicto, tanto desde los manifestantes como desde la respuesta del Gobierno y del Estado. En suma, sugiero tener en cuenta el contexto internacional de conflictos similares para entender nuestros propios problemas.

2.- En el caso colombiano es importante volver sobre las manifestaciones multitudinarias que se dieron en varias ciudades en noviembre de 2019. En ese momento se manifestaron temas y demandas similares de democratización en un repertorio agenciado también por jóvenes y mujeres. Pero la diferencia colombiana fué que, de nuevo, se reiteraban asuntos como los acuerdos de Paz incumplidos y la necesidad de avanzar en la convivencia pacífica, los problemas agrarios y campesinos de tierras y la educación superior gratuita.

En Cali, se llevó a cabo una multitudinaria manifestación que se concentró en el CAM: pacifica, entusiasmada por la música y las escenas de teatro callejero. La Policía hizo presencia, pero no intervino. Sin embargo, en horas de la tarde, cuando se dispersaban los manifestantes, se presentaron situaciones de vandalismo y saqueo. El Alcalde Armitage declaró el toque de queda. Durante las primeras horas de la noche desde las redes sociales se dijo que los vándalos se estaban tomando las unidades residenciales en distintos sectores de la ciudad, especialmente en el sur y se llamaba a los residentes a armarse y defenderse. La Policía con sus sirenas prendidas parecía desbordada en el patrullaje. Se presentó una situación de pánico en la ciudad, pero el hecho importante es que al día siguiente no se pudieron documentar los hechos multitudinarios de vandalismo e invasión de unidades residenciales. En el fondo se asistió a una realidad inventada en sus dimensiones por las redes sociales.

En suma, en noviembre de 2019 se hizo evidente una movilización ciudadana legítima que llevó al vandalismo, a la intervención de las redes fabricando falsas realidades y mostrando una reacción en principio armada desde el Estado y con la participación de civiles armados. El conflicto, que se presentó en otras ciudades con rasgos similares, no se canalizó adecuadamente por los gobiernos municipal, departamental o nacional en previsión de situaciones futuras. Se convocó a unas conversaciones sin consecuencias prácticas.

3.- En marzo del 2020 llega la pandemia del Covid-19 que nos afecta ya por 14 meses. En Colombia hay recesión económica, así como en Cali, aunque no tan acentuada como en otras ciudades y regiones. En la ciudad, según el Dane, la pobreza monetaria aumenta del 21.9% al 36.6% del 2019 al 2020. También se estima una reducción de la clase media del 22% que es importante detener ya que la movilización ciudadana incluye a los estratos medios. La pandemia misma no afecta tanto a Cali, como sucede con Bogotá, Medellín y Barranquilla, pero en los sectores populares de la ciudad hay oposición a la manera policiva como se quiere controlar el aislamiento de los ciudadanos. El Secretario de Seguridad de Cali parece más un agente de la Fiscalía que habla de comportamientos delictivos, que un estratega de la cultura ciudadana que busca fortalecer el aislamiento ciudadano. En el fondo, se considera que la pandemia se reproduce con más fuerza en los sectores populares y se requiriere de la fuerza y no del convencimiento para lograr el aislamiento.

En esta difícil situación nacional el Gobierno de manera inexplicable propone una reforma tributaria que recae especialmente en una clase media trabajadora y empobrecida, estratos 3, 4 y 5. Se convoca entonces a un Paro Nacional para el 28 de abril de 2021 que desencadena una serie hechos de conflicto hasta el día de hoy.

Aunque la situación en Cali ha sido particularmente grave y difícil, los hechos de violencia se han repetido en toda la geografía nacional, especialmente en las ciudades. Creo que estamos en presencia, por lo tanto, de un problema nacional, marcadamente urbano. Cali, sintetiza de manera pronunciada las contradicciones que se viven en otras regiones y ciudades del país.

4.- Los hechos de Colombia, han tenido reacciones en el nivel internacional, en organismos como la Naciones Unidas, en gobiernos como el del Presidente Biden, en manifestaciones ciu-

dadanas en Madrid, Londres, Paris, Bruselas, entre otros lugares y en los medios de comunicación más importantes de Europa y Norteamérica. En todos hay preocupación por la situación y un llamado al Gobierno colombiano para que no se exceda en el uso de la fuerza. Como ya dije, esto ha sido positivo, ya que los organismos de seguridad saben que también son vigilados y desarrollan con más cuidado sus tareas. Incluso en Cali se pudo mostrar, el 19 de mayo, día de paro, que podía haber manifestaciones pacíficas con un mínimo de vigilancia policial. Esto también se conoce internacionalmente.

Hay entonces un problema nacional en el que tienen protagonismo las ciudades, especialmente Cali. Pero sería muy importante hacer una diferenciación según situaciones regionales, en las que se articulan los problemas urbanos con los rurales, alrededor de una ciudad central. La región del suroccidente, con centro en Cali, es clave para entender el conflicto por el que se atraviesa. Su geografía más inmediata incluye un eje sur-norte desde Santander de Quilichao hasta Cartago y un eje este-oeste que parte de la vertiente occidental de la cordillera central, pasa por Cali y llega a la ciudad de Buenaventura en el Pacífico. Es una región de economías diversas y de poblaciones étnicas también distintas. Tiene una historia de conflicto armado y de violencia que hace presencia en los hechos de hoy. Importante el rol que han tenido los acuerdos de Paz, su carácter inconcluso o saboteado por diversas fuerzas. Esta problemática rural se superpone entonces en la región sur occidental con la que aparece en las ciudades del sur-occidente, especialmente en Cali.

En las ciudades y regiones aparecen combinados:

- Protestas y manifestaciones pacíficas.
- Vandalismo de diverso tipo.
- Presencia de barricadas en sectores estratégicos de las ciudades.
- Participación de sectores sociales diferenciados desde poblado-

res directos, que lideran y aquellos que se adecúan y padecen las barricadas y bloqueos.
- La intervención de las autoridades civiles del Estado, de las Fuerzas Armadas y de Policía que usan abiertamente una fuerza excesiva e ilegal, en algunos casos.
- La presencia de civiles armados, desde varios lados, que usan sus armas.

Se requiere, entonces, una interpretación de conjunto y de lo que sucede en Cali. Creo que los hechos se pueden explicar argumentando que hacen parte de una movilización social, agenciada especialmente por jóvenes, que cuestionan el orden social y político vigente de tiempo atrás y con un sentido de injusticia social, que se enfrentan a un gobierno que no les ofrece alternativas, por fuera del tratamiento policial y militar del conflicto, y que los considerara vándalos, delincuentes y terroristas, sin tener en cuenta las manifestaciones legítimas de descontento. En mi opinión, este movimiento viene conformándose desde hace varios años, se articula con unos acuerdos de paz que no se han asumido a cabalidad y han encontrado toda suerte de tropiezos por parte del Gobierno. Estos acuerdos reflejan el sentir de una gran parte de la Colombia rural que hoy se combinan con una agenda ampliada por los jóvenes de las ciudades, que tienen el 70% de la población colombiana, que viven el desempleo y la falta de educación y protestan por los asesinatos de líderes sociales, especialmente en las zonas rurales en las que ha prevalecido el conflicto armado. El tema de fondo en el conflicto social es la voz no escuchada por mucho tiempo de la Colombia rural, que ha vivido el conflicto armado combinada con la voz de nuevos sectores urbanos que se sienten excluidos por el orden social y político existente, representado por el Gobierno.

El caso de Cali y el sur-occidente colombiano

A continuación, me detengo en algunos aspectos que permiten entender, en mi consideración, por qué un problema nacional tiene rasgos más acentuados en Cali y en la Región del sur-occidente.

1.- La sociedad vallecaucana y caleña ha tenido una historia de "fragmentación", tanto por clase como por etnia. En términos de clase, la desigualdad es muy pronunciada y se reproduce en el tiempo. Se refleja en sectores opuestos, de poseedores y desposeídos, con poca movilidad ascendente entre ellos. Buena parte de la movilidad social, cuando se ha dado en las últimas décadas, ha sido agenciada por las economías ilegales y los grupos sociales que de allí emergen. Desde el punto de vista étnico, se ha formado también históricamente un sentido de superioridad de los sectores de población blanca sobre los sectores de población negra e indígena. Esto puede haber cambiado desde la Constitución del 91, pero muy lentamente. El racismo subsiste hoy. El hecho es que los sectores que sufren las consecuencias de la fragmentación étnica y de clase, han desarrollado un sentido de injusticia social que se consolida y aumenta en los sectores sociales subalternos, en oposición a los sectores privilegiados de la sociedad. Piden respeto, derechos e identidad. Cada vez organizan más y mejor sus reclamos ciudadanos que son justificados.

2.- La manera tradicional como se sostuvo el orden social y político en la ciudad y en la región fue la "hegemonía filantrópica". Esto significa que los sectores sociales empresariales, agrarios e industriales que detentaban el poder económico, se compenetraron con el funcionamiento del Estado y canalizaron parte de sus utilidades y esfuerzos personales a través de ONG´s, en beneficio de la ciudadanía. El gasto público se reflejaba en el progreso de la ciudad y su población. Esta forma de ejercer el poder

pudo sostenerse hasta la primera Alcaldía de Rodrigo Guerrero (1992-1994) con su Programa bandera Desepaz para la seguridad ciudadana. Pero se presentó una crisis en el establecimiento regional cuando se hizo evidente la vinculación del narcotráfico con la política desde 1994 (Proceso 8.000) hasta nuestros días. Durante este período hay diferentes momentos y no todos los actores tienen la misma responsabilidad, pero con el tiempo se entronizó un sentido para-mafioso de hacer política, de ganar las elecciones y de participar en utilidades a partir de la contratación pública y el acceso a la burocracia estatal. El impacto negativo del narcotráfico y del lavado de dinero ha sido muy grande en la economía y en la política y en la difusión del comportamiento mafioso, en la ciudad y en la región.

El trabajo de varios años que he realizado como analista de la violencia urbana y regional tiene su principal explicación en el narcotráfico y en la estructuración de un orden social "para-mafioso". ¿Cómo es posible que desde 1991 hasta 2021, es decir durante 30 años, Cali, el Valle del Cauca y el Norte del Cauca, tengan tasas de homicidio similares que, en promedio, están 25 puntos por encima de las tasas nacionales? En 2019, la tasa de homicidios para Cali fue de 49.7 x 100.000 habitantes, casi el doble de la nacional (25.1). En 30 años se ha tejido una sociedad para-mafiosa y armada, en los distintos sectores de la sociedad y en todos los niveles.

Es importante tener en cuenta que las élites regionales no son homogéneas y que una parte "civilista" ha tratado de recomponer su poder y papel en la sociedad, con una alternativa en la que participan de nuevo los sectores empresariales, jóvenes en algunos casos, que buscan una alternativa civilista para resolver los problemas desde el Estado. Pero lo cierto y verificable es que hasta el momento no han tenido éxito. No lo pudo hacer Rodrigo Guerrero en su segunda Alcaldía; parcialmente lo hizo Maurice Armitage quien manejó bien las finanzas municipales, invirtió

en educación y vinculó a sectores afros excluidos a la administración. El actual Alcalde, por segunda vez en el Gobierno municipal, tiene apoyo de sectores populares pero carga el *Inri* de la corrupción, ya desde su primera Alcaldía, con contrataciones en favor de sus familiares y amigos políticos. En síntesis, hay una acuerdo social y político muy débil sobre las reglas básicas para manejar el Estado local y regional. Que la hegemonía sea precaria y el poder esté disperso no hace sino incentivar el conflicto y la violencia. En síntesis, el acuerdo de dominación existente en la ciudad y en la región no contrarresta las dinámicas de violencia. Existen camarillas atadas fuertemente con el lucro en el funcionamiento del Estado y el gasto del presupuesto.

3.- Al lado de los factores anteriores que intervienen de manera estructural, es necesario hacer referencia al paro y a su expresión en las manifestaciones y barricadas en puntos estratégicos de la ciudad. Hay que comenzar hablando de los manifestantes. Es notable la participación de jóvenes y de mujeres. Provienen en lo fundamental de los barrios aledaños a los lugares de manifestación y bloqueo en los que han tenido experiencia de organización comunitaria barrial y juvenil, algunos con influencia religiosa o de Ong´s. Hacen presencia en las marchas y manifestaciones pacíficas y participan de las barricadas. Son sus actores principales. En medio de ellos se mueven organizaciones que tienen experiencia e intereses políticos definidos y hacen oposición al Gobierno, al Centro Democrático y al uribismo. Retoman banderas políticas de oposición y muestran organización y experiencia en su movilización. Participan también milicianos que pertenecen a organizaciones armadas como el ELN o las FARC residuales. No hay evidencia de que dominen y dirijan el grueso de las acciones. Participan también grupos de jóvenes vinculados con la criminalidad, las pandillas y el vandalismo. Hacen mucho daño en las estaciones de transporte público, pero no se pueden

confundir ni con el primero ni con el segundo grupo. No representan ni se deben identificar con la protesta juvenil.

Hay entonces una heterogeneidad de manifestantes que articulan el descontento y la oposición, al Gobierno, al Centro Democrático y al expresidente Uribe. Hacen oposición a lo que llaman el sistema "neo-liberal fascista". Estos grupos retoman y reivindican la voz y la manifestación de los sectores inconformes, tienen apoyo ciudadano en entornos amplios. Pero su estrategia de bloqueo a la movilidad también les genera oposición en los mismos sectores populares de donde provienen. En la confrontación se reviven los acuerdos de Paz a los que se ha opuesto el Gobierno y se amplía el espectro de demandas a temas propiamente urbanos de jóvenes.

Dada la polarización que se vive en la ciudad, tales manifestaciones y bloqueos se entienden, desde el lado del Gobierno y de su partido, como un proyecto "petrista", "castro-chavista", agenciado por la guerrilla, o como una nueva estrategia "molecular" del comunismo internacional para tomarse el poder con el "terrorismo".

4.- Es necesario referirse a las autoridades civiles. Se ha pedido el apoyo del Presidente en la ciudad. Pero su respuesta no ha sido clara durante sus pocas visitas, más allá de pedir que se levanten los bloqueos y se reactive la actividad económica. Se debe observar que el Presidente se encuentra en una situación de debilidad, ya que ha perdido apoyo desde su mismo partido que considera que ha hecho propuestas inoportunas que le han servido a la oposición "petrista" para posicionarse en las próximas elecciones.

La Gobernadora pide el apoyo del Gobierno nacional, pero no logra articular un planteamiento global regional para confrontar el problema. Tiene propuestas confusas como aquella de cerrar las fronteras del Departamento, cuando de lo que se trata

es de abrir la movilidad y reactivar la actividad económica con otros departamentos del país.

El Alcalde ha tenido intervenciones en las que indica que busca el diálogo y la concertación con los diferentes actores involucrados en los levantamientos, paros y bloqueos en la ciudad. Ha logrado acuerdos precarios y se debe reconocer que ha buscado mediar para que se levanten bloqueos, se facilite la movilidad de los alimentos y las medicinas lleguen a la ciudad. También se le debe reconocer que es el único que ha hablado de la presencia de "halcones de la muerte" en el conflicto, haciendo referencia a la intervención de civiles armados que disparan a manifestantes desde camionetas blancas blindadas, tal vez con el apoyo y/o conocimiento de la Policía. Pero, por otro lado, el Alcalde cuenta con muy poca credibilidad entre la ciudadanía por el manejo corrupto que ha hecho con el presupuesto público, asunto que tiene curso en la Fiscalía, desde su primera administración.

5.- Es necesario tener en cuenta la participación de los indígenas, organizados por el CR en una "minga". A diferencia de otras oportunidades, la "minga" no buscó una movilización en Cali para presentarle sus demandas al Gobierno central. Llegaron a la ciudad para participar en las manifestaciones, bloqueos y demandas del hubo junto con los pobladores, en distintos sectores de la ciudad. Se debe destacar que su intervención fue esencialmente pacífica, aunque coactiva con los ciudadanos que pedían la libre movilización. En el caso de la vía de Cali – Jamundí, que transité varias veces, optaron por bloquear la vía, pero posibilitando el tránsito en alguno de los sentidos durante una hora y cambiando sucesivamente el sentido. Hacía presencia la guardia indígena con sus bastones de mando, sin armas de fuego. En el caso del bloqueo que se hizo en la zona del Oeste de Cali, donde resido, los indígenas participaron abiertamente en el bloqueo, pero facilitaron la marcha de las "camisetas blancas", es decir

de los ciudadanos que pedían levantar el bloqueo y terminar con los enfrentamientos. Tampoco pude constatar que tuvieran armas de fuego. En mi opinión, el resultado de la interacción entre indígenas y los manifestantes de las "camisetas blancas" en el Oeste fue positivo. Se logró traer alguna normalidad al lugar y se facilitaron acuerdos precarios de movilidad, a diferencia de lo sucedido en Pance.

La Minga tuvo su lugar de concentración en la Universidad del Valle. Las Directivas universitarias actuaron correctamente al favorecer la llegada de la Minga a la Universidad ya que esto contribuía indudablemente a la distención del ambiente en la ciudad. Después de graves enfrentamientos entre la Minga y residentes del sector de Pance y Ciudad Jardín, en el sur de la ciudad, donde hubo distintos hechos de violencia, de parte y parte (hubo diez indígenas heridos), la Minga decide retirarse de la Universidad del Valle y de la ciudad.

Hay que preguntarse qué hay detrás del cambio de táctica de los indígenas al llegar a la ciudad para participar en las manifestaciones y bloqueos de sus habitantes. Hay que preguntarse también cuál ha sido su motivación y papel en la región, especialmente en el Norte del Cauca, con los bloqueos en la vía Panamericana en distintos lugares. La quema de cultivos de caña y las amenazas a los ingenios y empresas del Norte del Cauca son muy preocupantes. Las empresas han suspendido la producción por varios días. Ciertamente hay que tener en cuenta también las demandas de los indígenas de tiempo atrás, que tienen que ver con tierras y con los acuerdos a que han llegado y que han sido incumplidos por diferentes gobiernos. No se puede olvidar el asesinato de indígenas, líderes sociales y de Derechos Humanos sucedidos en el Norte del Cauca. Existen entonces justificaciones para la movilización indígena, pero no queda clara la agenda que manejan y son cuestionables algunas de sus acciones que contribuyen a una escalada de violencia que no se sabe las consecuencias que pueda tener.

Para algunos sectores de la elite caleña y del Gobierno nacional son los indígenas los causantes de los hechos de violencia que se viven y esto amerita, en su consideración, que las Fuerzas Armadas respondan con mano dura. Como en otros momentos, ésta es una consideración que ha dado lugar a la aparición del para-militarismo. En mi opinión, se ha hecho evidente el racismo anti-indígena en sectores de la sociedad caleña. Se requiere mostrar una cara de diálogo e inclusión. Son preocupantes algunas decisiones que ha tomado la Minga o mejor, que han sido agenciadas por indígenas, organizados o no por el CRIC. Se requiere desarrollar la estrategia del diálogo y los acuerdos con los indígenas. Por otro lado, más allá de la Minga y el CRIC, quien conozca la población indígena del Norte del Cauca, sabe que una proporción muy grande de ellos depende del trabajo en la zona, en y por fuera de los resguardos, y ha tenido que padecer, en esta oportunidad, la falta de ingresos, alimentos y medicinas.

6.- Militarización del orden público. Como se ha venido argumentando, hay protestas y manifestaciones de diverso tipo, algunas con violencia y otras pacíficas. En Colombia hay apoyo en la Constitución a la manifestación pública y pacífica. El problema es que en Cali ha sido evidente la presencia en las protestas y manifestaciones, de distintas formas de violencia con diverso origen y propias de un levantamiento urbano, desde las barricadas hasta la represión policial y militar. El tema grave es la aparición de civiles armados que han disparado desde los bandos enfrentados. Preocupa mucho la visión de ciertas élites que afirman que el Estado no está en capacidad de responder y llama a las armas en manos privadas. Sólo algunas voces han planteado que las armas deben ser monopolio del Estado y que éste sólo puede usarlas dentro de la ley, aunque esto no ha sucedido. En Cali, en medio de los enfrentamientos, policías han usado abiertamente armas letales contra los manifestantes. También policías, sin el unifor-

me, aparecen armados en las confrontaciones. Es muy probable, además, que apoyen a los civiles armados que actúan como para-militares urbanos.

El Gobierno ha decretado la "asistencia militar" para el control del orden público. Esto es un error desde el punto de vista de la función del Ejército en el control del orden público y la seguridad de los ciudadanos. Vale la pena destacar que las denuncias que se han hecho en los organismos internacionales han contribuido a que la Policía y el ESMAD controlen mejor sus acciones ilegales con las armas. Por su parte, paradójicamente, no se conocen desmanes abiertos e ilegales de los militares con las armas en el patrullaje urbano.

La legitimidad de la Policía en Cali es baja, tanto entre las élites que argumentan que no pueden confiar en su seguridad, como por parte de muchos pobladores que hacen referencia a una Policía corrupta en sus barrios, especialmente en relación con el micro-tráfico. En algunos sectores de la ciudad, la Policía no puede entrar. En los sectores populares, la policía tiende a argumentar, de tiempo atrás, una criminalización por principio de los jóvenes, pobres y negros.

¿Qué hacer?

He argumentado que estamos frente a una movilización nacional compleja que ha llevado en nuestra ciudad a un "caleñazo" que ya dura más de 25 días. Hay que ponerle toda la atención a su caracterización y coadyuvar a darle respuestas que permitan fortalecer el bienestar y la convivencia colectivas. En la confrontación se ha hecho evidente la polarización de la sociedad que enmarca y contribuye a la escalada de la violencia. Los polos que se oponen son el de los defensores de un modelo de crecimiento económico neo-liberal, excluyente y autoritario, y el de sectores sociales que buscan consolidar una nueva sociedad, apoyada en sectores rurales y urbanos, que han sido tradicionalmente exclui-

dos y que no expresan aún con claridad la forma de economía y sociedad que defienden. Buscan la democratización con una nueva agenda. Entre las opciones extremas, hay mucho campo para el cambio social con realismo.

En mi opinión se ha iniciado de manera violenta y precipitada el debate electoral que se avecina. Es importante que este debate se pueda dar en un ambiente de paz y que se puedan escuchar las distintas propuestas para sacar adelante la Nación, la Región y la Ciudad. Entre los polos, hay opciones civilistas y democráticas que pueden dar respuestas iniciales, desde ya, a las demandas de fondo de la presente coyuntura. Es necesario tener paciencia para que las demandas y las propuestas a los diferentes problemas se vienen decantando. Los siguientes temas ameritan atención:

1.- José Antonio Ocampo, destacado economista caleño, en una columna de opinión ha sintetizado propuestas realistas y prácticas sobre lo que puede ser una reforma tributaria que es necesaria, bajo el principio de que se grave, progresivamente, a quienes concentran la riqueza. También sobre lo que puede ser un ingreso mínimo subsidiado para quienes viven persistentemente en el desempleo y la pobreza y sobre mecanismos para incentivar la reactivación económica.

2.- En el nivel local o regional hay que ponerse del lado del diálogo entre los sectores tradicionalmente incomunicados para llegar a acuerdos, así sean inicialmente inestables entre las partes, de manera que se reduzcan los enfrentamientos y la violencia. También personas muy prestantes, como algunos embajadores, han valorado el papel del diálogo. Esto significa identificar a los actores y buscar puentes de comunicación entre ellos para lograr acuerdos. Hay que hacer compatibles, en el nivel local, el derecho a la protesta pacífica y la libertad de tránsito, al mismo tiempo. Esto es posible y la minga indígena lo demostró en la prác-

tica, a pesar de las barricadas, que son claramente una coacción y que tienen límites, como también parece que lo entendieron.

3.- Los bloqueos no pueden contribuir a empeorar la situación de empobrecimiento de la población. Este es un argumento muy fuerte, de carácter humano y fundado también en derechos, contra quienes persisten en los bloqueos, ellos mismos ciudadanos seguramente en situación de pobreza. Los bloqueos, en este sentido paradójico, son realizados por pobres contra los pobres, sin saber quién se beneficia.

4.- Hay que proponer el desarme de la sociedad y el uso de las armas estrictamente dentro de la legalidad, exclusivamente por las fuerzas armadas del Estado. Se deben condenar los excesos en que se incurrió con los manifestantes. También denunciar los asesinatos, de varios años atrás y desde varios lados, de defensores de Derechos Humanos, líderes comunitarios, reinsertados de las guerrillas, indígenas que han promovido la sustitución de cultivos ilícitos y de tantos colombianos que lo que desean hoy es que se recomponga la sociedad y el Estado para vivir en Paz y Convivencia.

DESDE EL EXTERIOR

LEJOS, PERO NO AUSENTES. MOVILIZACIONES DIASPÓRICAS EN EL PARO NACIONAL DEL 2021

María Gertrudis Roa[1]
Jan Grill[2]

Desde el 28 de abril de 2021, se ha presentado en Colombia una ola masiva de movilizaciones en el territorio nacional y, en algunos países del extranjero, se han visto acciones que expresan el descontento social frente al gobierno del presidente Iván Duque. La mayor parte de los análisis e informes sobre los hechos se centraron en una escala local, regional y nacional. Sin embargo, lo sucedido se ve moldeado por campos políticos transnacionales, a través de flujos y redes sociales que se extienden más allá de las fronteras del Estado-nación. Estos incluyen luchas para visibilizar los procesos de inconformismo social y la violencia a los públicos y redes internacionales. También se presentan los esfuerzos diplomáticos de las élites gobernantes para mantener cierta reputación y relaciones políticas con la comunidad internacional. El gobierno y el presidente vieron las movilizaciones internacionales y las críticas a las violencias como formas de desprestigiar la reputación del país en el exterior. El

[1] Socióloga, Doctora en Sociología. Profesora del Departamento de Ciencias Sociales y miembro del grupo de investigación Sociedad, Historia y Cultura, adscrito al Centro de Investigación y Documentación Socioeconómica (CIDSE) de la Universidad del Valle.

[2] Antropólogo, Doctor en Antropología Social. Profesor del Departamento de Ciencias Sociales e integrante del grupo de investigación Estudios étnico-raciales y del trabajo en sus diversos componentes sociales vinculado al Centro de Investigación y Documentación Socioeconómica (CIDSE) de la Universidad del Valle.

papel de la organización internacional ha sido fundamental para intervenir y contener mayores niveles de violencia. Sin embargo, poco se sabe sobre el papel de los actores y redes transnacionales que conectan a Colombia con otros espacios y sitios de disputas y protestas políticas.

En apoyo y respuesta a los eventos y movilizaciones del paro nacional, grupos de personas en el extranjero organizaron diferentes tipos de repertorios de acción que incluían marchas y otros eventos para protestar y expresar formas de rechazo a las situaciones que están acaeciendo en Colombia. Teniendo en cuenta lo anterior, surgen un conjunto de interrogantes sobre este tipo de movilizaciones: ¿Dónde se han presentado los hechos? ¿Quiénes son los manifestantes y organizadores? ¿Qué están expresando con sus repertorios de acción? ¿Qué están buscando con estas movilizaciones? ¿Cuáles son sus estrategias, expresiones, mensajes e instrumentos que despliegan en sus acciones colectivas? Responder estos interrogantes ha sido el interés de este trabajo.

Este capítulo tiene por objetivo complementar el análisis emergente de las movilizaciones realizadas en el marco del Paro Nacional 2021 al poner la atención en el papel de la "política diaspórica" y observar diferentes movilizaciones como expresiones y acciones políticas organizadas en diferentes lugares del mundo. Estas acciones involucran diversos actores, redes sociales, formas de interacción que son moldeadas por los campos sociales y los contextos donde se realizan.

Se trata de un estudio exploratorio que esboza algunas descripciones de las movilizaciones y aporta reflexiones preliminares sobre el papel que ha cumplido la diáspora colombiana en el Paro Nacional del 2021.[3] Para esta exploración se planteó como estrategia metodológica el diseño documental y el diseño etno-

[3] Debido a la naturaleza exploratoria de este texto y su enfoque metodológico, no fue nuestro interés y no hemos podido mapear y detallar todas las movilizaciones en diferentes partes del mundo. Además, debido a las dinámicas y desarrollos rápidamente cambiantes de los eventos a lo largo del tiempo, nuestro enfoque se ha centrado principalmente en el período comprendido entre 28 de abril y el 28 de mayo del 2021.

gráfico (en redes sociales y plataformas digitales) con el uso de la técnica de entrevista aplicada a algunas personas que participaron en las movilizaciones como fuente de información primaria. En el proceso de revisión documental se comenzó con los periódicos de las ciudades que han tenido el mayor número de manifestantes como el *New York Times*, *Le Monde*, *La Vanguardia*, entre otros. Sin embargo, la búsqueda fue infructuosa porque se encontró información muy limitada sobre lo acontecido en Colombia, pero no había información de las movilizaciones en el extranjero. Se hizo revisión de la prensa nacional como *El Tiempo*, *El País*, entre otros, que arrojó información fotográfica limitada. Producto de las entrevistas se rastreó la información proveniente de las redes sociales. Se estudiaron múltiples páginas web principalmente blog de activistas, perfiles grupales en Facebook y Twitter que agrupan comunidades de colombianos (tales como 'Colombianos en país XY' o 'Colombianos en X ciudad' o hashtags como #SOSCOLOMBIA y sus variaciones en diferentes lugares y espacios) y allí se encontró información relevante de apoyo al Paro Nacional.[4]

Las entrevistas fueron realizadas por WhatsApp, Meet y en algunos casos se enviaron las preguntas por correo y sus respuestas fueron devueltas por miembros de la diáspora colombiana, predominantemente jóvenes estudiantes de posgrado que están radicados en el extranjero.[5] Es importante destacar que este es un trabajo exploratorio en tiempo simultáneo a la ocurrencia de los

[4] Nuestra estrategia metodológica también se ha inspirado en lo que Bonilla y Rosa (2015) denominan 'etnografía de hashtag' en su trabajo sobre el activismo en las redes sociales y su papel en la documentación de episodios de violencia policial en Estados Unidos que pueden forjar cierta temporalidad política compartida y cuestionar las representaciones producidas por los medios de comunicación dominantes. Además, en su estudio que examina la lógica de la agregación nueva en la organización de Occupy movements, Jeffrey Juris (2012) muestra la importancia de las redes sociales digitales para reunir a diversos grupos de personas en los espacios públicos.

[5] Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos/as nuestros/as interlocutores/as en el exterior que compartieron con nosotros sus experiencias y observaciones durante las entrevistas e intercambios escritos a través de correos electrónicos, conversaciones de WhatsApps y en otras redes sociales.

hechos y, por lo tanto, no recoge sistemática y exhaustivamente la participación de la diáspora colombiana porque los eventos se presentan atomizados en una multiplicidad de lugares que reflejan la forma cómo se dispersan los colombianos en el ancho mundo. La historia de este proceso se construye día a día.

Aparición de movilizaciones en el extranjero

Saskia Sassen en *Una sociología de la globalización* plantea que la globalización y las nuevas tecnologías de información posibilitan la emergencia de la participación política de actores políticos locales que se pueden visibilizar a nivel internacional. En este mismo sentido, los colectivos de migrantes, en diferentes ciudades del mundo ejercen presión sobre gobiernos locales. Sassen plantea que "los actores extra estatales pueden ingresar y cobrar visibilidad en los fueros internacionales o en la política global que tienen implicaciones a nivel global como individuos y como comunidades y, por lo tanto, salir de la invisibilidad a la que los condenaba la pertenencia al Estado-nación representado de manera exclusiva por el poder soberano" (2007: 235). Esto efectivamente es lo que está sucediendo en Colombia y nos permite considerar algunas dimensiones de la política en un espacio transnacional de diáspora.

El día del inicio del Paro Nacional (28 de abril), en latitudes como Madrid, Berlín, Minnesota, Melbourne, entre otros, se presentaron manifestaciones de apoyo y solidaridad. Estos eventos fueron realizados por migrantes colombianos y algunos simpatizantes nacionales que apoyaron el Paro Nacional. Estas movilizaciones de colombianos en el extranjero para protestar por la situación del país no son nuevas. Desde el 2019 (y en algunos casos incluso antes) ya se habían presentado movilizaciones desde el extranjero. Varios entrevistados manifestaron que el 21 de noviembre de 2019 hubo grandes concentraciones en algunas ciudades como París y Nueva York. Muchas de estas redes en el

exterior han sido muy críticas con el desarrollo político y social bajo el actual gobierno y con el presidente Duque. Sin embargo, lo nuevo de este fenómeno es la envergadura de las protestas por la multiplicidad de ciudades implicadas y la heterogeneidad de los actores que han participado.

El despliegue de violencia de la fuerza pública en el territorio colombiano, que comenzó el 28 de abril y se ha incrementado en una espiral de terror para acallar a los manifestantes y suprimir las manifestaciones, ha generado repudio en el mundo entero. De inmediato se presentaron pronunciamientos de los grandes organismos internacionales como Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Unión Europea, Gobierno de Estados Unidos, OEA, que pidieron la investigación de los casos de abuso de la fuerza y el cese del vandalismo.

Pese a la importancia y la capacidad de presión de las grandes organizaciones internacionales que piden el cese de la violencia, llama la atención la emergencia de multitudinarias manifestaciones realizadas en las principales ciudades del mundo denunciando repudiando los acontecimientos en Colombia, bajo el eslogan SOS COLOMBIA o SOS CALI, con la polisemia de ayuda al país y de sentido de pertenencia[6].

Movilizaciones en ultramar

Las manifestaciones estallaron en diferentes ciudades del mundo para rechazar la violencia desplegada por el Estado para acallar a los inconformes. Los acontecimientos posteriores a la caída de la reforma tributaria y el despliegue de la fuerza sobre la población civil generaron un efecto dominó que ha revelado el desespero exacerbado por el confinamiento de una población excluida desde hace muchas décadas. Por esto, los pronunciamien-

[6] Los migrantes colombianos mantienen lazos vivos con su país, principalmente con sus parientes y amigos. La mejor expresión de esto son los vínculos de obligatoriedad mediante el envío de las remesas, ya que los hogares colombianos presentan una alta dependencia de los dineros que envían los migrantes, fruto de su trabajo en el extranjero.

tos van más allá de los reclamos que suscitaron el Paro Nacional como la reforma tributaria. Los manifestantes en diferentes lugares del mundo esgrimen carteles que califican de inepta la gestión del presidente Iván Duque, la corrupción, la violación de los acuerdos de paz, los falsos positivos, la ausencia de equidad y la impunidad en el país. Justamente esta falta de equidad social estructural y la violencia de diversa índole fueron las causas de la tercera ola migratoria, que salió a principios del 2000 en busca de las oportunidades que el país no les pudo brindar.

Es el caso de Catalina Cruz que representa al Distrito 39 en la Asamblea del Estado de New York[7] y fue una de las gestoras de las marchas en esta ciudad. En una declaración a CNN-ESPAÑOL dijo: "En los años 1980 y 1990, cuando estaban matando nuestra familia, no teníamos Internet, no teníamos todo esto para luchar. Aquí estamos para decir que no vamos a permitir que maten a nuestra familia en impunidad sea el que sea, no lo vamos a permitir". En sus redes sociales reivindica el derecho de los migrantes a intervenir en la realidad nacional y brindar respaldo desde el extranjero.

Las protestas en diferentes países hacen un llamado a la comunidad internacional para que se establezca un diálogo y se busquen soluciones a la crisis para un mejor futuro a la generación de cristal.

A partir del 8 de mayo, una nueva oleada de protestas se extiende en el mundo y abarcan un número importante de ciudades en diferentes continentes. La evidencia recolectada reveló que hay movilizaciones que comenzaron desde el paro y se mantienen a lo largo del paro, otras que son periódicas (por ejemplo, todos los sábados o domingos) y otras formas de protesta que han sido esporádicas. Los puntos de concentración son principalmente los consulados de Colombia, espacios turísticos y sitios emblemáticos. En algunas ciudades las manifestaciones se realizan frente a

[7] El Distrito 39 incluye la zona de Jackson Heights que más concentra colombianos en New York.

los edificios de las organizaciones internacionales, que hacen veeduría de los derechos humanos como Naciones Unidas (caso de Nueva York y Ginebra).

Los principales organizadores de las marchas son agrupaciones de colombianos conformadas por estudiantes y activistas sociales nativos, como los chalecos amarillos de Paris y otros colectivos de inmigrantes como los palestinos, que están padeciendo situaciones de violencia. Las manifestaciones se caracterizan por alzar las banderas y vestir camisetas de la Selección Colombia. Usualmente los manifestantes llevan carteles en español y en el idioma nativo. Un ejemplo fueron los carteles en Miami: "The Government is stealing from us. Duque is not my president", "SOS COLOMBIA", "Las gotas de sangre en Colombia están salpicando a todo el mundo". "SOS Colombia. Nos están matando". Las concentraciones se caracterizan por estar amenizadas por música folklórica colombiana del Caribe, salsa y cumbia, con letras alusivas al Paro Nacional. En este sentido, las marchas internacionales tienden a reproducir el mismo esquema que las nacionales con el despliegue de la bandera colombiana al revés. En algunas protestas, las banderas también fueron resignificadas con imágenes de gotas de sangre.

Las movilizaciones se concentraron en denunciar la violencia excesiva dirigida a los manifestantes en Colombia y el apoyo al Paro Nacional con el eslogan de RESISTENCIA. Un mensaje en Instagram de un migrante colombiano en Estados Unidos dice: "Gracias a los medios que apoyaron esta linda causa. HOY LOGRAMOS que el mundo se entere de que COLOMBIA NE-

CESITA AYUDA. Los amo compatriotas. Sin ustedes no hubiera pasado esto. COLOMBIANOS UNIDOS".

Se destaca el papel que han jugado las redes sociales como Facebook para la creación de comunidades de colombianos, Twitter y otros, que han sido utilizadas en el Paro Nacional de varias maneras. En primer lugar, las redes se utilizan para difundir las convocatorias a las movilizaciones. En segundo lugar, difunden información de manera simultánea de lo acontecido en los bloqueos y los enfrentamientos. En estas páginas se muestran de forma simultánea con múltiples ventanas lo que está pasando en varias ciudades de Colombia como Cali, Bogotá, Buenaventura, etc. Esto quiere decir que una persona en Berlín puede ver lo que está pasando en Puerto Resistencia de Cali. En tercer lugar, se tiene acceso a información actualizada y se utilizan fuentes como Indepaz y Temblores, ONG que se divulga en las redes. Esto es importante porque ante los hechos se ha querido censurar su difusión mediante la interrupción de las señales de internet, celulares y los canales internacionales de Colombia han estado fuera de línea, tal como manifestó un colombiano en Estados Unidos, que no pudo acceder a los noticieros de Colombia para informarse. Por último, está siendo un espacio de debate entre los connacionales que se ubican en orillas opuestas en este conflicto. Es decir, estas páginas ayudan a crear opinión pública en la diáspora. La información que circula a través de estas páginas, plataformas y redes también puede permitir espacios alternativos para disputar la información oficial presentada por los representantes del Estado colombiano y los principales medios de comunicación. Facilitan una imaginación diferente de lo que está sucediendo que a menudo difiere de los discursos oficiales (cf. Bonilla y Rosa 2015). A continuación, se presentan algunas descripciones de las protestas por algunos países.

Fuente: Facebook. Colombianos en Miami.

Fuente: Forbes.co/2021/05/07/actualidad/miles-de-colombianos-protestaron-en-time-square-en-nueva-york/

En los Estados Unidos, principal destino de los colombianos, estallan protestas en Miami, Lauderdale, Nueva York, Washington, Minnesota y otras ciudades de los Estados Unidos. Estas movilizaciones están lideradas por organizaciones de colombianos que se convocan a través de las redes como Colombianos en Nueva York, Colombianos en Estados Unidos, etc. Las movilizaciones se han concentrado en denunciar el abuso militar y pedir que cese la ayuda militar de los Estados Unidos a Colombia. En las manifestaciones hay vallenatos y salsa. Las manifestaciones más grandes han sido en Nueva York y se han concentrado en el Consulado, la sede de Naciones Unidas y Time Square en Manhattan.

En los videos de las redes sociales se destaca que los manifestantes enarbolan banderas por la dignidad y esgrimen la empatía que les genera el sufrimiento de los colombianos que han crecido en la pobreza y la violencia. Un ejemplo es el cartel "Vivir en USA no nos hace indiferentes. Estamos con ustedes". Jessica Ramos, senadora de Nueva York ha acompañado las marchas por la ciudad de Nueva York y en sus declaraciones plantea la importancia de que los hechos no queden impunes.

El segundo lugar de destino de los colombianos en el extranjero es España. Desde el inicio del paro (28 de abril) se presentaron manifestaciones de protesta multitudinarias en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Valencia, Oviedo, Las Palmas de Gran Canaria, entre otras ciudades. Se encontró evidencia también de protestas en pequeños pueblos.

Como los colombianos residentes en España se concentran en Madrid y Barcelona, las manifestaciones en estas ciudades han sido significativas. Estas concentraciones se hacen frente a la Embajada y el Consulado, en sitios emblemáticos como la Puerta de Alcalá y la Plaza de la Estatua del Oso y el Madroño, entre otros. La mayor parte de los manifestantes son colombianos y una parte de nativos simpatizantes con Colombia.

Fuente: https://www.facebook.com/colombianosporespana
https://www.facebook.com/colombianoscanarias

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=bebwu63S-rw

El "Manifiesto del colectivo de colombianos unidos en Madrid" parte de reconocer las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos en Colombia y afirma que "desde el exterior nos unimos al clamor de las exigencias sociales en Colombia porque el gobierno detenga inmediatamente el tratamiento de guerra a cualquier expresión civil de inconformismo social, detenga el baño de sangre y la violación sistemática de derechos humanos por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado". En este manifiesto se incluyen múltiples aspectos como la implementación del acuerdo de paz, equidad en nuevos proyectos de Reforma tributaria, salud, mayores políticas de seguridad social, mayor cobertura de las pensiones, no fracking, implementación del Acuerdo de Escazú, la Renta Básica, la seguridad alimentaria, matrícula cero, entre otros. Entre estos se incluye una convocatoria anticipada a elecciones presidenciales.

En España las movilizaciones han incluido diferentes tipos de repertorios de acción como marchas, performances, velatones y cacerolazos. Igualmente, los colombianos están movilizándose para ejercer el derecho al voto desde el extranjero con el argumento de "No vamos a permitir que nos roben las elecciones. Si los jóvenes luchan por nosotros, nosotros tenemos que sacar la cara por ellos. A inscribir cédulas". Aquí también se presentan actos folclóricos de Colombia y otro tipo de eventos artísticos.

Las movilizaciones que se suman al Paro Nacional en Francia han sido persistentes desde el 28 de abril e involucran un conjunto de ciudades como París, Niza, Rennes, Lille, Perpignan. Las manifestaciones en París se han hecho delante de la Embajada de Colombia y en el Consulado; las concentraciones se realizan en la Plaza de la República, la Plaza de la Bastilla y los alrededores de la Torre Eiffel. Diana, estudiante de doctorado en París, afirma que "en el caso de París, las actividades han sido movilizadas básicamente por los estudiantes y los exiliados que residen en Francia. Una buena parte de estas actividades han sido organi-

zadas por el colectivo de la Colombia Humana en Francia". Las movilizaciones han contado con el apoyo de los chalecos amarillos con pancartas "Solidarité avec les colombiens" Todas las actividades han sido convocadas por las redes sociales.

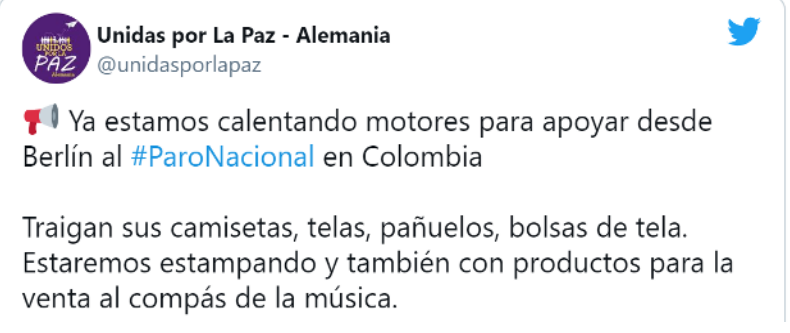
Se combinan marchas, plantones, actividades culturales como una obra en el Teatro Odeón promovido por estudiantes de arte, fundamentalmente para denunciar la represión policial. En estas movilizaciones se usan pancartas, afiches, pendones, representaciones artísticas, musicales, culturales, arengas, etc. El colectivo de la Colombia Humana está promoviendo la conformación de asambleas de paro en Francia. Se destaca que en Francia, al igual que España, las peticiones tienen un mayor alcance y presentan como ejes centrales el respeto por los derechos humanos. Por un lado, se exige el cumplimento de los acuerdos del Proceso de Paz y el cese de los asesinatos de los líderes sociales. Y po el otro, se denuncian los aspectos que generaron el Paro Nacional como la reforma tributaria, la reforma a la salud, la reforma educativa, reforma a las pensiones, etc. Las entrevistas revelaron que los simpatizantes del paro en París han realizado colectas de dinero que se ha enviado a los colectivos que organizan el Paro.

Las manifestaciones de apoyo al Paro Nacional en Alemania se han presentado en diferentes ciudades como Berlín, Munich, Köln y Frankfurt, entre otras. Estas movilizaciones han sido promovidas por estudiantes, académicos, activistas defensores de derechos humanos. Sara, una activista manifestó que este proceso ha sido muy bonito por "la invitación a organizarse alrededor de la hermandad, de la solidaridad y del llamado a la dignidad y la justicia social". […] Se menciona a "las fuerzas militares o policiales como hermanos que no deben estar en disputa con otros colombianos". […]. El llamado "a reconocernos y abordar el conflicto desde las similitudes". Ha sido más una invitación a la reconciliación.

Fuente: https://www.pulzo.com/mundo/chalecos-amarillos-paris-francia-marcharon-solidaridad-con-colombia-PP1049961

https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/protestas-en-colombia-colombianos-en-francia-protestan-contra-el-genocidio-en-su-pais-paris-paro-nacional-reforma-tributaria-noticia/

Fuente: Fotos suministradas por el entrevistado en Frankfurt.



Fuente: Convocatoria del grupo Unidas por la Paz por Twitter. Berlin.

Jaime, un estudiante de doctorado en Frankfurt, cuenta que "empezamos el 4 de mayo a realizar plantones en las diferentes plazas de la ciudad. Estos fueron diarios, de 4:00 a 8:00 pm las primeras dos semanas. El último que tuvimos fue el sábado 22 de mayo. Hemos tenido discursos en español y en alemán, lo que hacemos es pintar murales en cartón, tela o cualquier material que permita escribir o representar un mensaje. También ha habido música y composiciones de colombianos/as que se inspiran en la dinámica del paro en el país. Ha habido baile, por supuesto". Se comenzó con un grupo de treinta personas, pero con los días se fueron aumentando a casi cien en las movilizaciones. Una práctica que se destaca en cada jornada es la lectura de los nombres de las personas asesinadas durante las manifestaciones en el país. Luego se replica "no está. Lo asesinó la Policía Nacional".

En el caso de Inglaterra, el mayor número de concentraciones se ha dado en Londres pero también en ciudades como Bristol, Cambridge y Manchester, entre otras. Las manifestaciones en Londres están organizadas por estudiantes, refugiados políticos colombianos, algunos colectivos de inmigrantes que se organizan a través de los grupos de WhatsApp, Instagram y Telegram. Desde la academia se generó una moción para pedir al gobierno británico que interceda en Colombia para que se garantice el derecho a la protesta y que se investiguen los hechos ocurridos. En relación con los plantones en la Embajada, se ha cuestionado su efectividad porque se considera que los consulados son pro-gobierno. En Londres los manifestantes se han aglutinado en la Plaza Trafalgar de amplia visibilidad. Sin embargo, dicha visibilidad se ha comprometido por el conflicto en Palestina que ha desviado la atención, según un entrevistado. El mayor trabajo político y pedagógico se realiza desde las redes que hacen traducción simultánea frente a lo que está pasando en Colombia.

En el resto de Europa se registraron movilizaciones en Suiza (Ginebra), Bélgica, Suecia, Italia y Rusia.

https://www.lavanguardia.com/participacion/lectores-corresponsales/20210506/7433186/protesta-colombiana-llega-trafalgar-square.html#foto-2

https://www.elheraldo.co/colombia/colombianos-radicados-en-el-extranjero-se-unieron-la-protesta-contra-la-reforma-tributaria

Evento de Paola Jaimes Santamaría, Laura Avalos y Laura Fernanda

Parliament Hl, Ottawa, ON K1A, Canada

Viernes, 28 de mayo de 2021 a las 16:00 UTC-05
14 °C Mayormente nublado

Precio, gratuito

Público · Cualquiera dentro y fuera de Facebook

(Message in English follows)

Este viernes 28 de mayo se cumple un mes de la reactivación del Paro Nacional. Ese día se llevará a cabo una movilización masiva en Colombia. L@s colombian@s en Ottawa y Gatineau también queremos tomar partida y una vez más mostrar nuestro apoyo y solidaridad con tod@s los jóvenes, indígenas, afros y personas en general que se movilizan y que han llevado a cabo grandes cambios con su participación y resistencia en el Paro Nacional. Vamos a conmemorar a las víctimas de desaparición forzada, de homicidio, abuso sexual y violencia física por parte de la fuerza pública. A un mes de grandes movilizaciones y un abuso policial sin precedentes, el gobierno colombiano se niega a escuchar las demandas del Paro Nacional y a recibir una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en territorio nacional.

Esta es una invitación abierta a todas las expresiones artísticas y discursos. Es momento de estar unid@s en apoyo a la Paz y al respeto de los derechos humanos en Colombia.

¡A parar para avanzar, Viva el Paro Nacional!

En Canadá se han presentado manifestaciones de apoyo al Paro Nacional y marchas que se registran en los primeros días del paro en solidaridad con las víctimas de la población civil que padecieron el abuso policial. Se han presentado movilizaciones en Ottawa, Gatineau y otras ciudades. Se adjunta la convocatoria de la comunidad de "Colombianos en Canadá".

En el caso de América Latina se destaca la movilización de colombianos en Chile, especialmente en ciudades como Santiago y Antofagasta. Estas manifestaciones han estado moldeadas por los toques de queda por la pandemia y tienen un entorno de desconfianza por la xenofobia. Las manifestaciones son convocadas a través de las comunidades de Facebook y aglutinan trabajadores colombianos que proceden principalmente del Valle del Cauca. En los actos se reúnen unas 200 personas.

Las protestas se presentaron días después de iniciado el Paro Nacional y fueron una reacción a la violencia acontecida en Colombia y a la necesidad de investigar los hechos. Las movilizaciones han tenido como punto de encuentro el Consulado y la plaza Sotomayor y se caracterizan por ser concentraciones en horas de la noche o velatones. Las velatones se realizan para denunciar los asesinatos de los jóvenes en Colombia y el dolor que generan sus muertes. Igualmente es un acto de solidaridad con la población civil que está desarmada. Se escucha música colombiana, salsa choque y otros. Un hecho que ha limitado los repertorios tiene que ver con que el 7 de mayo amaneció pintada un ancla emblemática de la ciudad con la bandera de Colombia. Esta situación generó bastante malestar y sólo en horas de la no-

che un grupo de chilenos se atribuyeron el hecho, como un acto de solidaridad con Colombia.

Laura cuenta que "acá no se ha hecho un apoyo al Paro. Aquí se ha hecho es un apoyo con la población que está allá sufriendo la violencia venga de donde venga". Las movilizaciones quieren que el país mejore para que la gente no tenga necesidad de migrar.

En América Latina se han presentado manifestaciones en México, Panamá, Argentina, entre otros países, que sería importante estudiar con más detalle en adelante. Igualmente se encuentra evidencia de manifestaciones en otros países, Australia (Sídney y Melbourne, entre otras ciudades) y Nueva Zelanda.

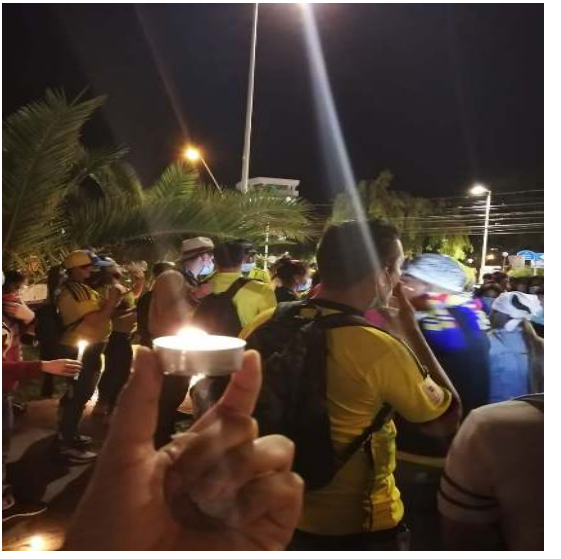
En síntesis, teniendo en cuenta la diversidad de actores, la pluralidad de lugares y repertorios de acción es necesario aventurarse a una posible identificación de los actores que participaron en estas protestas y expresiones. Se pueden dividir en cuatro tipos de actores:

1) Actores académicos y altamente educados en su mayoría estudiantes e investigadores, que incluyen nacionales colombianos o no colombianos.

2) Diversos grupos de migrantes colombianos con diferentes trayectorias migratorias y estatus sociales.

3) Aliados políticos que se vieron impulsados a acompañar estos eventos por razones personales o políticas (por ejemplo, solidaridades transnacionales).

4) El papel de las organizaciones que organizan las movilizaciones no necesariamente están convocadas por "colombianos" residentes en el exterior exclusivamente. De hecho, estas redes pueden incluir diferentes aliados, colegas, amigos y familiares transnacionales y locales que no necesariamente están delimitados por su nacionalidad, sino por sus deseos de expresar ciertas visiones y posiciones sobre la situación actual en Colombia (por ejemplo, periodistas, académicos, activistas, entre otros).



Fuente: Archivo personal de VG.

https://www.meganoticias.cl/nacional/335915-ancla-antofagasta-pintada-colombia-rex10.html

Se destacan diferencias entre las intensidades y formas de compromiso en relación con tiempo de residencia en el exterior, sus conocimientos y redes sociales en Colombia, pero también de clase social y raza.[8]

Las concentraciones se aglutinan en lugares de importancia política y simbólica. En primer lugar, aparecen los lugares en que el Gobierno Colombiano hace presencia en el extranjero como las embajadas y los consulados. En segundo lugar, se concentran en lugares emblemáticos de la ciudad como lugares turísticos, plazas públicas, sitios históricos que recuerdan las luchas por la libertad y la equidad. En estos lugares se busca que haya visibilidad internacional del conflicto en Colombia y se llama a la mediación de la comunidad internacional para que interceda por el pueblo colombiano en la búsqueda de contener la violencia estatal y paraestatal. En tercer lugar, las movilizaciones también se realizan frente a los edificios de los grandes organismos internacionales que realizan veeduría de los derechos humanos como las Naciones Unidas, CIDH, entre otros.

"Aunque estemos lejos, estamos con ustedes" fue una de las frases que emergió en múltiples espacios transnacionales y manifestaciones. La expresión captura la presencia desde la distancia y cierto sentido de solidaridad, no solamente en su dimensión espacial de cercanía (y de estar lejos) e implica una dimensión de temporalidad en la cual está ubicada, que evocan los actores en sus acciones. Otra expresión fue 'Colombia amigo, XY país está contigo.'

8 Sin embargo, está más allá del alcance y enfoque de este estudio exploratorio rastrear los patrones y las diferencias en términos de estos importantes factores. Para estudios futuros sería considerar varios aspectos que no fue posible explorar con más profundidad en este estudio exploratorio. Todos los migrantes están situados en múltiples lugares sociales y ocupan posiciones específicas dentro de las jerarquías sociales y étnico-raciales (en sus lugares de 'origen' y en su 'destinaciones'). También comparten trayectorias migratorias diferentes que moldean sus subjetividades políticas y sus formas de compromisos políticos.

Múltiples públicos en el campo transnacional de la política diaspórica

En todos estos eventos aparecieron formas particulares de prácticas y expresiones culturales y símbolos nacionales, que expresan nostalgia y sentido de pertenencia cultural en una comunidad imaginada. Había símbolos patrios y productos regionales relacionados con la diversidad culinaria, café colombiano, canciones y danzas folclóricas y modernas de Colombia. En muchos de estos espacios de encuentro apareció el uso de cierta "intimidad" cultural que involucraba símbolos con significados y prácticas particulares que fomentaban cierta familiaridad cultural sintomática de las condiciones diaspóricas. Varios de estos eventos fueron organizados por redes de 'migrantes colombianos' en el exterior que de alguna manera ayudan a asentarse y ofrecen sitios para compartir información importante y práctica para los migrantes, así como espacios de colaboración y conexión en el exterior.

En esta ocasión, estos espacios sirvieron de encuentro para formular ciertos mensajes y manifestar sus posiciones en relación con lo sucedido en Colombia. Como describe un estudiante de posgrado en Alemania: "Lo que hacemos es pintar murales en cartón, tela o cualquier material que permita escribir o representar un mensaje." La idea de representar y comunicar ciertos mensajes para múltiples públicos (en diferentes idiomas) fue fundamental en las movilizaciones. Estos mensajes fueron creados y comunicados en un lugar donde se realizaban las protestas afuera, pero al mismo tiempo fueron compartidas por múltiples redes sociales y plataformas, que ha moldeado una 'temporalidad política compartida' (Bonilla y Rosa 2015).

Como recuerda una de las interlocutoras (estudiante colombiana en Alemania):

> "También ha habido música y composiciones de colombianos / as que se inspiran en la dinámica del paro en el país. Ha habido baile, por supuesto. … Hemos reunido dinero nuestro, haciendo "vaca" para comprar las pinturas, marcadores, cinta, lo necesario para crear. También una de las mujeres organizadoras nos llevó un día de lluvia y mucho frío: empanadas, café colombiano, ají y buñuelos hechos por ella. Esto nos incentivó aún más a pesar del frío y la lluvia a quienes estábamos ahí".

Sus palabras reconstruyen ciertas emociones y una intimidad compartida del espacio que ha sido estructurado por icónicas comidas, bebidas colombianas y otros símbolos culturales como canciones o bailes. Simbólicamente conecta e intensifica los sentimientos de unión en el contexto diaspórico. Sus palabras también contrastan las diferentes condiciones y el clima "frío y lluvioso" que soportaron con alegría, gracias al estado de ánimo colectivo que fue moldeado por motivaciones políticas y de solidaridad, pero también por la intimidad cultural compartida y el "ambiente acogedor".

Cuando pensamos en las acciones que tuvieron lugar en el espacio transnacional diaspórico, estas siempre están inscritas y situadas dentro de ubicaciones, posiciones y posicionamientos sociopolíticos particulares. También implican diferentes públicos y conversaciones en diferentes niveles entrelazados. Quienes viven en condiciones diaspóricas siempre experimentan estar y ocupar varios lugares y tiempos al mismo tiempo. Están ubicados físicamente en un lugar, pero también están configurados por las relaciones en otros lugares, que los hace estar permanente informados. Esto es particularmente importante en las movilizaciones y protestas. En los casos estudiados se ha podido delinear una lógica particular de los manifestantes, que interactúan con varias audiencias al mismo tiempo. Primero, las manifestaciones organizadas reunieron en la calle a una red de migrantes colombianos y actores no colombianos que, en términos generales, "se

preocupan" por los sucesos en Colombia. Se comunican entre sí, se encuentran en las calles y organizan formas particulares de expresión del descontento y protesta, acciones colectivas y mensajes simbólicos.

Sus acciones y expresiones de solidaridad y protesta se articulan a su entorno inmediato. Con frecuencia se trataba de ciudades y lugares de importancia simbólica como plazas principales o de importancia política (embajadas o consulados de Colombia). La evidencia indica que su presencia y política en la diáspora está orientada a visibilizar lo que está sucediendo en Colombia a los ojos de los públicos en sus contextos locales y nacionales. En algunos casos, esto llevó a la comunicación con los representantes estatales en los países y ciudades que habitan. En múltiples ocasiones, los manifestantes expresan y reclaman que el Estado en cual se ubican intervenga de alguna forma y se solidarice con sus demandas.

Las acciones colectivas en el espacio transnacional diaspórico han sido moldeadas por conexiones con Colombia y apuntaban, como mensaje simbólico, al mecanismo de poder en Colombia. Expresar el apoyo desde el exterior fue importante para las luchas políticas y los sentimientos de solidaridad entre los manifestantes en Colombia y los que expresaron su apoyo y vínculo emocional de solidaridad 'desde afuera'. También actuó como una forma de acción política para generar lo que podemos llamar "presión política transnacional" a las élites políticas colombianas para responder a sus reclamos y algunos llamamientos internacionales para detener los "usos excesivos de la violencia" o las "violaciones de derechos humanos".

Finalmente, es importante ampliar la visión analítica para que vaya más allá de las lecturas bidireccionales y bidimensionales entre Colombia y sus lugares de "inmigración". De hecho, estas formas de movilización en el exterior a menudo circularon y se comunicaron a través de múltiples públicos transnacionales,

transitando por diversos actores y espacios. Al crear registros digitales y documentar sus acciones a través de múltiples representaciones que fueron compartidas en las redes sociales y pronunciamientos, sus mensajes a menudo circularon de manera más global a través de estas redes y fueron seguidos y respondidos por otros que ocupan el campo diaspórico transnacional habitado por migrantes y otros actores colombianistas como académicos, periodistas u otros.

La dimensión globalizada y transnacional de estas luchas y mensajes se vio reforzada por el hecho de que, en algunas de las manifestaciones, las expresiones de solidaridad se dirigieron a los problemas actuales en Colombia y a otros conflictos internacionales. Así se pudo documentar en varias movilizaciones europeas en las que los manifestantes se solidarizaron con otros temas políticos. Por ejemplo, en algunos lugares los manifestantes portaban banderas de las luchas colombianas y palestinas. Un manifestante escribió el siguiente mensaje: 'Resiste como Palestina, lucha como Colombia'. Este tipo de mensajes capturan la solidaridad transnacional porque afirman que las luchas contra las múltiples formas de opresión y violencia son de importancia mundial.

Pero si bien estos múltiples públicos tomaron en cuenta los flujos de comunicación con los públicos locales, también tuvieron cuidado de no "perturbar" o "interrumpir" las normas locales y las condiciones de la pandemia. Los manifestantes no querían ser vistos como sospechosos o perturbadores de las regulaciones culturales, políticas y de otro orden. Así, de una manera muy disciplinada y organizada se han adherido al plan acordado. Varios migrantes hablaron de cierta conciencia y autodisciplina en relación con lo que pueden hacer en la sociedad de acogida. Sus protestas, su estética y formas de organizar y de expresar sus mensajes fueron moldeadas por la percepción y mirada constante que percibían en la sociedad de acogida. Esto se acentuó aún

más en las condiciones de la pandemia con varias restricciones de bioseguridad y distanciamiento y tiempos de reunión más limitados. Sus formas de protesta fueron moldeadas por esta autorregulación derivada de ser migrantes y de buscar la solidaridad y la atención precisamente a través de formas que resonaran y respetaran la sociedad de acogida en la que estaban inmersos. No querían ser vistos como 'alborotadores' y eso a menudo se relacionaba con cierta fragilidad de su estatus migratorio y la percepción de ser 'huéspedes' en medio de sus sociedades.

Reflexiones finales

En este texto hemos tratado de esbozar algunas reflexiones exploratorias sobre el rol, los mecanismos, las formas y los significados de la ola masiva de movilizaciones y apoyos desde el exterior - en particular desde el campo social transnacional de la diáspora colombiana con sus diversos actores. El Paro Nacional del 2021 en Colombia desencadenó una de las olas más masivas de pronunciamiento y participación en el exterior. En muchos casos estas acciones han surgido de la diáspora colombiana dispersa en diferentes países, pero estas movilizaciones también fueron moldeadas por otros actores preocupados por temas de justicia social, paz, democracia, derechos humanos o críticas globales al capitalismo neoliberal.

La mayoría de las acciones colectivas identificadas en este capítulo surgieron de redes preexistentes de la diáspora colombiana y de diferentes actores con relaciones profesionales o personales previas con Colombia. Por ejemplo, estas redes incluían grupos de personas que vivían en ciertos lugares y que tradicionalmente organizaban ciertos eventos culturales (y otros) o brindaban formas de apoyo a los migrantes recién llegados. Estas organizaciones incluían una amplia gama de actores, pero lo que parece unificarlos a todos en estos procesos de movilización y protestas fue el rechazo común a la violencia y la preocupación por el de-

bilitamiento de la democracia visible en las formas actuales de gobernar la crisis.

Las fuerzas sociales y las razones que han motivado a la gente a protestar y organizarse junto con otras personas en las calles de diferentes ciudades en el extranjero fueron similares a las preocupaciones que muchos manifestantes expresaron en las calles de Colombia. Destacaron su preocupación por la desigualdad, además de estar particularmente preocupados por la violencia estatal ejercida por las fuerzas policiales. Se manifestaron por lo que algunos describieron en sus mensajes como "democracia" y "paz". Les preocupaba la violencia y las condiciones actuales que imposibilitan el futuro de vidas viables y dignas para muchos colombianos, especialmente para las futuras generaciones. También es importante resaltar que los manifestantes varían en sus posiciones y tipos de críticas más específicas.

Al igual que muchos otros migrantes (cf. Sayad, 2010), estar en el exterior reconfigura su posición frente al Estado colombiano y en relación con él. Si bien esta relación ya estaba de alguna manera 'rota' y era 'ambigua' por el solo hecho de buscar otra sociedad para 'salir adelante' y construir vidas más viables (en ese sentido, viendo al Estado colombiano como incapaz de proveer las condiciones suficientes para sus anhelos de un mejor futuro), se transformó aún más a través del momento presente en el que muchos salieron a las calles para enviar un mensaje al Gobierno colombiano (mientras protestaban al frente de las embajadas y consulados), pero también implican de manera importante a la sociedad de acogida y al Estado anfitrión como una especie de 'testigo imaginado' y también como otro actor al que llamaron para involucrarse e intervenir.

Las personas que están en el extranjero también experimentaron una sensación particular de contradicción, de estar divididas y desesperadas. Para muchos de ellos, estar en el exterior en el momento en que sus "hogares" y familiares colombianos vivían

el Paro Nacional (2021) con todas sus tensiones y violencias fue frustrante y se sentían impotentes para protegerlos. Salir a la calle era una forma de hacerse más presentes, más visibles, estar más conectados y comprometidos y, de alguna manera, "más cercanos".

Muchos participantes en el espacio diaspórico de las protestas se sentían preocupados y ansiosos por lo que estaba sucediendo en Colombia en dos niveles interconectados y en escalas sociales y espaciales. Primero, sus discursos revelaron su preocupación por la nación imaginada y la sociedad. En segundo lugar, esto estaba directamente relacionado con el cuidado, la seguridad y las preocupaciones de sus familiares y amigos en sus ciudades y pueblos de origen. Para muchos estar en la calle estaba relacionado con sentimientos de impotencia, rabia y sufrimiento por estar lejos de lo que estaba pasando en Colombia. También se sintieron tensos y extraños cuando los medios internacionales inicialmente apenas informaron sobre lo que estaba sucediendo en su país de origen y se esperaba que continuaran con sus trabajos y actividades diarias como 'normalmente' en sus contextos migratorios. Algunos expresaron sentimientos más generales en relación con la nación y la sociedad: "¡Como duele mi país!" Esto estaba relacionado con las preocupaciones y protestas por la democracia y el respeto a los derechos humanos que sentían que estaban siendo atacados violentamente en Colombia. Otros también sintieron preocupaciones más directas y específicas por sus familias y amigos. Por ejemplo, una migrante describió su preocupación por la seguridad y el bienestar de su abuela, que vivía cerca de uno de los "puntos de concentración". Se mantuvo en contacto y llamó a su abuela, pero también revisó ansiosamente otras redes que informaban sobre noticias de acciones, protestas e intervenciones del ESMAD en el barrio.

Las acciones y palabras en espacios de protesta transnacionales particulares en otros lugares en el exterior durante estos tiem-

pos del Paro Nacional también revelaron ciertas temporalidades que se entrecruzan con el momento y las acciones presentes. El turbulento presente en Colombia trajo recuerdos del pasado y puso en primer plano las circunstancias y contradicciones que sintieron al decidir migrar en el pasado. Estos recuerdos del pasado con todos sus dilemas se entrelazan en formas particulares con el anhelo de futuros mejores a través de las manifestaciones en el presente y las formas de solidaridad expresada. Ellos conectan íntimamente sus propios viajes personales y experiencias cotidianas de convertirse y de ser migrantes con anhelos por un mejor futuro colectivo para Colombia y su sociedad. Esto está bien ilustrado en un comentario: "Estamos aquí hoy para que otros no tengan que migrar como nosotros (para buscar mejor futuro)".

Para algunos, la participación en las movilizaciones también les ha traído sus propios recuerdos y circunstancias bajo las cuales emigraron. Muchos no necesariamente fueron estudiantes que se fueron a estudiar al exterior con becas de apoyo. En cambio, los que se fueron lo hicieron por otras circunstancias, que los obligaron a buscar mejores oportunidades en otros lugares. Algunos de los migrantes se fueron debido a condiciones socioeconómicas de pobreza o de violencia. Pero la mayoría sintió y fue impulsada a migrar por el sentimiento de que podrían construir un futuro más viable para ellos mismos o para sus hijos en otro lugar (mientras posiblemente también apoyaran a sus familiares que se quedaron atrás a través de las remesas). Entonces, seguir desde el exterior las protestas en su lugar de origen hizo que muchos de ellos reflexionaran sobre sus propias decisiones y situaciones de migración. Algunos migrantes sintieron como una confirmación de que su decisión de buscar mejores futuros estaba justificada, pero también como una obligación moral de apoyar y solidarizarse. Para otros fue un acto de acción orientada hacia la búsqueda de un futuro para Colombia, que la haga un

lugar donde las personas puedan construir su vida y no se vean obligadas a emigrar al exterior en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, para otros funcionó como un recordatorio doloroso y más como una fuente de preocupación, rabia y tristeza por lo que está sucediendo en Colombia.

Finalmente, uno de los hallazgos más importantes de esta exploración comparativa de diferentes formas de protestas y movilizaciones en los espacios transnacionales de la diáspora fue el esfuerzo por demostrar que se puede estar presente a pesar de estar lejos. Esto se vio a nivel de discursos, símbolos y signos, pero también de manera crucial a través del uso intensivo de los medios de las redes sociales digitales (Facebook, Twitter, Instagram y otros). Estos medios actúan como vehículos y canales que permitieron compartir eventos que estaban teniendo lugar en múltiples ubicaciones en todo el mundo, pero también participar "en línea" en eventos que ocurren en Colombia. Hubo una circulación fluida de imágenes, videos, comentarios, "me gusta", pero también transmisiones en vivo en Facebook. En ese sentido, lo que caracteriza a las movilizaciones en curso es el despliegue de redes sociales digitales que lo convirtieron no solo en un fenómeno nacional sino crucialmente global. Estas redes digitales crearon condiciones de posibilidad de estar socialmente "presentes en acciones" a pesar de estar físicamente distantes.

En un mundo de migrantes marcado por la condición que A. Sayad llamó "una doble ausencia", unirse a las movilizaciones no solo fue una señal de crítica y cuidado por sus conciudadanos en Colombia, sino también un esfuerzo por estar presente. Como bien lo dijeron varias personas en múltiples eventos que habitan el espacio diaspórico: "Aunque estemos lejos estamos con ustedes".

Referencias

Bonilla, Y. y Rosa, J. (2015). #Ferguson. Digital protest, hashtag ethnography, and the racial politics of social media in the United States. *American Ethnologist* 42 (1): 4–17.

Juris, J. (2012). Reflections on #Occupy Everywhere: Social media, public space, and emerging logics of aggregation. *American Ethnologist* 39 (2): 259–279.

Sassen, S. (2007). *Una sociología de la globalización*. Buenos Aires: Editorial Katz.

Sayad, A. (2010). *La doble ausencia: de las ilusiones del emigrado a los padecimientos del inmigrado.* Barcelona: Anthropos.